

15

**juchitān:  
límites de una  
experiencia democrática**

**moisés j. bailōn corres**

**sergio zermēño**

JL1299.J83  
B35  
036125



**instituto de investigaciones sociales  
universidad nacional autōnoma de mēxico**

# demografía

## 4. Tres ensayos sobre migraciones internas

Brígida García, Orlandina de Oliveira y Humberto Muñoz

## 7. La mortalidad intrauterina en México

Marta Mier y Terán y Cecilia Rabell

# sociología agraria

## 13. Estrategias de sobrevivencia de los campesinos mayas

Arturo Warman

# sociología de la cultura

## 2. El científico en México: la comunicación y difusión de la actividad científica

María Luisa Rodríguez Sala de Gomezgil, Adrián Chavero y Aurora Tovar

## 10. Sociología y Semiología

Regina Jiménez-Ottalengo (compiladora)

## 11. El Estado y la política de la ciencia en México

Rosalba Casas

## 12. Sociolingüística de la interacción

Regina Jiménez-Ottalengo y Georgina Paulín-Siade

sist. 0557248

DS 36125

✓ 12/299. J83

B35

DS. 036125

11.557248



**JUCHITÁN: LÍMITES DE UNA  
EXPERIENCIA DEMOCRÁTICA**

Cuaderno de Investigación  
Social núm 15

*INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES*

*Director:* Carlos Martínez Assad

*Secretario académico:* Rafael Loyola Díaz

*CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL*

*Editor:* Ignacio Marván Laborde

*Edición al cuidado de:* Ma. Guadalupe Sánchez Olea

*Portada:* Waldo Gomezgil

*Distribución:* Armida Vázquez Alarcón

Torre II de Humanidades, 7o. piso, Ciudad Universitaria

04510, México, D.F.

**INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES**

# JUCHITÁN: LÍMITES DE UNA EXPERIENCIA DEMOCRÁTICA

Moisés J. Bailón Corres

Sergio Zermeño



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  
SOCIALES  
BIBLIOTECA

Universidad Nacional Autónoma  
de México

México, 1987

Primera edición: 1987



D.R.© Universidad Nacional  
Autónoma de México

Ciudad Universitaria, 04510 México, D.F.

Instituto de Investigaciones Sociales

Impreso y hecho en México

## PRESENTACIÓN

*Coyote atrapa a conejo y Juchitán: la cólera del régimen*, textos elaborados respectivamente por Moisés J. Bailón y por Sergio Zermeño, nos presentan desde diferentes puntos de vista el análisis de la trunca experiencia democrática que vivió a principios de esta década la comunidad juchiteca. Ambos estudios parten del reconocimiento del arraigado sentimiento de identidad regional que ha prevalecido en esa zona del país, del examen de la confrontación clasista que se desarrolla en el municipio de Juchitán y de las contradicciones y limitaciones que esta lucha imprime a la democracia local. Analizan también el papel central de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI) en el desarrollo de esta experiencia; destacan el carácter del movimiento que logra articular la demanda popular de democracia con la cultura y las tradiciones de la región.

Centrado en la política local, el trabajo de Bailón aborda los conflictos clasistas que marcan a la región y al propio estado de Oaxaca en un equilibrio entre los elementos estructurales que determinan la lucha por el poder municipal y el desarrollo de la coyuntura del mismo, entre la historia y la evolución inmediata de la correlación de fuerzas. Por su parte, Zermeño logra una combinación heterodoxa entre la experiencia personal, el reportaje, la denuncia del autoritarismo del régimen y la reflexión amplia sobre el conflicto en torno del poder local y el movimiento social que lo protagoniza.

Sin lugar a dudas, ambos textos contribuyen al entendimiento de las dificultades de expresión política que, en el sistema político mexicano, tienen actualmente los movimientos regionales con arraigo y proyecto político propio.

I.M.



# **COYOTE ATRAPA A CONEJO**

**PODER REGIONAL Y LUCHA POPULAR—EL  
DESCONOCIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO  
DE JUCHITÁN EN 1983.**

**MOISÉS J. BAILÓN CORRES**



## EL CONTEXTO DE ESTUDIO\*

*La región.* El Istmo oaxaqueño forma parte de una región mayor conocida nacionalmente como Istmo de Tehuantepec —que comprende parte del estado de Veracruz. Constituye una extensa planicie que abarca los distritos rentísticos y judiciales de Tehuantepec y Juchitán —cuarenta y un municipios en total—, los más grandes del estado de Oaxaca. Como la mayor parte del área posee poco relieve, la definición de la región ha sido más fácil de establecer que las seis restantes —la Costa, la Cañada, la Mixteca, los Valles, la Sierra y el Papaloapan. Las altas montañas de los distritos Mixe y Yautepec han sido barreras naturales para que la historia y cultura del Istmo sean diferentes de las de otras regiones del estado; geográficamente, está más unido a Veracruz que al centro del estado, asiento del poder gubernamental.

La región es rica en recursos naturales y comunicaciones. Por sus linderos cruzan tres carreteras —la Transístmica, la Panamericana y la Costera—, dos ferrocarriles —el Nacional de Tehuantepec y el Panamericano—;

\* Agradezco a Rodolfo Stavenhagen y a Carlos Martínez Assad los lineamientos para estructurar este trabajo. Las deficiencias son completamente responsabilidad mía.

además es un espacio de atención de la inversión gubernamental. La instalación de la Refinería del Pacífico de PEMEX y la continuidad de las obras de un sistema de transporte multimodal internacional a través del Istmo —el Plan Alfa-Omega—, perfilan elementos de un polo industrial-portuario en la zona. Pero desde unas dos décadas atrás se han iniciado las instancias de modernización: existen actualmente dos ingenios azucareros, una fábrica de cemento "Cruz Azul", una calera, una flota de cooperativas pesqueras de alta mar, dos astilleros y otras pequeñas industrias. Ahí existen, además, la mayor cantidad de tierras de riego de la entidad —el distrito núm. 19, dirigido por la SARH, con una capacidad actual de más de 50 mil hectáreas irrigadas (Bailón, 1981: 11 y 37).

El distrito de Juchitán está integrado por veintidós municipios: Matías Romero, San Miguel y Santa María Chimalapa, San Juan Guichicovi, Santo Domingo Petapa, El Barrio, Ixtepec, Ixtaltepec, El Espinal, Unión Hidalgo, Santo Domingo Ingenio, Niltepec, Santo Domingo Zanatepec, Santa María Xadani, San Dionisio y San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, Reforma de Pineda, Tapanatepec, Chauites, Santa María Petapa y Juchitán de Zaragoza. La cabecera de este

último municipio, la ciudad de Juchitán, es además la cabecera distrital.

*Los pasos de Juchitán.* Históricamente, la población más importante de la zona fue Tehuantepec, asiento de la administración gubernamental —durante la Colonia y la época independiente— de los españoles y demás extranjeros avencindados en el área, pero también de indígenas zapotecas y de otras nacionalidades que fueron llevados ahí para poblar el lugar.

Tanto Juchitán como Tehuantepec pueden ser vistas como poblaciones ejemplares. Por la forma en que se dio la colonización en el sur de México —dominación global y explotación española, pero reproducción de las formas de organización y vida comunitaria ha sido Juchitán la que ha levantado su identidad zapoteca para defenderse y luchar contra lo externo; de ahí que durante el siglo XIX se haya desarrollado una gran rivalidad entre las dos poblaciones. La pugna se expresó, por un lado, por su diferente afiliación política en el periodo de consolidación de la nación mexicana; en las largas luchas después de la Independencia, Juchitán se adhería a las fracciones contrarias a las que se había incorporado el grupo dominante de Tehuantepec —los habitantes de los barrios centrales de esta población, de origen no indígena. Por otro lado, Juchitán buscó siempre romper con el control político que Tehuantepec tenía por ley sobre la población: primero luchó, hasta conseguirlo, por transformarse de pueblo en villa, luego consiguió la creación de su propio departamento —en 1858— y más adelante obtuvo la categoría de ciudad, que sólo había sido privilegio de Tehuantepec (Bailón, 1981: 27-33).

Las diferencias, aunque ahora no se expresan violentamente, continúan con la transformación de Juchitán, de una población de indios dedicada principalmente a la agricultura familiar, en la principal población de la región —compartiendo con Salina Cruz la primacía. Su ubicación, en el cruce de dos carre-

teras y el paso de un ferrocarril, la coloca como el centro abastecedor del área por la importante actividad comercial que ahí se desarrolla, tanto en comercio de productos industriales como de alimentos y productos agrícolas. Existen, además, dos embotelladoras de refrescos, un molino de arroz, una fábrica de cal, una impregnadora de durmientes de ferrocarril, distribuidoras de autos y maquinaria agrícola y otras pequeñas industrias. Además de que hay varias dependencias gubernamentales, en el municipio está la mayor cantidad de tierras beneficiadas por el distrito de riego.

Juchitán es uno de esos extraños pueblos con historia propia. A diferencia de otras poblaciones donde la historia nacional les da su identidad, Juchitán asimila la historia de los grupos que dominan la nación, pero como complemento de una historia local que se enriquece, vive y trasmite por tradición oral, con su propio santoral de héroes y su propia mitología. Esto le ha dado un sentimiento de colectividad, autonomía e identidad de ser juchiteco o "teco", identificable dentro de la población o en cualquier espacio nacional en que dos nativos se encuentren. La historia oral de los juchitecos habla de la derrota que infligieron a los franceses en 1866, de sus enfrentamientos con Juárez por defender sus salinas, del levantamiento de Che Gómez en 1911 contra el régimen porfirista y de las jornadas de los batallones juchitecos al mando de Charis Castro en los años de consolidación del Estado posrevolucionario.

Aunque no pueda definirse el Juchitán pasado como una comunidad homogénea socioeconómica y étnicamente hablando, creo que ha sido hasta las últimas décadas con la llegada del proceso modernizador a la región, cuando han surgido las contradicciones internas de manera más abierta y se han gestado fuertes luchas sociales. Si la cultura juchiteca —fusión de lo zapoteco y la historia política de la comunidad— coexiste y persiste junto con los elementos de modernización, podría decirse que esas luchas son tanto expresión

de la resistencia a desgajarse como vida colectiva, como expresión del proceso de penetración que transforma sus formas anteriores de existencia. Podría agregarse también la hipótesis de un posible movimiento de redefinición de esa misma conciencia colectiva de lo juchiteco, ahora penetrado por luchas entre grupos de la misma población.

El problema social más importante en Juchitán, el eje de lucha de la COCEI, es el relacionado con la reproducción de las condiciones materiales de vida de la sociedad local: la tierra comunal. Los conflictos en el Juchitán moderno se inician con la creación de la Presa de Almacenamiento "Benito Juárez" y el Distrito de Riego número 19 en 1961.

El proyecto de una obra para controlar las torrenciales avenidas del río Tehuantepec —que inundaban la ciudad de este mismo nombre año con año— y para utilizar la fuerza destructora del agua como medio de desarrollo se inició en 1934 cuando Lázaro Cárdenas llegó a Tehuantepec en campaña presidencial. Los comerciantes y agricultores de esta población le solicitaron al candidato su apoyo para la obra. En 1935, la Comisión Nacional de Irrigación inició los estudios y la construcción de una pequeña obra de almacenamiento, la presa derivadora "Las Pilas", terminada y puesta en funcionamiento a finales del periodo de Ávila Camacho. En 1953, los trabajos fueron reiniciados por la SRH. Para la elección del lugar propicio se debería tener en cuenta los siguientes puntos: que controlara las torrenciales avenidas que inundaban la parte baja del valle de Tehuantepec y que almacenara agua suficiente para irrigar cincuenta mil hectáreas (SRH, 1984: 15). La obra mayor se inició en 1954 y fue inaugurada el primero de diciembre de 1961 por Adolfo López Mateos.

Sin embargo, a pesar de haber sido los tehuantepecanos los que tradicionalmente habían utilizado el agua del río para pequeñas obras de riego, ya que la mayoría de las tierras de este municipio se encuentran en la

parte sur del Tehuantepec en una zona con mayor elevación, el distrito de riego vino a beneficiar más que nada a otros municipios, y principalmente al de Juchitán. (Alguien ha expresado que quizá la decisión final de la población beneficiada pudo estar mediada por la intervención del juchiteco Charis, entonces hombre fuerte de Juchitán, o por el papel histórico de Juchitán en favor de las causas nacionales en la historia y la afiliación de un sector de tehuantepecanos a los franceses, a los conservadores y al propio porfiriato).

*La lucha reciente.* Desde 1949, los campesinos juchitecos venían gestionando la confirmación de sus terrenos comunales que poseían desde la Conquista por mercedes reales que la Corona les concedió, pero cuyos títulos primordiales fueron devorados por un incendio a principios del siglo XVIII.

El 17 de junio de 1964 se extendió un decreto presidencial —por parte de López Mateos— a los juchitecos donde se les legalizaba la posesión pero bajo la forma de concesión ejidal. Las nuevas condiciones de infraestructura de la zona hacen que el Estado busque integrar al campesinado a los canales institucionales de crédito, cultivos comerciales y control oficial cambiando el régimen de comunal a ejidal a través del decreto. Se concedían 68 112 hectáreas a Juchitán y poblaciones cercanas. Pero ahí se originaría un conflicto. Desde hacia tiempo, algunas familias habían acaparado importantes extensiones de origen comunal, y el decreto, de implantarse completamente, restituiría los terrenos a la comunidad. Los rumores que decían que con la creación del sistema de riego y el decreto del ejido las tierras se repartirían también a campesinos de otras regiones condujeron a un sector del campesinado juchiteco a enfrentar la decisión presidencial y a plantear una alternativa. Inician sus trámites en 1965. El 31 de mayo de 1966, Gustavo Díaz Ordaz autorizó un acuerdo, a través del Cuerpo Consultivo Agrario, que alteró el decreto presidencial anterior y cimentándose en él —al parecer de manera ilegal— entregó

2 500 títulos de propiedad que protegían unas 25 mil hectáreas del distrito irrigado. Por un lado, la dotación ejidal alteró la posesión comunal tradicional y, por el otro, al pasar por el decreto presidencial y no atenerse a sus lineamientos se creó una forma de propiedad única en el país: la propiedad privada de origen comunal.

La lucha entre los dos grupos agrarios se ha expresado en las elecciones municipales y, principalmente, en el control del comisariado comunal de Juchitán, única autoridad que el gobierno podría reconocer para la gestión de la aplicación de los decretos en materia presidencial. La lucha por la recuperación de las tierras comunales cobró mayor fuerza con la aparición de la COCEI, y el Estado ha procedido reprimiendo su movimiento o bien posponiendo indefinidamente desde hace varios años la elección del comisariado. En 1981, con el control del ayuntamiento, parecía que

la Coalición lograba que el gobierno aceptara finalmente elegir a los representantes agrarios, sin embargo, los propietarios se ampararon y nuevamente se suspendió el proceso.

Este traslape legal de formas distintas de tenencia de la tierra para una misma extensión no sólo es reflejo de los mecanismos de control agrario del sistema mexicano, sino que además expresa la agudeza del conflicto social en Juchitán y las formas en que el gobierno busca dirimirlo y mediatizarlo.

Para 1980, de las 50 807 hectáreas del distrito de riego, 32 995 correspondían a Juchitán y sus anexos, la mayoría de ellas reclamadas por los comuneros. El propio sistema administrativo de riego reconocía cuatro formas de tenencia en ese año: comunal, ejidal, privada de origen comunal y privada de origen, como se puede apreciar en el cuadro que sigue (SARH, 1980).

#### SUPERFICIE DE RIEGO PARA EL MUNICIPIO DE JUCHITÁN Y SUS ANEXOS POR TIPO DE TENENCIA DE LA TIERRA Y NÚMERO DE BENEFICIADOS

	<i>Poseción Comunal</i>		<i>Pequeña Prop. de Origen Comunal</i>		<i>Poseción Ejidal</i>		<i>Pequeña Propiedad de Origen Ejidal</i>	
	Has.	Bene- ficiados	Has.	Bene- ficiados	Has.	Bene- ficiados	Has.	Bene- ficiados
<b>POBLACIÓN</b>								
Juchitán y anexos <sup>1</sup>	4 906	(981)	25 175	(3 187)				
La Venta <sup>2</sup>					1 502	(267)		
La Ventosa <sup>3</sup>					662	(121)		
Alvaro Obregón <sup>4</sup>							750	----
<b>TOTAL DISTRITO RIEGO<sup>5</sup></b>	<b>11 607</b>	<b>(2 001)</b>	<b>27 675</b>	<b>(3 887)</b>	<b>8 236</b>	<b>(1 499)</b>	<b>3 289</b>	<b>(800)</b>

<sup>1</sup> Además de la población de Juchitán, los anexos son: Sta. María Xadani, El Espinal, la Ventosa, Unión Hidalgo y Chicapa de Castro. Sólo pertenecen a la jurisdicción municipal la Ventosa y Chicapa.

<sup>2</sup> Agencia Municipal de Juchitán.

<sup>3</sup> Agencia Municipal de Juchitán.

<sup>4</sup> Agencia Municipal de Juchitán.

<sup>5</sup> Las demás poblaciones beneficiadas con el riego son: San Pedro Huilotepec, San Blas Atempa, Tehuantepec, Comitancillo, Ixtaltepec, Guichivere y Aguascalientes, estas dos últimas forman parte del municipio de Tehuantepec.

## I. LA HEGEMONÍA DEL MOVIMIENTO SOCIAL

### 1. SINOPSIS

#### *Los hechos recientes*

La madrugada del 13 de diciembre de 1983 cerraba la coyuntura política más difícil para el gobierno estatal de Oaxaca en los últimos seis años. Desde marzo de 1980, la Coalición Obrero, Campesino, Estudiantil del Istmo (COCEI, en lo sucesivo), en alianza con el PSUM, habían encabezado el ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, segundo en importancia económica y social de la entidad. En Oaxaca y Juchitán la policía estatal, judicial y uniformada realizaba el desalojo simultáneo de los Palacios de Gobierno del Estado y Municipal que habían sido tomados por simpatizantes de la COCEI como protesta por los resultados de las elecciones municipales del 20 de noviembre. Aunque en Oaxaca el desalojo se hizo sin mayor dificultad, en Juchitán, luego de la sorpresiva acción policiaca, la población se aglutinó frente al palacio municipal llamada por los toquidos de la iglesia de San Vicente Ferrer, como en los legendarios tiempos de las revueltas antigobiernistas en el siglo XIX y principios del presente. La amenazante movilización de los simpatizantes de la COCEI hizo necesaria la presencia de

destacamentos militares de la zona de Ixtepec —a pocos minutos de Juchitán—, ya que existe una tradición ancestral de odio y falta de temor hacia la policía estatal, "azules" en el lenguaje popular del Istmo. Un día antes había sido desalojado el edificio municipal de ciudad Ixtepec, tomado también por coceístas como protesta contra un argumentado fraude electoral en ese municipio.

Con el desalojo, el gobierno estatal empezaba a afianzar una política tradicional de favorecimiento de los grupos económica y políticamente dominantes en la entidad sureña. El 3 de agosto, la Cámara de Diputados local había decretado la desaparición de poderes en el Ayuntamiento juchiteco dando el golpe más importante para redefinir las relaciones políticas en los últimos años. Los veintiocho meses que la COCEI dirigió el ayuntamiento de la ciudad istmeña habían sido una terrible pesadilla para el gobernador y su equipo, así como para el partido oficial y para los intereses de los grupos dominantes de Oaxaca. Aunque la entidad en los últimos diez años había estado inmersa en expresiones de descontento, movilización y rebeldía popular, —dentro del campesinado, grupos indígenas, parte de grupos urbanos de estudiantes y trabajadores asalariados—, había sido la pri-

mera ocasión que un poder —por pequeño que pueda considerársele— constitucionalmente delegado era ejercido por la dirección de un movimiento social profundamente popular.

Los meses del gobierno municipal de la COCEI fueron marcados por la necesidad constante del movimiento social que la sostiene por expresarse mediante movilizaciones masivas, declaraciones y expresiones escritas —políticas e incluso plásticas. Las características del poder regional en México hicieron forzosa esta intensa actividad de afirmación del ayuntamiento y su base social como instrumental para proteger y sostener una situación institucional, hostigada desde el primer día de gestión de diversas instancias del poder en la entidad. Paradójicamente, el acoso de las instancias gubernamentales y no gubernamentales, locales y foráneas, violentas y encubiertas, fue tanto causa como resultado del fortalecimiento del movimiento social en Juchitán. Mientras la represión no asumió, de manera permanente, tintes de violencia física por parte del Estado, el ayuntamiento y el movimiento social que lo sostenía crecieron fortaleciéndose y ocasionando una unidad indisoluble entre ambos. El acoso sobre las autoridades de Juchitán propició una identificación con el movimiento social de la COCEI, y como éstos tenían localmente una oposición, el alineamiento de las fuerzas políticas presentó de manera permanente un esqueleto de enfrentamiento físico latente.

Al desalojo de los edificios públicos en diciembre siguieron algunos enfrentamientos físicos el día primero de 1984, fecha en que toman posesión las autoridades municipales en Oaxaca. Un nuevo ayuntamiento priísta asumía funciones en la población tropical para sellar, al menos durante tres años, el acceso al poder municipal a la COCEI. Durante casi dos años —de marzo de 1981 a febrero de 1983—, el ayuntamiento de la COCEI pudo sostener un ritmo de lucha y enfrentamiento con distintas fuerzas a nivel local,

regional y estatal de distinta naturaleza: grupos sociales, delegaciones del gobierno estatal y federal, organizaciones gremiales y partidarias, Legislatura del Estado y funcionarios individuales, sin embargo, el último año de su gestión, 1983, marca la coyuntura del desgaje de sus posibilidades de movilización, negociación y triunfo de sus demandas frente a sus opositores. Para el cambio de las condiciones de vida del ayuntamiento popular contaron no sólo la fuerza y cohesión del cabildo y su movimiento social, sino también la forma en que las distintas fuerzas sociales y políticas de la entidad se alineaban a principios de 1983.

### *Reconstruir los hechos*

Para penetrar en la maraña de los acontecimientos, en la inmensa red de hilos gruesos y delgados, invisibles y visibles, negros y blancos que presenta la situación del ayuntamiento de Juchitán y su lucha para de ahí encontrar una explicación orgánica de la caída de las autoridades y de la forma en que distintas fuerzas y grupos sociales participaron, es necesario saber primero la historia para luego atar cabos. Se trata de encontrar la ubicación de este episodio de las luchas sociales en Oaxaca en un contexto que sea estructural. En el caso de la COCEI, se pueden apreciar tres momentos importantes: el del triunfo de la planilla municipal del PSUM y la Coalición, el de la gestión del ayuntamiento coceísta y el del desconocimiento del mismo. Nos interesa este último, el que si bien puede diferir episódicamente de los anteriores, está relacionado con ello ya que posee rasgos comunes y en todos se puede encontrar lo que de estructural y posible del poder regional existe en una entidad como Oaxaca.

En 1983 hubo un acontecimiento que puede marcar un corte en la correlación de fuerzas en relación con el caso de Juchitán. Aunque una movilización política por sí sola no puede considerarse un acontecimiento en

términos del análisis —que exprese relaciones y líneas de fuerza—, en este caso parece útil considerarlo así. El hecho fue la marcha campesina que inició su recorrido el 13 de febrero, rumbo a la capital del estado, organizada por el ayuntamiento y la COCEI. Antes y en el desenlace de la marcha se puso en evidencia que la movilización y agitación políticas permitían soluciones negociadas con las autoridades estatales y federales. Sería el último momento en que esto ocurriría. Esta movilización campesina también marcaba un nuevo aspecto de la política de la COCEI; su propio impulso como ayuntamiento y movimiento social fundidos le permitían abrirse y penetrar en otras poblaciones de la región del Istmo. Esto se debía a dos aspectos: a) el compartir Juchitán y otros pueblos condiciones de infraestructura y problemática agraria en el Distrito de Riego núm. 19, y b) porque la estructura política oaxaqueña, al refuncionalizar los distritos políticos porfirianos en entidades de justicia y administración, llevaba a las poblaciones del Distrito de Juchitán a relacionarse más de cerca con las autoridades municipales de la cabecera distrital, cuya sede es la ciudad de Juchitán. La marcha campesina realizada en febrero fue para la burguesía oaxaqueña, para el gobierno estatal y para el PRI una sombra anticipada del futuro de la COCEI de seguir en el poder; a las demandas y movilización de juchitecos se incorporaban campesinos y exigencias de otras poblaciones istmeñas —e incluso de una población indígena en el extremo opuesto de la entidad, los triquis de Copala. Era el último momento de negociación del gobernador y el de mayor capacidad negociadora de la COCEI ante las repercusiones estatales y nacionales de la situación.

## 2. LOS ADVERSARIOS DEL AYUNTAMIENTO

De marzo de 1981 a los primeros meses de

1983, la autoridad juchiteca había enfrentado al gobierno del estado y al Comité Directivo Estatal del PRI, a los comerciantes y empresarios juchitecos, a los terratenientes del Distrito de Riego y a los priístas del municipio no como fuerzas unificadas. Estos actores sociales colectivos, adversarios del ayuntamiento y su base social, tenían diferencias y aun fricciones entre sí en lo que respecta a la forma en que habría que combatir a la autoridad municipal, lo cual había imposibilitado un funcionamiento orgánico entre ellos. El caso más evidente era el que existe entre el llamado Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo Juchiteco (CCDDPJ), por un lado, y, por el otro, el gobernador y el CDE del PRI en Oaxaca.

Quien enfrentaba a la COCEI con mayor violencia material era el CCDDPJ. Desde finales de 1981 y durante 1982 ocurrieron agresiones y enfrentamientos entre ambas fuerzas, con saldos de vidas humanas y lesionados. No obstante lo anterior, el ayuntamiento veía iniciarse su último año de actividades con poderío político que empezaba a trascender el área municipal.

A principios de año, la autoridad había realizado movilizaciones para lograr incrementos en las participaciones municipales y concesión de créditos para obras públicas en su jurisdicción, efectuaba algunas obras de bacheo y pavimentado de calles y reconstruía el derruido y centenario Palacio Municipal, mantenía parques, jardines y mercados y preveía la construcción de otro de éstos en Cheguigo, barrio cocelista. No había logrado, sin embargo, culminar la promesa de un puente que uniera Cheguigo Sur con el resto de la ciudad, a pesar de haberse efectuado una campaña de recolección de fondos. Se habían recuperado inmuebles y propiedades del municipio que se encontraban en manos de particulares. Los logros más relevantes y con mayor impacto en el exterior eran de carácter cultural. Se había construido una Biblioteca y una Preparatoria Popular dependientes del

ayuntamiento; se había instrumentado una campaña de alfabetización municipal y se hacía un importante trabajo de recuperación de la cultura, tradición e historia juchiteca a través de publicaciones periódicas del ayuntamiento —con la Revista *Guchachi reza* y folletos de historia regional cuyo peso puede ser mayor en el exterior del municipio que en el interior ya que en Juchitán predomina la tradición oral.

El primer día de 1983 salía al aire, por la vía de los hechos ya que no contaba con autorización oficial, Radio Ayuntamiento Popular (XEAP); el día 16, con un acto político, inauguraba oficialmente sus transmisiones (*Horà cero*, núm. 91, Oaxaca, 15 de diciembre de 1983). Aunque inmediatamente la señal fue bloqueada por la Secretaría de Comunicaciones, la transmisión continuó hasta el desalojo en el mes de diciembre gracias a la colocación móvil del cuadrante. La aparición de la radio del Ayuntamiento es un hecho trascendente en la comunicación estatal y nacional; por primera vez una autoridad local creaba un canal propio de expresión herztiana, autónomo, para contrarrestar la campaña de agresiones desatadas en toda la radiodifusión de la región istmeña. El hecho es notable porque en esta parte de la entidad el medio de comunicación más importante es el radio —no hay prensa y las transmisiones radiales absorben incluso la vida cotidiana de la región: las fiestas, bodas, mayordomías y todo acto cívico son transmitidos por este canal. Sin embargo, el hecho más importante es que expresa un compromiso con la cultura local, con el pasado y la memoria histórica del pueblo de Juchitán y la vinculación de éstos con la lucha social de un sector importante de sus pobladores. Además, fue la primer radio independiente que alternó en México el español con una lengua de origen indígena —el zapoteco— como tónica dominante de la comunicación.

La actividad cultural del ayuntamiento —entendida no en un sentido neutral, sino

como forma de vincular la identidad histórica y la subjetividad de las masas juchitecas con la lucha presente de su ayuntamiento y su movimiento social— continuó con la creación de la Escuela Normal Superior del Istmo el 20 de enero de 1983 con apoyo de la Universidad de Guerrero. En los meses venideros, cuando el ayuntamiento sufriría el embaute que finalmente lo desconoció, el gobierno oaxaqueño acusaría de violación de la soberanía de la entidad por la creación de esa Normal al no haberse consultado al respecto.

### *La organización priísta*

El priísmo juchiteco había sido aglutinado en un movimiento conservador de oposición al ayuntamiento que intensificaba tácticas de provocación, tendientes al enfrentamiento físico, desde la promulgación del llamado "Plan de Juchitán", el 10 de noviembre de 1981. En ese documento se plantea como meta única acabar con la dominación municipal de la COCEI. Pero era un movimiento que se generaba a la zaga de la dirección del partido e incluso existían enfrentamientos entre el gobernador y el Comité Directivo Estatal del PRI y el CCDDPJ. El resentimiento de los priístas de Juchitán se debía a que creían haber sido traicionados por el gobernador y la dirección oaxaqueña del partido al aceptar la anulación de las elecciones municipales de 1980 y haber reconocido el triunfo de la planilla de la alianza PSUM-COCEI en la segunda ronda de elecciones en marzo de 81 cuando toma el poder esta última. A estos hechos se agregaba un descontento por no haberse desconocido al ayuntamiento cuando éste se negó en diciembre de 1981, a la realización de una auditoría decretada por la Legislatura. A principios de febrero de 1983, Teodoro el "Rojo" Altamirano, líder carismático del movimiento opositor, continuaba anunciando la inexistencia de información sobre la auditoría que finalmente se llevó a cabo. Denuncia-

ba que el gobernador tenía supeditada a la Cámara de Diputados y que por situaciones políticas de alto nivel se negaban a informar al respecto (*Noticias*, Oaxaca, 9 de febrero de 1983). El CCDDPJ atacaba al gobierno estatal al mismo tiempo que se movilizaba en Oaxaca para exigir los resultados de la auditoría, la desaparición de Radio Ayuntamiento Popular por atacar al gobierno e incitar a la rebelión y el dictado de las órdenes de aprehensión contra el Presidente Municipal, otros miembros del cabildo, el Diputado Federal de la COCEI (Héctor Sánchez) y dirigentes de la organización (*Noticias*, Oaxaca, 11 de febrero de 1983).

En esos mismos días, el diputado Héctor Sánchez y elementos de la Coalición encabezaban una movilización de indígenas triquis, agrupados en el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), que demandaban la ejecución de una resolución presidencial en materia agraria y la repetición de la elección del Agente Municipal —representante de las poblaciones menores que conforman un municipio— en San Juan Copala, ya que la anterior había sido manipulada por el PRI por conducto del Presidente Municipal de Juxtlahuaca a cuya jurisdicción corresponde Copala (*Noticias*, Oaxaca, 11 de febrero de 1983). La policía impidió su manifestación en el centro de la ciudad de Oaxaca, obligándolos a replegarse a un edificio universitario, al mismo tiempo que otros triquis afiliados al PRI rechazaban los ataques que se les hacían y culpaban al MULT de abigeato, robo y asesinatos.

#### *La correlación de fuerzas*

El 13 de febrero, unos seiscientos campesinos salían de Juchitán rumbo a Oaxaca; les esperaba un recorrido a pie de 270 kilómetros. La COCEI ampliaba su capacidad de representación a un sector que englobaba parte

de la sociedad de la región del Istmo de Oaxaca. Las demandas de la movilización son las siguientes: 1) la salida de los acaparadores de tierras ejidales y comunales y el reparto de latifundios que existían en Santo Domingo Ingenio, Comitancillo, San Francisco del Mar y Nejapa de Madero; 2) créditos oportunos y baratos para los campesinos de los distritos de riego y temporal, así como la eliminación de criterios políticos al otorgarlo; 3) apoyo para la explotación directa de sus recursos naturales (bosques y minerales) por parte de campesinos de San Miguel Chimalapa, Rincón Bamba y Huilotepec; 4) elección democrática de autoridades ejidales y comunales y desconocimiento de las que violaban la ley agraria como las de Juchitán, Ixtepec y San Francisco del Mar; 5) aseguramiento por parte de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera S.A. (ANAGSA) de 2 000 hectáreas de humedad siniestradas en el ciclo 82-83; 6) aumento de las participaciones del ayuntamiento de Juchitán y San Miguel Chimalapa; 7) cese a la interferencia de Radio Ayuntamiento; 8) indemnización a pescadores de la Laguna Superior afectados por un derrame de PEMEX, y 9) resolución al problema de los triquis (*Noticias*, Oaxaca, 15 de febrero de 1983).

No obstante haberse instalado a mitad del camino retenes policiacos, el gobernador decidió el 18 de febrero el envío de una comisión negociadora a El Camarón justo a media ruta (*Noticias*, Oaxaca, 19 de febrero de 1983). La comisión era encabezada por el Secretario General del Gobierno y estaba integrada por encargados de las dependencias gubernamentales y los delegados de las Secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de la Reforma Agraria, del Banco de Crédito Rural del Istmo (PANORISA) y de ANACSA (*Noticias*, Oaxaca, 20 de febrero de 1983). Aunque en la negociación se lograron solucionar algunas de las demandas, otras importantes no se obtuvieron y el contingente decidió continuar su recorrido hasta acam-

par el día 21 en un poblado de las goteras de la ciudad. El gobernador negoció ahí directamente con los demandantes; se llegó a acuerdos y los manifestantes decidieron levantar su movimiento y regresar ese día al Istmo.

El régimen oaxaqueño solucionaba un conflicto cuya expresión podría haberse vuelto mayor. El día en que llegaría la marcha a la capital se efectuaría un acto multitudinario del movimiento magisterial que en ese tiempo mantenía relaciones con el ayuntamiento. El acto podría haberse vuelto una expresión contra el gobernador con la presencia de la COCEI, ya que con el movimiento de los maestros habían existido relaciones de respeto hacia el gobernante, además, los triquis habían regresado desde el día 21 a sus comunidades, una vez acordadas nuevas elecciones y la investigación en el asunto agrario como resultado de la reunión en El Camarón (*Noticias*, Oaxaca, 23 de febrero de 1983). Algo que agravaba la situación política en la capital estatal era la proximidad de elecciones de Rector en la Universidad, lo que había desatado expresiones de las fuerzas que operan en el interior de la casa de estudios.

Con la movilización el ayuntamiento y la COCEI habían conseguido los siguientes acuerdos: a) se implementarían los mecanismos para elegir comisariados ejidales y comunales en las poblaciones istmeñas señaladas; b) se otorgarían créditos a campesinos maiceros; c) habría el aseguramiento de los cultivos siniestrados en el ciclo agrícola reciente; d) se estudiarían mecanismos para eliminar el acaparamiento de tierras en Santo Domingo Ingenio y Comitancillo y los certificados de inafectabilidad en el Jordán, además de la promesa de ampliación del ejido "Charis Castro", y e) se prometía la creación de industrias comunales en tres poblaciones (*Noticias*, Oaxaca, 23 de febrero de 1983). En lo que se refiere a demandas concretas del ayuntamiento se mencionan las siguientes: aumento en las participaciones mensuales de

Juchitán y Chimalapa, compromiso de realizar obras públicas en forma bipartita gobierno-ayuntamiento y el esclarecimiento futuro de los asesinatos de coceístas en Chicapá y San Miguel Chimalapa por parte de elementos del PRI. Además, se prometía solución al asunto triqui, a la indemnización de los pescadores afectados por PEMEX y se ofrecía gestionar el permiso de funcionamiento de XEAP por parte de comunicaciones.

Con los resultados de la marcha, aunque más políticos que reales en muchos casos, la COCEI parecía agigantar su fuerza política ya no sólo como organismo regional, sino trascendiendo en el terreno de toda la entidad federativa. Frente al gobierno aparecía como un adversario con un activo movimiento social que la impulsaba estatalmente. Pero además, a nivel nacional, o más específicamente hablando, en la capital del país, contaba con un marco de difusión y apoyo en sus movilizaciones tanto entre las organizaciones sindicales, políticas y académicas, como entre el ambiente cultural y periodístico. Desde el PSUM y los organismos partidarios de la izquierda hasta pintores, fotógrafos, antropólogos y artistas proporcionaban apoyo político a la Coalición. El movimiento juchiteco lograba poner, como pocas ocasiones en la capital del país, en un mismo saco a radicales, anarquistas, socialistas, artistas e intelectuales progresistas, en fin, toda la gama informe que constituye todavía la izquierda en México. Esto le proporcionaba una cobertura de difusión que la fortalecía frente al gobierno local y opacaba nacionalmente la campaña de violencia que sostenía el CCDDPJ, mostrándolo como grupo con posiciones fascistas y ultrarreaccionarias.

#### *La respuesta priísta*

Buscando homologar a la movilización de las autoridades del municipio, el CCDDPJ emprende una movilización en autobuses a Gue-

latao, en donde el nuevo presidente, Miguel de la Madrid, asistía a una ceremonia cívica (*Noticias*, Oaxaca, 18 de marzo de 1983). La dirigencia de la oposición consideraba imposible cualquier trato o negociación con el ayuntamiento porque "no tratamos con delincuentes" (*Idem*). Apoyados por su contingente, los dirigentes logran charlar por unos tres minutos con el presidente y le entregan un pliego de peticiones con siete puntos. En él se desglosa el ideario político de su movimiento y la táctica de provocar la represión contra la COCEI: 1) que se instaure y respete en Juchitán un estado de derecho; 2) que el ayuntamiento respete las garantías individuales; 3) que cesara la represión y la violencia en el Istmo promovida por el ayuntamiento; 4) que se exigieran cuentas de las participaciones recibidas por el cabildo; 5) que Comunicaciones sujetara a la ley a la radio XEAP por transmitir odio y violencia que podrían ocasionar una lucha fratricida; 6) que los recursos federales destinados a obras no se utilizaran para fines subversivos y de destabilización regional y estatal, y 7) que se ejecutaran las órdenes de aprehensión contra dirigentes de la COCEI. (*Noticias*, Oaxaca, 22 de marzo de 1983). El movimiento expresaba su marcado acento represivo frente al nuevo presidente y preparaba las condiciones para una violencia futura contra la COCEI por parte del aparato estatal. La solicitud al mandatario también refleja una disputa, aunque no frontal, todavía latente con el gobierno oaxaqueño por no haber reprimido al ayuntamiento. Así, la petición no sólo encierra el futuro que se le deparará a la COCEI sino también las relaciones de fuerza entre el priísmo de Juchitán y el de la entidad. El CCDDPJ amenaza con violencia si no hay una intervención presidencial y justifica la que pueda existir en adelante por su cuenta, amén de que es una nueva presión sobre el mandatario de la entidad para endurecer su política. Pero también hay un punto verdadero que fue talón débil del ayuntamiento: ante

las presiones de todas las fuerzas conservadoras y gubernamentales, tenía que proteger al movimiento que lo sostenía y permitía sobrevivir, aunque ello significara en algunos casos parcialidad en el ejercicio administrativo municipal. Más adelante hablaremos al respecto.

La existencia del CCDDPJ no había subsanado las divisiones existentes en el interior mismo del priísmo juchiteco. Se reconocía como opinión de comerciantes, locatarios y trabajadores del PRI que si el partido no se reorganizaba y se unificaba, la COCEI continuaría presidiendo el Ayuntamiento para los próximos años (*Noticias*, Oaxaca, 6 de abril de 1983). A la proliferación de grupos que fraccionaban sus filas se agregaba la falta de presidente del comité municipal, ya que el anterior, desde hacía varios meses, estaba comisionado en Oaxaca por el CDE. El PRI requería de un candidato que además de popular fuese capaz de aglutinar las distintas camarillas existentes; mas la proximidad de las elecciones municipales y para diputados locales tornaba el asunto complejo toda vez que la división tenía su origen en la selección de estos candidatos. Se empezaba, por ejemplo, a acusar al líder del CCDDPJ, Teodoro Altamirano, de mostrar sus verdaderos intereses de aspirar a la Presidencia Municipal.

La lucha frente al gobierno estatal y las dependencias federales era sostenida por la COCEI a través de movilizaciones para conseguir la negociación. El 11 de abril, un grupo de campesinos de varias poblaciones del Istmo, encabezado por el dirigente campesino de la COCEI, Daniel López Nelio, realizó un plantón en la delegación de la SRA en Oaxaca para exigir el cumplimiento de los acuerdos tomados en la marcha campesina de febrero (*Noticias*, Oaxaca, 12 de abril de 1983). Al día siguiente, arrancaron los siguientes acuerdos al delegado: en los próximos días una investigación iniciaría los trabajos para la actualización del padrón comunal de Zanatepec; se dialogaría con los dos grupos de comuneros

en conflicto en San Francisco del Mar; se atendería una impugnación en el proceso de elección de autoridades agrarias en San Dionisio del Mar, y en el caso de Juchitán se buscaría resolver lo relativo al amparo que un grupo de pequeños propietarios había interpuesto para suspender la elección del comisariado (*Noticias*, Oaxaca, 13 de abril de 1983).

La COCEI parecía agigantar su presencia regional. Aunque ésta se expresaba primordialmente a través de la recuperación y asesoría de las problemáticas de diversas poblaciones del Distrito de Juchitán —que comprende 21 municipios, incluyendo el de Juchitán—, ya para entonces la organización preveía un posible triunfo en ocho de los municipios para la próxima ronda electoral (*Noticias*, Oaxaca, 27 de abril de 1983).

### 3. LOS DÍAS DEL COMITÉ

#### *La división priísta en Juchitán*

Siguiendo con la costumbre de realizar actos simultáneos a los de la Coalición, el día de la marcha campesina el CCDDPJ efectuó un mitin masivo en Juchitán; el acto de alguna manera marcó el inicio de nuevas relaciones con el gobierno estatal y la dirección del partido. El congregado festejaba la libertad concedida por el gobierno a los priístas de Chicapa de Castro que habían sido detenidos por el enfrentamiento en que fue atacado el presidente Polo de Gives el año anterior, —en una emboscada que había sido preparada, se dijo, para asesinarlo. Otros aires depa- raban al priísmo juchiteco desde el nombramiento de nuevas autoridades partidarias; el 20 de septiembre tomaba posesión de la presidencia del CDE Oswaldo García Criollo, íntimo colaborador del gobernador y el 2 de febrero de 1983, Florencio Salazar era el nuevo Delegado General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Oaxaca. El nuevo delega-

do presidía el acto del CCDDPJ jurando cumplir los compromisos que adquiriría con los priístas juchitecos, luego de sacudir al PRI estatal y nacional por la atención prestada al asunto (*Revista Tesis*, núm. 137, Juchitán, febrero de 1983).

Después del triunfo de la alianza PSUM-COCEI en las elecciones de 1980, el PRI de Juchitán seguía dividido. Por un lado, el Comité Municipal navegaba desordenado y con una dirección incapaz de unificarlo y, por el otro, se creaba un poder priísta informal fuera del marco institucional del partido: el Comité Central de Defensa de los Derechos del Pueblo Juchiteco. La división era de tal naturaleza que en el mitin de campaña del candidato presidencial Miguel de la Madrid, en Juchitán, el Diputado Local Alfredo Benítez, ligado al Diputado Federal José Murat, era abucheado y obligado a dejar el micrófono (*Revista Tesis*, núm. 108, Juchitán, 15 de abril de 1982). Ahí mismo se repartía un volante en el que se atacaba al diputado Murat y a su grupo juchiteco (Martínez, 1981). El candidato presidencial, en su oratoria, declaraba conocer el problema, afirmaba que vigilaría a los causantes y amenazaba con expulsión a los traidores del partido (*Revista Tesis*, núm. 137, Juchitán, febrero de 1983).

Además de las muestras de desunión en el mitin de campaña presidencial, los simpatizantes del CCDDPJ acusaban al gobernador de haber cedido a las presiones de la COCEI y de darles concesiones para no ocasionar disturbios en el mitin de De La Madrid; decían que ante las amenazas de impedir la entrada del candidato priísta si no les cumplían diversas demandas, el gobierno utilizó una partida adicional para el terminado de la reconstrucción del Palacio Municipal y ayudó a las gestiones para la libertad del mayor Leopoldo De Gives, padre del Presidente Municipal encastado desde las luchas de 1978 en el campo militar núm. 1 (*Revista Tesis*, núm. 119, Juchitán, 17 de julio de 1982).

Sin embargo, la división del priísmo de

Juchitán no impediría su fortalecimiento electoral en las elecciones para diputados federales, que se efectuaron junto con las presidenciales en julio de 1982. Con una votación de 5 116 electores a favor del candidato priísta, superaba en 266 votos a la COCEI-PSUM, que obtuvo 4 850, recuperando la diferencia que había perdido en marzo de 1981. Los votos representaban un 45% más para el PRI y un 30% para la alianza COCEI-PSUM, en relación con la votación mencionada. El PRI triunfaba en 10 de las casillas electorales del municipio y la COCEI en las nueve restantes. Más la importancia electoral de ésta última organización sentaba su peso sólo en el municipio de Juchitán ya que la votación para el Distrito Electoral completo era la siguiente: el PRI, 40 345 votos; PSUM-COCEI, 7 091; PPS, 1 852; PARM, 182; PAN, 490; PST, 136; PDM, 71 y el PSD lograba sólo 14 votos (Revista *Tesis*, núms. 119 y 120, Juchitán, 17 y 31 de julio de 1982). El diputado electo era Raúl Enríquez Palomeck y el derrotado Héctor Sánchez de la COCEI quien, sin embargo, llegaría por vía plurinominal a la Cámara Legislativa.

#### *Buscando la unificación*

Una de las primeras tareas del nuevo presidente del CDE del PRI era la reestructuración de los comités municipales de su partido, con el fin de preparar el triunfo en las elecciones de los 570 Ayuntamientos del año siguiente. En el caso de Juchitán, decía, "se usará una nueva estrategia bien formulada y fundamentada para canalizar las inquietudes de los juchitecos y [...] lograr un triunfo rotundo en las elecciones municipales" (Revista *Tesis*, núm. 126, Juchitán, 2 de octubre de 1982). La tarea era un poco complicada ya que para estos tiempos la visión del CCDDPJ podía resumirse en lo siguiente: el pueblo juchiteco, tradicionalmente priísta, había sido sacrificado en aras de un experimento de la Reforma Política; habían sido traicionados por miembros de su partido y las pruebas que

ellos argumentaban eran las modificaciones en el padrón electoral de última hora en las elecciones de marzo de 1981, el cambio del presidente del Comité Municipal Electoral, la designación de la Casa de la Cultura como sede del comité electoral (cuyo director era simpatizante de la COCEI) y el no empadronamiento de militantes priístas (Revista *Tesis*, núm. 128, Juchitán, 30 de octubre de 1982). Los dirigentes del CCDDPJ decían haber recurrido a las más altas esferas del partido y del gobierno y no habían obtenido respuestas concretas. Reconocían que los sectores de su partido en la población —CTM, CNC, CROC y CCI— se habían debilitado y que la COCEI absorbía a sus miembros prometiéndoles tierra, aumentos salariales y otras prestaciones. La situación de incomunicación entre la dirigencia priísta y el CCDDPJ se comprueba con la declaración a un periódico nacional de que de seguir las cosas como estaban, se levantarían en armas para desterrar al grupo que se encontraba en el poder, responsabilizando a las autoridades del estado por no resolver el conflicto (Revista *Tesis*, núm. 120, Juchitán, 30 de octubre de 1982). Sabían, además, que la Coalición consolidaba sus posiciones políticas en Comitancillo, la Venta, Ixtepec y Chicapa.

En estas condiciones, el presidente del CDE sostiene una reunión con los priístas juchitecos el 23 de octubre de 1982. Ahí los dirigentes del CCDDPJ, aunque no se les había invitado como tales, declaraban que el PRI municipal había sido dejado a la deriva por los dirigentes partidarios de la entidad, que el gobernador temía a la COCEI y su presencia en la ciudad se antojaba lejana por la culpa que en la situación le correspondía. Exigían que fueran liberados los priístas encarcelados por el choque de Chicapa y amenazaban con un acto político en Oaxaca ante el representante presidencial el día del II informe de gobierno (Revista *Tesis*, núm. 128, Juchitán, 30 de octubre de 1982). También acusaban de traición al anterior dirigente estatal del partido y

entonces ya diputado federal, Dr. Antonio Fabila, al ex-secretario General del CDE, Elpidio Altamirano, al ex-delegado del CEN del PRI, Antonio Carrillo Arena, a José Murat y al propio Secretario de Gobernación, Enrique Olivares Santana. En las relaciones con el CDE pedían respeto para decidir sobre su propia política interna en el municipio.

Por otro lado, la reunión también fue vehículo de exhibición de las divisiones. Se acusaba al general López Chiña —quien había sido precandidato a la Presidencia Municipal— y a otra persona de oportunistas. El ataque contestaba justificando su inasistencia permanente al partido en términos de que éste había devenido en reunión de buscadores de puestos administrativos y atacantes del gobernador y autoridades federales; acusaba, finalmente, al secretario municipal del partido, Aurelio López, de divisionista (Revista *Tesis*, núm. 131, Juchitán, diciembre 11 de 1982). La respuesta de la contra es que el general no asistía por haber formado parte del grupo de López Chente —último Presidente Municipal y acusado de fraude durante toda su gestión—, al que se arengaba como el principal causante de la anulación de las elecciones de 1980 por haber consignado ante el gobernador que Julio Gómez no tenía respaldo en la población. Además, decía que el general trabajaba secretamente para sus propios fines políticos en la población (Revista *Tesis*, núm. 134, Juchitán, 22 de enero de 1983).

El dirigente estatal acotaría la necesidad de invitar personas nuevas a participar al lado de las muy experimentadas, buscando la reorganización del partido, prometiendo asistir frecuentemente al municipio. Pero además solicitó el cese de los ataques al gobernador y dijo estar de acuerdo con el desalojo del Palacio Municipal pero a través de vías electorales. Nuevas gentes empezaban a manifestar su peso de influencia: el diputado federal por Juchitán, Raúl Enríquez Palomec, pidiendo la libertad de los presos de Chicapa

(Revista *Tesis*, núm. 128, Juchitán, 30 de octubre de 1982). El primer paso de la reorganización del partido fue el comisionar al presidente del CM (comité municipal) con un puesto en el CDE de Oaxaca.

Pero habrían de pasar algunos meses para nombrar al nuevo dirigente municipal. A principios de mayo del año siguiente, asume estas funciones Javier Fuentes Valdivieso, quien había sido miembro de la Junta que gobernó Juchitán de diciembre de 1980 al 10 de marzo de 1981, secretario del CM desde septiembre de este último año y suplente de la planilla para la Legislatura Federal cuyo titular fue REP. Se le vinculaba a éste y a los hermanos De la Cruz Pineda —uno un alto funcionario de la SEP y el otro extitular de la Dirección de Desarrollo Urbano de Vázquez Colmenares y candidato derrotado por Polo De Gives en las elecciones de marzo. Otros posibles candidatos a la presidencia del CM habían sido Mario Bustillo Villalobos —expresidente Municipal y ex-diputado local—, Porfirio Montero —dirigente de los cañeros de pequeña propiedad en la zona— y Armando Castillejos, funcionario de ANAGSA, a quien se vinculaba directamente con el Secretario General del Despacho (*Hora cero*, núm. 65, Oaxaca, 23 de enero de 1983).

#### *Contra la autoridad municipal*

La división de los priistas no impedía completamente un fortalecimiento del CCDDPJ. Parecía que la aparición de XEAP enardecía los ataques. La radio del ayuntamiento no sólo ponía en cuestionamiento la comunicación radial tradicional del Istmo, sino que también buscaba contrarrestar la campaña de desprestigio que, en su contra, transmitía diariamente el "Rojo" Altamirano a control remoto por las tres emisoras regionales de la familia López Lena. Los simpatizantes de la COCEI reconocían un engrandecimiento de su oposición: los burócratas ya participaban en las marchas del CCDDPJ, y veían tornarse di-

fácil la próxima contienda municipal (*Hora cero*, núm. 66, Oaxaca, 2 de febrero de 1983). Desde febrero, el CCDDPJ tenía abiertos los siguientes flancos contra la COCEI y sus simpatizantes: los conflictos en el Instituto Tecnológico del Istmo, el problema de la Preparatoria núm. 4 de Tehuantepec, los ataques al Obispo Arturo Lona Reyes, una campaña de desprestigio hacia la Casa de la Cultura de Juchitán y especialmente contra su director Macario Matus y la campaña contra el ayuntamiento de manera específica —auditoría, desaparición de radio XEAP, etcétera. Desarrollaré más adelante esta conflictiva.

La reestructuración del PRI, iniciada luego de la reunión con García Criollo, continuaba. En febrero, el recién nombrado Delegado General del CEN del PRI en Oaxaca se reunía con los priístas del municipio (*Revista Tesis*, núm. 137, Juchitán, 19 de febrero de 1983). Unas semanas antes se nombraba al nuevo dirigente de la Liga Municipal de la CNOP, cuya titularidad estaba desierta desde hacía meses, luego del fallecimiento de Óscar Matus, su dirigente y uno de los líderes del Comité Central encabezaba la coordinación regional del Movimiento Juvenil Revolucionario del PRI (*Revista Tesis*, núm. 135, Juchitán, 29 de enero de 1983). En marzo se designa un delegado especial del CDE que se instala de manera permanente en Juchitán para atender los requerimientos de la reestructuración del priísmo y las candidaturas a Presidencia Municipal y diputado local. Los avances de la nueva política del CDE hacia el priísmo juchiteco, en términos de buscar encauzar por los canales partidarios el movimiento opositor a la COCEI, llegan a su triunfo con la designación del candidato a la diputación por ese distrito. Aunque para algunos priístas de la región la candidatura debería corresponder a un poblador que no fuera juchiteco o ixtepecano —ya que los dos diputados anteriores provenían de estos lugares—, las necesidades del enfrentamiento

to y destrucción de la COCEI hacen caer la designación en el líder del CCDDPJ: Teodoro El "Rojo" Altamirano, pese a que se habían manejado otros nombres como los de los presidentes municipales de Ixtepec y Espinal, ligados a José Murat, y el del propio presidente del CM del PRI juchiteco. El "Rojo" es designado candidato a Diputado, no obstante que se le percibía, por su actitud carismática, como más viable para la de Presidente Municipal en la última decena de mayo. Inicia luego su campaña política en Chicapa de Castro, agencia municipal opuesta a la Coalición, no sin algunas reticencias a su postulación por parte de los espinalenses.

El 10 de noviembre de 1981 había adquirido consistencia el movimiento opositor a la COCEI que se inició espontáneamente desde el primer día de gestión municipal; movimiento que se desliga de las directrices partidarias, no obstante su composición esencial priísta. Las agresiones y la organización de medidas tendientes al enfrentamiento con la COCEI apuntaban desde esa fecha premeditadamente. Ese día anunciaban: "proclamamos que a partir de hoy nos declaramos en pie de lucha hasta lograr la libertad del municipio juchiteco" (*Pueblo libre*, s/n, Juchitán, noviembre de 1981). Casi año y medio después se daba la reunificación del priísmo en Juchitán —al menos en un sector importante del mismo— y se establecían relaciones más estrechas con el CDE y el gobernador. Después de varios meses ausente, días antes de la postulación de Altamirano, el mandatario preside la conmemoración del XIX aniversario del fallecimiento del legendario general Charis Castro, quien encabezando juchitecos leales a Obregón combatió a los cristeros en Michoacán —el "Rojo" Altamirano casualmente resultó ser yerno del mencionado militar.

#### 4. LA UNIDAD DE LOS COMERCIANTES

##### *La actitud inicial*

Los intereses que defiende el CCDDPJ, tras de su movimiento, pueden dividirse en políticos: los privilegios tradicionales de las personalidades políticas del PRI en el municipio, y económicos: la preminencia de la propiedad privada de la tierra como forma dominante en la jurisdicción, enfrentada al intento de la COCEI por regularizar la situación de la posesión que ha sido por siglos comunal. Pero el comité también debe entenderse como la expresión más radicalizada de los defensores del comercio en grande y de las empresas juchitecas —que son las principales fuentes de enriquecimiento en el municipio. No obstante, el enfrentamiento entre el CCDDPJ y el ayuntamiento no implicó desde el principio el de éste y el comercio, o al menos no lo incluyó como la parte principal de las contradicciones. Más bien fue el enfrentamiento con los propietarios agrarios el que desempeñó el principal foco de conflicto social —el cual se expresaba en la lucha por la tierra y en la lucha política en las agencias municipales. Para el carácter tardío del enfrentamiento con los comerciantes, contó no sólo el hecho de que no existían conflictos laborales de importancia a principios de la gestión de la COCEI, sino también la falta de unidad y conciencia colectiva de los comerciantes grandes de la jurisdicción. Su organización y unidad orgánica como grupo social se produce hasta muy avanzado el conflicto CCDDPJ-COCEI.

Al triunfo de la COCEI, en marzo de 1981, los comerciantes juchitecos mandaron comunicados a la Secretaría de Gobernación amenazándola con suspender el pago de sus impuestos y realizar paros como protesta por el triunfo de la planilla del emblema del entonces PCM —hoy PSUM— y por irregularidades en el proceso de elección. El temor del co-

mercio juchiteco tenía dos antecedentes: 1) la violencia del movimiento social de la COCEI, ya que ante la represión gubernamental en 1978, el día de la toma de protesta de un ayuntamiento impugnado por la Coalición, se expresó mediante el saqueo de varios comercios y 2) la asesoría jurídica a trabajadores de algunas empresas locales por parte de los dirigentes de la organización. Pero la protesta comercial no fue encabezada por la Cámara de Comercio de la localidad, ya que el presidente de la misma había considerado que sus fines no eran hacer y participar en la política (Revista *Tesis*, núm. 74, Juchitán, 14 de marzo de 1981). Aunque una parte del comercio de la ciudad cerraría el 6 de marzo, uniéndose a un paro general promovido por algunos comerciantes, el movimiento no prosperaría; a la desorganización se agregaba la desconfianza que parecía existir entre unos comerciantes y otros. Para el mes de abril, la desorganización del gremio del comercio en grande continuaba y no había asistencia a las reuniones convocadas por la CANACO (Revista *Tesis*, núm. 77, Juchitán, abril 4 de 1981). El sector más privilegiado del grupo económico dominante del municipio no llegaba a tener una conciencia histórica de su enfrentamiento con el movimiento social que crecía frente a él. La falta de participación colectiva podría explicarse en algún sentido por el temor de comerciantes individuales a los actos de presión y saqueo del movimiento. Como que medían de manera personal las consecuencias de un enfrentamiento con la Coalición, máxime si sus negocios estaban ubicados en la parte céntrica, que es en donde los brotes violentos se dan.

Además, para los primeros meses de su administración, la COCEI había perfilado un plan de trabajo que expresaba reivindicaciones que beneficiarían a la población en su conjunto, sin distinción de grupo social: alcantarillado, pavimentación, drenaje, etcétera. Eran medidas que redundarían también en provecho de los propios comerciantes y

empresarios, más aún cuando ellos habían sufrido en algún sentido la falta de atención de las administraciones priístas anteriores en este rubro.

*La vanguardia de la oposición al ayuntamiento*

Un carácter distinto tenían las relaciones del ayuntamiento cocelista con la militancia priísta permanente, con sus bases sociales, pero principalmente con sus dirigentes, provenientes de los sectores medios de la población —profesionistas por cuenta propia y funcionarios de las dependencias estatales y federales. Hacia todos éstos, las rencillas electorales recientes se acumulaban a las existentes desde hacía varios años por los mismos motivos, lo cual hace que desde un principio el cabildo asuma ciertas hostilidades hacia el partido que en el municipio se convertiría en oposición. Pero dentro de esta militancia priísta también hay que distinguir al que es el sector más violentamente enfrentado con la COCEI: el de los propietarios agrarios —principalmente los que controlan grandes extensiones de tierra en los Distritos de riego y temporal del área— de terrenos de origen comunal; personas ligadas a este grupo encabezarían el CCDDPJ.

Los propietarios de grandes extensiones privadas, cuyo origen era comunal, desde el primer momento de gestión municipal de la COCEI, tenían clarificado su enfrentamiento y la significación del nuevo grupo que controlaba el ayuntamiento. Siendo la base de la COCEI esencialmente campesina, su dirección guiada principalmente por la lucha agraria —no obstante su proveniencia universitaria en muchos casos— y puesto que el origen de la misma organización tiene como causa la lucha por recuperar la posesión comunal que había pertenecido desde siglos a la población, resulta directa la inminencia de un enfrentamiento con ellos.

Es bien cierto que comerciantes que ade-

más tienen importantes intereses agrarios en Juchitán tuvieron conciencia del conflicto que se les avecinaba, pero esto no podía hacerse extensivo a todo el grupo comercio-empresarial local. De ahí que sea comprensible la posición inicial del dirigente de la CANACO de la población, imposibilitada para darle un carácter político al organismo gremial, tal como lo haría más adelante.

Lo anterior no significa que no existieron conflictos entre el comercio y las autoridades municipales y el movimiento social que las sostenía. Al menos hubo tres modalidades de la relación que a lo largo de los meses desarrollarían un enfrentamiento más abierto. Dos correspondieron al ayuntamiento como tal y la tercera al movimiento social de la COCEI:

1) Una de las actividades del ayuntamiento que empezó a crear fricciones con algunos empresarios fue el rescate y revalorización que hizo de bienes propiedad del municipio. Desde hacía tiempo, el inmueble conocido como "Portal de la Industria" y el Kiosko del parque central eran ocupados por negocios privados que pagaban rentas muy bajas. Estos establecimientos eran propiedad, principalmente, de connotados priístas y lo que el ayuntamiento buscó fue, en algunos casos reordenar las rentas que pagarían los comercios de acuerdo con las condiciones de carestía e inflación imperantes (Revista *Tesis*, núm. 90, Juchitán, 7 de septiembre de 1981). Pero en otros casos la actitud del ayuntamiento fue radical: el desalojo de los ocupantes —esto sucedió en el caso de priístas en conflicto con el ayuntamiento—, como sucedió con un despacho cuyo propietario, pese a un amparo, fue desahuciado (Revista *Tesis*, núm. 86, Juchitán, 29 de junio de 1981).

Las tropelías de las anteriores autoridades municipales habían llegado al remate de los lotes mejor ubicados del panteón municipal, los que el nuevo ayuntamiento desalojaba por la vía del hecho mediante el entierro de

algunas personalidades en ellos —como fue el caso del entierro de un poeta zapoteca en un lote propiedad de la familia Cortés, de rai-gambre comercial y agraria militancia priísta (Revista *Tesis*, núm. 82, Juchitán, 11 de mayo de 1981). El presidente del ayuntamiento coceísta declaraba, en junio de 1981, respecto de su actitud frente a los priístas: "el PRI se encuentra bastante desorganizado, en franco repliegue. Hemos adoptado ciertas medidas que [...] afectan a muchos de sus integrantes políticos destacados y no puede dar una respuesta. Digamos cosas como éstas, por ejemplo, en caso de menos de cinco días habremos de ocupar seis locales de un edificio que [...] es municipal; se encuentran ocupados por políticos priístas, pagan rentas de doscientos a ochocientos pesos mensuales, cuando que las rentas giran entre 5 y 10 mil pesos [...] en el centro de Juchitán" (Carvajal, 1982: 23).

En el primer informe del ayuntamiento, a escasos cinco meses de funciones, se asienta la recuperación de las riberas del río —usufructuadas por particulares para la extracción de arena y grava—, de los altos del portal antes mencionado y la de un terreno que había sido propiedad de Che Gómez —guerrillero que enfrentó en 1911 al gobierno oaxaqueño—, apropiado por la familia comerciante de los López Lena (Martínez, 1981: 68).

2) Una segunda relación conflictiva fue la de gravar las utilidades de las empresas y comercios mayores de la ciudad mediante un mecanismo particular. Se les solicitaba a las grandes empresas su colaboración económica para sufragar los gastos de obras de beneficio colectivo emprendidas por el cabildo. En julio de 1982, la regiduría de Hacienda se dirigió a la firma Refrescos de Oaxaca para que cubriera el saldo de 300 000 pesos que le restaba de la cooperación de un millón de pesos en plazos, que había acordado con el ayuntamiento en octubre de 1981. (*Juchitán, un pueblo que clama justicia*, s/e, p. 17).

En el mes de noviembre de 1981, el cabildo firmó un convenio con los concesionarios locales de las cervecerías Cuauhtémoc, Moctezuma y Modelo para que éstos incluyeran un cobro de 5 pesos extras a cada cartón de cerveza que sería entregado a las autoridades para la realización de obras municipales. Además, los distribuidores pagarían una cuota al Municipio por cada venta en exclusiva que consiguieran en las frecuentes festividades de la jurisdicción (*Juchitán, ...*, p. 11-12). Quien tenga una idea de la importancia de la cerveza en la dieta del juchiteco —y del istmeño en general— se percatará del peso económico que estas medidas representaban para las autoridades.

Estas medidas lesionaban directamente los intereses de acumulación de las empresas. Nunca antes alguna autoridad municipal había decidido poner un control mínimo a su actividad de intermediarios y vendedores. Más adelante, la oposición al ayuntamiento manejaría estas cooperaciones como formas de chantaje de éste hacia las empresas para no efectuarles movimientos huelguísticos a través de las organizaciones laborales de la Coalición.

Un elemento que debe agregarse a esta relación con el comercio grande de Juchitán es la protección que las autoridades municipales prestaron al pequeño comercio, o comercio placero, en el que tenía parte de su base de apoyo. Los propietarios de comercios grandes acusaban al ayuntamiento de propiciar una competencia desleal entre éstos y los vendedores del mercado central, ya que había permitido la proliferación de puestos alrededor del área del mercado, muy cerca de sus tiendas que pagaban más impuestos (Revista *Tesis*, núm. 96, Juchitán, 26 de octubre de 1981).

3) La posesión del poder municipal por parte de la COCEI le permitió fortalecer la organización independiente de obreros y trabajadores asalariados. Si la base social fundamental de la Coalición está entre el campesi-

nado pobre, el pequeño comercio y los pescadores, no hay que olvidar que buena parte de las unidades familiares que habitan en los barrios dominados por la organización pueden combinar varias actividades, incluyendo la del trabajo asalariado y las antes mencionadas. En su mayoría, no se trata de trabajadores de buena calidad o cuando menos mediana, o de empleados gubernamentales de oficina, sino más bien de los niveles más bajos de la gente asalariada en Juchitán: macheteros, cargadores, trabajadores de la construcción, eventuales, etcétera. Con las peores condiciones de trabajo, y me atrevería a elaborar la hipótesis de que la cooptación por parte de la Coalición se realiza en ellos, más que a través del centro de trabajo, por el barrio como lugar de socialización y residencia.

Desde sus primeros años de existencia —aunque no desde su aparición—, la COCEI empezó a asesorar jurídicamente a trabajadores y empleados, al principio de manera individual. Pero el trabajo político a más amplia escala se da hasta que adquiere el control del ayuntamiento, cuando incluso llega a asesorar sindicatos de otros municipios. En septiembre de 1981, se creaba el Sindicato Único de Trabajadores del Istmo (SUTI), que agrupaba a trabajadores de distinto género: refresqueros, "macheteros, de la cervecerías" peones, empleados de mostrador y secretarías (Revista *Tesis*, núm. 92, Juchitán, 21 de septiembre de 1981).

La falta de unidad del comercio juchiteco persistía al año de gestión de la COCEI. Destacados y quizás de los más ricos comerciantes del lugar consignaban que el organismo gremial, la CANACO, era incapaz de defender a sus agremiados y lograr que el gobierno de Oaxaca se inclinara a su favor. El líder del organismo juchiteco era acusado de incapacidad y alianza con el ayuntamiento al no defender a los comerciantes. Los declarantes, ligados a intereses agrarios y priístas destacados, aducían que no había garantías de trabajo. Acusaban al ayuntamiento de alentar el

combate contra los ricos y expropiar capitales hechos a base de trabajo aprovechándose de la ignorancia de la población (Revista *Tesis*, núm. 96, Juchitán, 26 de octubre de 1981).

Pero para 1982, el comercio empieza a estar más organizado. En marzo se nombra una nueva mesa directiva de la Cámara de Comercio de Juchitán que promete buscar la unidad y cohesión ausentes durante mucho tiempo. La encabeza el gerente regional de la embotelladora Coca-Cola y forma parte de la directiva un miembro de los López Lena. Existía una ventaja, según los nuevos dirigentes, para aumentar sus agremiados: la receptoría de rentas sólo aceptaría los pagos de comerciantes debidamente registrados en sus entidades gremiales (Revista *Tesis*, núm. 105, Juchitán, marzo de 1982). Sin embargo, el presidente del organismo declaraba aún no inmiscuir al propio organismo en política ni atacar a la COCEI.

El organismo comercial empieza a buscar la participación activa de sus agremiados. Además de prometer emprender la defensa de los mismos frente a organismos como la SECOM y de prometer gestión de obras públicas, en octubre constituyen las secciones de propietarios de farmacias y restaurantes.

El hecho que origina un enfrentamiento más organizado del comercio hacia el ayuntamiento y la COCEI es un conflicto laboral en la embotelladora Coca-Cola. Un grupo de trabajadores del sindicato titular afiliado a la CTM, simpatizante de la COCEI, emprende una lucha por revisión del contrato de trabajo, aumentos salariales, elección de nueva dirigencia sindical y otras demandas. Ante esta situación, la dirección del sindicato decide aplicarles la cláusula de exclusión y durante el mes de septiembre son despedidos 25 trabajadores. Se solicita resguardo policiaco en la fábrica para impedir una posible toma del edificio. En el mes de octubre, simpatizantes de la COCEI apoyados por elementos del ayuntamiento se posesionan de más de una

docena de carros repartidores de refrescos para exigir la reinstalación de los despedidos.

Ante esta situación, la empresa y la Cámara de Comercio de Juchitán —dirigida por el gerente de la Coca-Cola— presionan al gobierno del estado para que interceda a su favor. El gobierno negocia la situación y el conflicto se resuelve con el pago de una indemnización mayor a la que la empresa ofreció inicialmente (Revista *Tesis*, núms. 127 y 128, Juchitán, 13 y 20 de octubre de 1982).

Fue en este momento cuando se produjo la primera acción conjunta entre el grupo comercial y el movimiento de oposición política al ayuntamiento. La CANACO, que amenazó con dejar de pagar impuestos si el gobierno no intervenía, coincidió con el PRI en la expulsión de los simpatizantes de la COCEI y las presiones al gobernador. Además de la presencia de un miembro de la familia López Lena en la Cámara, existían relaciones de parentesco entre el gerente de la empresa y los dueños de la cadena de radioemisoras istmeñas que sostenía un ataque sistemático contra el ayuntamiento.

En el mes de noviembre estallarían otras huelgas en Juchitán, como la de los trabajadores de la cervecería Modelo, donde se decía que todos eran simpatizantes de la Coalición. También habían estallado algunas huelgas, pronto resueltas, en los primeros meses del ayuntamiento (Carbajal, 1982: 26-27). Sin embargo, el momento de mayor confrontación entre la empresa juchitea y la COCEI se daría hasta mayo de 1983, cuando estallan varias huelgas tanto en Juchitán como en otras poblaciones del Istmo.

## 5. EL ENFRENTAMIENTO

### *Divididos pero oponiéndose*

Luego de la segunda ronda de elecciones municipales, y asumiendo el control del ayuntamiento por la alianza COCEI-PCM, abandona la dirección del CM del PRI Jesús Pineda,

quien había sido aspirante a la candidatura priísta y se enfrentó con el grupo del ex-presidente municipal López Chente, que también pretendió decidir la postulación. El PRI juchiteco era encabezado por Darbien Santiago, dirigente del Grupo Acción —que desaparece luego que éste asume sus nuevas funciones. En el mes de abril de 1981, el nuevo comité municipal envía un documento al gobernador en el que se deslinda el propósito de enfrentar como partido de oposición al ayuntamiento y de buscar “dentro de las normas políticas establecidas [...] la caída del PC [...] constituido en autoridad municipal en alianza con la COCEI” (Comité Municipal del PRI de Juchitán, 1981). Para lograr este objetivo, proponían crear una conciencia política favorable al partido; buscar la incorporación de los priístas a la dirección del CM eliminando el fraccionalismo; abanderar las causas populares en el municipio, y defender a los ciudadanos que fueran perseguidos por las autoridades locales. En el aspecto político local, verían la posibilidad de desarrollar una actividad de movilización a través de marchas, volantes y mítines, solicitando al gobierno estatal y al federal el apoyo para que el PRI gestionara obras de beneficio social y además sugerían que los actos políticos que organizara su partido se efectuaran en Juchitán (*Idem*).

Mas los intentos de unificación y articulación del priísmo no prosperarían de inmediato. En ese mes aumentaría el resentimiento hacia Vásquez Colmenares por parte de los priístas locales, quienes esperaron al gobernador durante horas a un acto que nunca llegó por haberse entrevistado con el ayuntamiento (Revista *Tesis*, núm. 77, Juchitán, 4 de abril 1981). En mayo, ante la presencia del presidente del CEN, Javier García Paniagua, se realiza un acto político regional en Juchitán, donde la asistencia de los militantes locales es mínima. La incapacidad del nuevo CM para unificar sus agremiados se expresaba de esta manera. La afluencia a los actos

programados decrece: en agosto, un sábado tras otro es menos la concurrencia priísta y las divisiones continuaban. En uno de los actos, el retardo del presidente del CM le ocasiona una discusión con el secretario municipal del partido; el incidente provoca la remoción de este último y su sustitución por el Lic. Javier Fuentes Valdivieso (*Revista Tesis*, núms. 87 y 90, Juchitán, agosto 10 y 7 de septiembre de 1981).

Otro incidente, por esos meses, refleja el divisionismo imperante en las filas priístas. El nombramiento del nuevo dirigente de la Liga Municipal de la CNOP es objetada por algunos militantes. El nombrado, Óscar Matus, había sido mencionado como precandidato a la Presidencia Municipal y a la dirección local del PRI. El descontento hacia él provenía de su vinculación con José Murat —y por ende con el Diputado Local Alfredo Benítez— y por haber sido de los fundadores de la COCEI. Él fue presidente de la Asociación de Estudiantes Juchitecos en el D.F. de 1973 a 1975, periodo en el que de esta organización surge la dirección de la COCEI. Luego de salir de la presidencia de la Asociación, Matus ingresó al PRI a raíz de la campaña presidencial de López Portillo, que había sido el padrino de su generación de egresados de la Universidad (*Revista Tesis*, núm. 85, Juchitán, 4 de julio de 1981). Entre los que impugnaban la designación se encontraba Germán Morgan, anterior dirigente de la CNOP —quien es cambiado a causa de su alejamiento del partido luego de su inconformidad por haber sido desplazado en la segunda planilla que compitió en las elecciones—, y Jesús Mendoza Farra, quien sería más adelante dirigente del CCDDPJ (*Idem*).

El divisionismo y la desorganización del PRI en la localidad istmeña eran producto tanto de la inconformidad por los resultados de las elecciones pasadas, como por la forma en que se integraba el CM. Pero, además, se agregaba la movilización de la COCEI y su capacidad para arrancar demandas del go-

bierno durante su gestión.

Una de las medidas que instrumentó el gobierno estatal para poner cierto control económico sobre el ayuntamiento ganado por la oposición fue la de retardar siempre sus participaciones correspondientes. Pero, además, en los primeros meses intentó crear un subcomité de mejoras materiales de Juchitán, como entidad que fiscalizara y administrara los recursos asignados por el estado al municipio para la realización de obras. El gobernador quería que el mencionado organismo fuese presidido por priístas, entre los que se mencionaba a Óscar Matus (*Hora cero*, núm. 16, Oaxaca, 9 de mayo de 1981). Para impedir esta medida y lograr la entrega de las primeras participaciones municipales, la COCEI convoca a una movilización de juchitecos que se expresarían en Oaxaca masivamente el 22 de julio. La difusión nacional y estatal de la acción hace que el gobierno negocie el día que el contingente salía de Juchitán, llegando a los siguientes acuerdos:

- a) El subcomité de mejoras se integraría por igual número de personas propuestas, por un lado por el gobernador, y, por el otro, por el ayuntamiento. El Presidente Municipal lo sería también del Comité.
- b) Se consiguen incrementos y entrega de las participaciones gubernamentales.
- c) Se acuerda un crédito de 2.8 millones para reconstruir el Palacio Municipal.
- d) El ayuntamiento consigue 300 000 pesos para obras de servicio colectivo.
- e) Y, además, consigue la promesa de un crédito de 260 millones con BANOBRAS para el drenaje, alcantarillado y pavimentación de la ciudad.

Con los resultados del primer gran obstáculo que se le presentó al nuevo ayuntamiento, el gobernador aparecía ante los militantes de su partido como autoritario: la negociación con el ayuntamiento y las personas que integrarían al subcomité no tomaba en consideración las propuestas de ellos —máxime cuando entre los posibles nom-

brados se mencionaba a un miembro del grupo de José Murat, a quien se acusaba como uno de los causantes de la derrota del partido.

Un grupo de priístas que difería de las tácticas de lucha promovidas por el CM y el CDE del partido y empieza a movilizarse por su cuenta. Ellos darán origen al CCDDPJ, que desde septiembre empezaba a expresarse atacando al ayuntamiento. Sin ideas claras sobre la forma de llevar su lucha, los dirigentes Vidal Candelaria y Germán Matus declaraban:

Los de la COCEI son sinvergüenzas a los que el gobierno debe poner en su lugar cuanto antes.

Esa autoridad municipal debe ser suplida por otra, que sea capaz de dirigir los destinos de un pueblo, el peligro principal estriba en que en Juchitán se está formando un foco de agitación nacional, aquí se está adiestrando gente para la guerrilla, para asaltos de toda naturaleza y en cualquier momento pueden tomar esta ciudad y quedar los juchitecos como rehenes' (Martínez, 1981: 73).

#### *La violencia en las agencias*

Se iniciaba una nueva forma de enfrentamiento frente a la autoridad municipal. El carácter físico del enfrentamiento con ésta surgiría en el campo debido a disputas en el nombramiento de las autoridades menores del municipio: los agentes municipales, encargados de la administración de las poblaciones pequeñas que pertenecen a la jurisdicción municipal. Estos representantes, de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal vigente en ese momento, deberían ser nombrados por el Presidente Municipal, pero, como resultado de una tradición antiquísima en Oaxaca, en la mayoría de los casos son nombrados con base en plebiscitos de los pobladores.

En las agencias municipales de Chicapa de Castro y la Ventosa —donde la pequeña

propiedad es la tenencia predominante—, el PRI tenía más simpatizantes que la Coalición. El 19 de agosto, el presidente y la policía municipales intentan colocar a un simpatizante en la dirección del primer poblado. El agente en funciones levanta un acta por amenazas e injurias contra el Presidente Municipal por los hechos (Revista *Tesis*, núm. 90, Juchitán, 7 de septiembre de 1981). Las fricciones se repiten cuando los simpatizantes del PRI desarman a la policía municipal el 12 de septiembre. El 21 del mismo mes, en la Ventosa, acontece una situación similar: el presidente y la policía protegen la destitución del agente municipal del PPS, con quien inicialmente habían tenido una alianza. Hubo un enfrentamiento y varios heridos en la acción (Revista *Tesis*, núm. 93, Juchitán, 28 de septiembre de 1981). A pesar de la destitución, el agente continuó despachando en su domicilio particular.

Los conflictos electorales en las agencias fueron un punto de debilidad en la administración de la COCEI; ya que cada año se cambian estos representantes, el problema subsistió año con año. Si bien la Coalición mantuvo su predominio y consenso sobre otras agencias, como Álvaro Obregón, Emiliano Zapata y Santa María del Mar, la forma como las autoridades resolvieron las elecciones en las agencias con mayoría priístas creó un área de conflicto permanente. Aunque el nuevo ayuntamiento proporcionaba, por primera vez, un pequeño subsidio a las instancias menores de la jurisdicción —tal como lo manejaron en su plataforma de acción—, en los procedimientos del nombramiento de los representantes cometió errores. En las agencias con predominancia priísta pudo negociar con los grupos locales y reiterar la forma tradicional del plebiscito. Mas escogió un camino diferente.

El ayuntamiento acusaría al agente municipal de la Ventosa —del PPS— de obedecer las consignas del líder de la pequeña propiedad, Porfirio Montero, y de un supuesto aca-

parador de tierras, Basilio Díaz (*Hora cero*, núm. 31, Oaxaca, 13 de octubre de 1981). Apoyándose en el principio constitucional de autonomía municipal, se negó a acceder a los requerimientos que le hacía la Dirección de Gobierno del ejecutivo estatal para realizar plebiscitos de manera inmediata en las poblaciones conflictivas y someter éstos a la supervisión de la mencionada dependencia. El presidente declararía —con cierta razón— que “en las actuales circunstancias de agresión no procede el plebiscito, el cual haremos, pero en el momento en que lo acuerde el ayuntamiento y no cuando lo pretendan imponer los funcionarios del gobierno” (*Hora cero*, núm. 32, Oaxaca, octubre 22 de 1981). Para él, las autoridades gubernamentales buscaban limitar la autonomía municipal en las agencias y, dado que en ellas las fuerzas priístas y coceístas eran parejas, ocasionar la represión contra el ayuntamiento.

Al no poder aprovechar las similares condiciones de vida y pobreza de los habitantes mayoritarios de estas agencias —que los hacían semejantes a los simpatizantes de la COCEI en algunos sentidos— y resolver los problemas de manera negociada con los grupos locales, la autoridad municipal dio elementos de movilización a la militancia opuesta en la cabecera municipal. Llevó a los priístas de las agencias a convertirse en base de apoyo del CCDDPJ y además le dio a éste banderas a levantar en su contra, por imposición y autoritarismo de las autoridades municipales. Los pobladores priístas de las agencias llegaban incluso a ataques contra el gobernador por no reprimir violentamente a la COCEI; Vásquez Colmenares aparecía en sus denuncias como “el más incapaz y miedoso gobernador que haya tenido Oaxaca”, al que responsabilizaban de los derramamientos de sangre que pudieran existir en el futuro (*Revista Tesis*, núm. 98, Juchitán, 26 de octubre de 1981).

Los enfrentamientos entre la autoridad municipal y sus simpatizantes de las agencias

con mayoría priísta contra el PRI le dieron al CCDDPJ su único carácter popular de movilización contra el ayuntamiento. La dirección coceísta no asimiló esta situación ni las consecuencias futuras del hecho. Aquí se creaba quizás el frente de mayor membresía de la oposición a la Coalición y la respuesta de ésta no sopesó las posibilidades de anulación que pudo instrumentar desde el surgimiento de los conflictos.

Peró se creaban otros dos espacios de conflicto en los que el enfrentamiento físico aparecía como realidad, o como posibilidad cercana:

1) A partir de octubre de 1981 se inician acciones individuales de provocación y violencia contra el ayuntamiento. El 6 de octubre se acusaba a Víctor Moro, hijo de un miembro del CDDPJ, quien formaba parte de una corporación policiaca federal, de haber intentado asesinar al Presidente Municipal; fue detenido, encarcelado y posteriormente liberado. El 9 de octubre aparecía el cadáver de Rodrigo Carrasco, regidor suplente, con marcas de haber sido torturado. El 18 de enero de 1982 son balaceadas las casas del presidente y síndico municipales, el barrio de Cheguigo y el Palacio Municipal, muriendo en este último hecho una vendedora que se encontraba frente al inmueble. El 16 de junio es asaltada la casa de los simpatizantes de la COCEI en el municipio vecino de Xadani, con saldo de un herido de bala. El 28 de agosto en Chicapa de Castro se agredió a la comitiva del ayuntamiento, con saldo de dos muertos de la Coalición y varios heridos, cuando acudían a inaugurar una clínica del IMSS. El 20 de noviembre en el municipio de San Miguel Chimalapas los priístas asaltan el Palacio Municipal y muere un policía municipal de la administración, simpatizante de la COCEI. (*Hora cero*, núm. 77, Oaxaca, 10 de agosto de 1983). Las acciones de violencia del grupo contrario a la COCEI dejarán de aparecer con tanta premeditación en el año siguiente; la forma abierta de violencia del CCDDPJ lo colocaba en actitu-

des difíciles de ocultar y prefiere, para el año siguiente, implementar tácticas en donde el agresor no parezca ser él.

2) La otra forma de enfrentamiento local empieza a realizarse desde la declaración del "Plan de Juchitán" en noviembre de 1981. Consiste en la utilización de formas de movilización y agitación similares a las empleados por la COCEI: pintas, volantes y, principalmente, movilizaciones simultáneas a las convocadas por el movimiento cocceísta. Poco a poco, las movilizaciones priístas incorporan mayor número de participantes, aunque la convocatoria y las acciones no son organizadas por el CM del partido, sino por el CCDDPJ. Éste se convierte en la dirección de la oposición municipal y se perfila su actividad de provocación desde el primer momento. Aun-

que la COCEI entendía la práctica del CCDDPJ y la evitó durante bastante tiempo, el 31 de julio de 1983 los objetivos perseguidos se consiguen: en una movilización simultánea del PRI y la COCEI con motivo del cierre de campaña de sus candidatos a diputados locales, se produce un enfrentamiento entre los dos contingentes en el que mueren dos personas y decenas resultan heridas. Las evidencias llegan a asentar que la policía municipal se precipitó, cayó en la provocación tendida por el CCDDPJ al pasar un contingente de éste frente a la concentración cocceísta, originándose una zacapela. Tres días después, en una asamblea amañada y llena de errores legales, la Cámara de Diputados en pleno decide la desaparición de poderes en el municipio de Juchitán.

## II. LA CAÍDA DEL AYUNTAMIENTO

### I. NUEVOS CONFLICTOS

En la parte anterior se mencionaron los distintos frentes en que la COCEI y el ayuntamiento disputaban con fuerzas locales y a nivel estatal. Se ha hablado de las agencias municipales y del conflicto con el CCDDPJ como instancia política. Ahora se dedicarán algunas líneas a tres lugares en donde los ataques al ayuntamiento de Juchitán se concretaban en otros conflictos: una campaña de ataques contra el obispo de Tehuantepec, Monseñor Arturo Lona Reyes, vinculado con un problema político en la Preparatoria de esa ciudad; un conflicto estudiantil en el Tecnológico de Juchitán y la campaña desatada en contra de la Casa de la Cultura de Juchitán.

*El obispado.* Desde el inicio de su gestión, el ayuntamiento de Juchitán mantuvo relaciones de simpatía con el Obispado de Tehuantepec. El encargado de la entidad religiosa, localizada a 30 kilómetros de Juchitán, es un sacerdote adentrado en los problemas de marginación, pobreza y hambre de los indígenas de su demarcación —huaves, zapotecas, chontales, zoques y mixes. Al lado de otros obispos de Oaxaca y Chiapas, está en la jurisdicción Pacífico Sur, con predominante influencia de los postulados de las Conferen-

cias católicas de Medellín y Puebla —conocidos como "Teología de la liberación". El obispo es un comprometido promotor social de las comunidades, en las que por medio de las comunidades cristianas de base promueve la formación de pequeñas cooperativas de producción y consumo y la discusión de los problemas sociales de sus miembros. Un cercano colaborador de Lona Reyes es el párroco de la iglesia del patrón de Juchitán, San Vicente Ferrer, también preocupado por la pobreza de sus feligreses y con presencia espiritual en los barrios pobres de esa población. Quizá esta relación del obispo y el hecho de compartir con la COCEI el principio de respetar las tradiciones y la cultura local es lo que hace coincidir sus intereses de desarrollo de la población.

Con el arribo de la COCEI al poder, los ataques que antes recibía el sacerdote por parte de los terratenientes y ricos de la región se incrementaron.

En el mes de septiembre de 1982, se inicia un conflicto en la Preparatoria de Tehuantepec, la cual forma parte de la Universidad de Oaxaca. Tres profesores son apoyados por un grupo de estudiantes frente a una decisión del director de la escuela. Los docentes —un sacerdote en funciones, un marista en vías de hacer los votos y uno retirado— presionaban

para lograr un horario de clases adecuado a las demás obligaciones de uno de ellos. El primero de octubre un grupo de alumnos —simpatizantes de la COCEI— toma las instalaciones para presionar a la dirección pero las desalojan al existir una mayoría que apoya al encargado (Revista *Tesis*, núm. 131, Juchitán, 11 de diciembre de 1982). Los primeros son juchitecos, mientras que el director y sus simpatizantes radican en Tehuantepec. Desde el cuatro de octubre los tehuanos —priistas y pepinosocialistas— toman las instalaciones de la escuela; los profesores son despedidos por la dirección y el problema trasciende a la capital del estado (*Hora cero*, núm. 55, Oaxaca, 13 de octubre de 1982). El problema crece porque la COCEI tiene un grupo de estudiantes universitarios en la ciudad de Oaxaca que presionaban al rector Zorrilla Cuevas para la reinstalación de los profesores despedidos. El rector ordena en dos ocasiones la reinstalación, pero como el director formaba parte del grupo de Niño de Rivera —hombre fuerte del PRI en la Universidad luego de la derrota del movimiento estudiantil en 1978— evade la solución incorporando al sindicato académico el asunto. Con la toma del Edificio Labastida en Oaxaca, la COCEI tiene dos formas de presión para el problema; el edificio albergaba las oficinas administrativas de la Universidad, las que apremiaban entrar en funciones, y aunque en Tehuantepec no tenía un apoyo mayoritario del alumnado, realizaba también la toma del edificio de esa escuela de nueva cuenta. Los priistas y pepinosocialistas de Tehuantepec —estudiantes y padres de familia— desalojan violentamente a los juchitecos, con saldo de dos mujeres heridas de bala.

El problema de la Preparatoria de Tehuantepec toma dos caminos sin abandonar el problema de la reinstalación. En Oaxaca se suma a la formación de fuerzas que se enfrentan ante la proximidad de la elección del nuevo rector. El edificio tomado, aunque con un reducido resguardo, se mantiene durante

más de tres meses. Finalmente, se desaloja al acordarse que sería el nuevo rector quien daría solución al conflicto.

En Tehuantepec el problema estudiantil se incorpora a la campaña priista contra la COCEI y además refuerza los ataques en contra del obispo, a quien se le acusa de dirigir a los estudiantes. El Frente Universitario del Istmo, grupo afín al director, impide el acceso a varios de los estudiantes que buscaban la reinstalación (*Hora cero*, núm. 65, Oaxaca, 23 de enero de 1983). Pero el problema salía del marco escolar. En años anteriores Lona Reyes había sufrido un atentado en la sierra y en marzo de 1981 incendian la palapa en donde se reunía el "centro pastoral diocesano"; ahora los estudiantes que apoyaban la dirección apedreaban el obispado y una escuela que éste sostenía. Desde que el conflicto se inició en octubre, el obispo era atacado en pintas, volantes y perifoneos. A principios de 1983, el asesinato del subdirector de la escuela preparatoria y de una secretaria —que tuvo móviles distintos al conflicto— sirve para enjuiciar indirectamente a Lona Reyes por parte de sus atacantes.

Uno de los principales cargos contra el obispo de Tehuantepec es el de ser protector de guerrilleros centroamericanos y de tener una alianza con la COCEI. Los sacerdotes, religiosas, misioneros y los movimientos cristianos de base de la región expresan su apoyo al religioso y rechazan los ataques que le formulan. El motivo oculto es que Lona Reyes simpatiza con las reivindicaciones de las comunidades por defender sus tierras y mejorar sus condiciones de vida ("Manifiesto de la Diócesis de Tehuantepec", en *Hora cero*, núm. 69, Oaxaca, 9 de marzo de 1983). El obispo reconocía estar sujeto a una persecución por parte de los caciques y ricos del Istmo al solidarizarse con los pobres y apoyar a refugiados centroamericanos que huían de la represión en su país —esta última era una actividad compartida por todos los obispos de la región; desmentía además los ataques

de comunista que se le asignaban (*Hora cero*, núm. 72, Oaxaca, 11 de mayo de 1983).

Los ataques contra el obispo no terminan después de desconocerse al ayuntamiento de Juchitán. Lona Reyes seguía viendo con simpatía la lucha de los juchitecos. En los primeros días de agosto de 1983, la Diócesis lanza un comunicado enfatizando la necesidad de que la voluntad del pueblo fuese respetada, sin manipulaciones, y que se crearan condiciones de libertad sin la presencia exagerada de fuerzas policíacas y militares en el área. Reconociendo en Juchitán "una larga historia de un pueblo politizado que lucha por caminos propios para encontrar soluciones a la injusticia y pobreza que rigen en esta ciudad desde hace mucho tiempo", el obispo pedía que se buscaran caminos pacíficos, lícitos y democráticos para solucionar esa crisis política ("Comunicado al pueblo cristiano", en *Hora cero*, núm. 78, Oaxaca, 17 de agosto de 1983).

El cuatro de septiembre, el "Rojo" Altamirano encabeza un grupo de priístas que llegan al obispado a amenazar al sacerdote, pero éste no se encontraba allí. Realizan un mitin en donde continúan atacándolo y buscan amedrentarlo para que no oficie la misa programada para el día cinco en Juchitán —que se unía a los festejos del ayuntamiento depuesto de la COCEI para inaugurar el Palacio Municipal y festejar la batalla del 5 de septiembre de 1866 en que ese pueblo derrotó al ejército francés. Ante las amenazas de provocar un enfrentamiento en plena misa, el obispo suspende la celebración, aunque envía una comunicación de apoyo al acto de la COCEI (*Hora cero*, núm. 81, Oaxaca, 14 de septiembre de 1983).

Meses después, debido al desalojo policíaco de los palacios municipales de Juchitán e Ixtepec, Lona Reyes emite un mensaje pastoral en el que lamenta la falta de diálogo por parte de las autoridades, llama a los gobiernos estatal y federal a ofrecer alternativas y denuncia la violación de los derechos

humanos en la región. Sin definirse abiertamente con la organización juchiteca, el obispo asume una actitud de compromiso con las luchas sociales de esa población ("Mensaje pastoral a los habitantes del Istmo de Tehuantepec", en *Hora cero*, núm. 92, Oaxaca, 25 de diciembre de 1983). Un poco antes, en relación con la proximidad de las elecciones municipales, el obispo publicaba una carta pastoral en la que pedía el respeto para los diversos partidos políticos, llamaba a evitar la violencia respetando las decisiones mayoritarias y solicitaba que las elecciones fueran un paso en la búsqueda del bien común de todos los oaxaqueños (*Hora cero*, núm. 87, Oaxaca, 16 de noviembre de 1983).

La campaña de agresiones hacia el obispo y su actitud comprometida con las luchas del Istmo fueron uno de los motivos para que fuera llamado a informar a Roma. A su regreso a México, Lona Reyes se mantenía convencido de la justeza de su comportamiento, que a su modo de ver había sido aprobado por el Papa.

*El Tecnológico de Juchitán.* Desde su nacimiento, la COCEI ha nutrido sus cuadros de agitación y organización en el medio estudiantil. Tanto en la preparatoria como en las secundarias y bachilleratos técnicos, pero principalmente en el Tecnológico del Istmo, la organización ha encontrado simpatizantes y reproducción en esos centros educativos. Durante los últimos diez años, el Tecnológico ha sostenido varias luchas en contra de la SEP, del gobierno estatal o bien contra los empresarios del transporte de pasajeros de la región. Tradicionalmente, la COCEI ha sido la principal fuerza en la institución.

Con el fortalecimiento del movimiento contrario al ayuntamiento, también se fortalece la fuerza de los grupos del PRI dentro del Tecnológico. En octubre de 1982 compiten por la representación estudiantil una planilla de la COCEI (del grupo estudiantil "Mártires del 20 de noviembre"), apoyada por el ayuntamiento, y una planilla apoyada por el CCDDPJ,

la dirección de la escuela y el personal académico cercano al "Rojo" Altamirano. El día del recuento, por algunas irregularidades, se anula el proceso que parecía indicar el triunfo de la planilla de la COCEI. El notario que vigiló el escrutinio no entregó el acta correspondiente, lo cual propició un conflicto. El 25 de octubre la planilla triunfadora recibe la sucesión del anterior comité estudiantil, pero la dirección de la escuela niega el reconocimiento.

El 23 de noviembre, a un mes de realizadas las elecciones estudiantiles, la planilla de la COCEI se posesiona de tres departamentos administrativos de la institución para presionar por su reconocimiento pero son desalojados por los estudiantes que apoyan al director. Un grupo mayoritario de maestros priístas se une a estos últimos y se declara en paro de labores, exigiendo la expulsión de varios integrantes de la planilla de la COCEI (*Hora cero*, núm. 63, Oaxaca, 29 de diciembre de 1983).

En el mes de enero el conflicto continuaba. El director del plantel era acusado de estar relacionado con Cecilio de la Cruz —hermano de quien fuera candidato del PRI en las elecciones de marzo de 1981—, con el Diputado Federal Raúl Enríquez Palomec y con los dirigentes del CCDDPJ. La expulsión de varios estudiantes acrecienta el descontento de la planilla no reconocida. Se dan enfrentamientos físicos —sin consecuencias graves— entre los dos grupos estudiantiles y la policía estatal se establece de manera permanente en la escuela para evitarlos en el futuro. El gobierno del estado veía surgir un nuevo problema hacía él mismo, ya que recibían presiones de la COCEI y del CCDDPJ para resolver el conflicto. Sin embargo, el problema sería atendido por una entidad federal: un comisionado de la SEP interviene para solucionarlo; se expulsa a cuatro estudiantes y a un profesor y se reconoce el triunfo de la planilla de la COCEI (*Hora cero*, núm. 67, Oaxaca, 16 de febrero de 1983). La policía

continuaría durante algún tiempo más en las instalaciones.

Sin embargo, el problema sólo se resolvía de manera provisoria. Los dos grupos estaban ya constituidos y la unidad de uno de ellos con la dirección y el profesorado no era gratuita. Reflejaban la forma en que las fuerzas políticas del municipio se expresaban en otros ámbitos de la realidad. El 2 de junio se vuelve a dar otro enfrentamiento entre los dos grupos, aunque la dirección responsabiliza a los estudiantes que habían sido expulsados en febrero (*Noticias*, Oaxaca, 4 de junio de 1983).

*La Casa de la Cultura.* Cada espacio de la vida social juchiteca era ganado para expresar el conflicto entre los grupos sociales que dirimían la historia contemporánea local. La Casa de la Cultura de Juchitán (Guidxi Guianebiaani) fue uno de estos lugares. Fundada con la iniciativa del pintor juchiteco Francisco Toledo y de otros artistas, la Casa se convierte en un sostén fundamental de la política cultural del ayuntamiento, como creadora de consenso interno y forma de difusión hacia el exterior. El ayuntamiento —bajo la dirección de intelectuales de la Casa— publica una revista, folletos y libros —fenómeno poco común en México— que pretenden reproducir la historia y cultura zapotecas del Istmo y Juchitán. Además, la Casa de la Cultura se encargó de fortalecer un resurgimiento artístico y cultural en la población a través de talleres, exposiciones y apoyos para la reproducción pictórica, poética y de la historia oral y la danza zapotecas.

La actividad de Macario Matus, al estar encargado de una institución que dependía de una instancia federal —el Instituto Nacional de Bellas Artes—, no expresaba un actitud política abierta. Su labor dentro de la cultura juchiteca y la difusión de ésta en las publicaciones eran actividades difícilmente cuestionables por los enemigos del ayuntamiento, a pesar de conocer los vínculos que existían entre éste y el poeta.

Sin embargo, en la primera quincena de 1983, el director de la Casa hace unas declaraciones a *Excélsior* acusando a siete familias de destacados priístas de ser los principales acaparadores de las tierras comunales de Juchitán. Las respuestas no se hacen esperar. Primero, los acusados —Mario Bustillos, Mario Marín, Norberto Cortez, Humberto López Lena, Manuel Musalem, Rafael González Román y Edilberto Aragón— niegan tener posesión de la mayoría de hectáreas de la comunidad (Revista *Tesis*, núm. 136, Juchitán, 5 de febrero de 1983). Uno de ellos, además de desmentir la acusación, hace imputaciones sobre la vida privada de Matus; mientras que otro procede judicialmente.

El tocar frontalmente el que es quizás el principal problema social de Juchitán —el acaparamiento de la tierra comunal—, colocó al director de la Casa de la Cultura en una posición de enfrentamiento que su actividad no le permitía. La COCEI podía, y así lo ha hecho durante años, acusar sin temor a ser cuestionada a los que han concentrado las tierras de los campesinos indígenas. Pero el encargado de la actividad cultural en Juchitán no podía desde este campo, sin mediaciones adecuadas, hacerlo. Se inicia una campaña en contra del director de la Casa. El 2 de febrero es compelido a comparecer en el juzgado para fundamentar sus declaraciones. Acompañado de un contingente de la COCEI, el poeta sale librado al declarar que no hizo más que vertir acusaciones que durante diez años se habían hecho en distintos medios de comunicación. La visita ocasiona nuevas fricciones entre el grupo priísta y la COCEI; la declaración de Matus termina en mitín político (*Hora cero*, núm. 67, Oaxaca, 16 de febrero de 1983).

La posición de Macario Matus como funcionario del INBA, luego de sus declaraciones, le crea una serie de ataques a su persona. Su importante labor de apuntalamiento cultural del movimiento social de la COCEI se empezaría a cuestionar. El 9 de febrero, durante una

reunión de directores de casas de la cultura de Oaxaca celebrada en Tehuantepec, el "Rojo" Altamirano y sus seguidores hacen un mitin en el que acusan a Matus de ser controlado por la COCEI (Revista *Tesis*, núm. 137, Juchitán, 19 de febrero de 1983). Los ataques se suceden durante los meses de febrero y marzo: volantes, denuncias en la radio, insultos y amenazas personales son vertidos. El 19 de marzo es pintarrajeado el edificio cultural y el 24 es amenazado por algunos profesores priístas descontentos por los murales que iniciaban en las paredes de la ciudad varios pintores jóvenes. El poeta había cometido un error político al no entender el papel esencial que su labor cultural tenía para la lucha y en cambio abrirse a la actividad política directa. Ahora se cuestionaba y ponía en peligro la vida cultural que promovía a través de Radio Ayuntamiento o en la obra de pintores y poetas, y la recuperación oral de la historia juchiteca. Los ataques se multiplican hasta el punto de crearse un comité de defensa de la Casa de la Cultura integrado por artistas juchitecos y oaxaqueños.

Pero las presiones del priísmo dan resultado. A fines de mayo, la dirección del INBA —inclinada quizás por presión del gobierno estatal, que tiene cierto peso en los nombramientos de los directores— le comunica a Matus que lo cambiará de adscripción. Inmediatamente se organiza la defensa del poeta. Intelectuales nacionales exigen su reinstalación inmediata y el cese a este tipo de represiones. El propio Francisco Toledo regresa del exterior del país para encabezar el resguardo de las instalaciones de la Casa, exigiendo la revocación de su desplazamiento (*Noticias*, Oaxaca, 11 de junio de 1983). Las presiones tienen su efecto, y, tres días después de la primera orden, el INBA comunica que no lo destituía sino que le ofrecía una jefatura de estudios regionales; pero decide reinstalarlo en su función anterior. No obstante, el gobierno estatal tardaría en entregar la parte del subsidio que le correspondía.

La acción contra la Casa de la Cultura reflejaba las nuevas condiciones de las fuerzas priístas y gubernamentales en Oaxaca. Pero la presencia del INBA en el problema, con una visión más liberal que la que las fuerzas estatales locales podían tener, hace que se logre evitar el golpe contra el bastión de la Casa de la Cultura. La COCEI ganaba en esta ocasión.

## 2. EL CALOR DE MAYO Y SUS CHUBASCOS

La marcha campesina de febrero es el acontecimiento por medio del cual la COCEI expresa su máxima capacidad de movilización, solidaridad y negociación favorable a sus exigencias pudiendo mantenerse al margen de las provocaciones del CCDDPJ. Los meses de marzo y abril son los de la organización y reajuste soterrado de las fuerzas priístas de Juchitán y del CDE del partido. El mes de mayo es, sin embargo, el periodo en el que el perfil social de la COCEI amenaza con convertirse en fuerza estatal real. Los temores de la marcha de febrero se concretan en acciones directas del movimiento social en inversiones de tierras y huelgas de trabajadores. El enfrentamiento en Juchitán pasa del plano meramente político-electoral formal a encarnarse de manera clara en la lucha de los grupos sociales antagónicos locales en defensa de sus intereses. La agitación y la movilización se convierten abiertamente en los vehículos de la lucha social frontal. La lucha en mayo incorpora la disputa por las condiciones materiales de existencia de los grupos sociales contrapuestos del municipio; esta situación lleva a expresarse orgánicamente a todas las fuerzas detentoras del poder económico y político de la entidad y definirse abiertamente frente al conflicto. La posición del gobierno estatal se endurecerá frente al ayuntamiento, aunque seguirá siendo partici-

pe de una salida no violenta al problema. Para la COCEI y el ayuntamiento, el mes de mayo es el relevo —en orden de importancia— de la defensa y exigencia frente al gobierno de los derechos del ayuntamiento y de los grupos explotados, a una ofensiva generalizada en contra de los propietarios del municipio; la acción directa reivindicará los derechos de los trabajadores asalariados de la COCEI y la recuperación de las tierras comunales.

En febrero, la COCEI enfrentaba al gobierno estatal conjuntando demandas del municipio juchiteco y de otras poblaciones de la región; la movilización buscaba la negociación con el aparato estatal. En ese mes, el enfrentamiento con el PRI y CCDDPJ en el municipio revestía formas políticas adecuadas al sistema electoral (aunque meses antes se había dado un enfrentamiento con los empresarios a raíz de la huelga en la Coca-Cola). Ahora, en mayo, la acción directa originaría una recomposición de las alianzas de fuerzas que enfrentaban a la Coalición. La lucha política —en la que el ayuntamiento aparecía como primer actor— dejaba su lugar a la lucha social; los grupos se enfrentaban en el terreno material. Ya no se trataba de la difusión cultural e ideológica o del apoyo a las gestiones de las autoridades locales. Las invasiones de tierra y el paro eran las principales formas de combate. La política llegaba a las mismas empresas, a las extensiones del distrito de riego y al propio espacio urbano. Esto llevaría a tres situaciones nuevas en las relaciones de fuerza. *Primero*. Al invadirse un lote de terreno perteneciente al gobierno y al suspenderse las actividades en una dependencia gubernamental, la respuesta estatal abandona la negociación que había acostumbrado. *Segundo*. Los grupos sociales y económicamente dominantes de Juchitán, empresarios, comerciantes y propietarios agrarios, serán afectados en sus intereses materiales. La amenaza que pendía sobre los propietarios —que algunos de ellos com-

prendieron desde el principio— a partir de la toma del poder por la COCEI se convertía en realidad; el movimiento social invadiría tierras de origen comunal y exigía mejores condiciones salariales en las principales empresas. *Tercero*. La situación anterior lleva a que la iniciativa privada oaxaqueña —principalmente empresarios y comerciantes— exprese su rechazo a la COCEI y apoye a sus congéneres de Juchitán.

En el plano local, la COCEI enfrentará a los grupos económicos dominantes y a su vanguardia política. Estatalmente, el gobierno endurecerá su política hacia el ayuntamiento como resultado de las nuevas formas de movilización de la COCEI y por las presiones de la iniciativa privada oaxaqueña, la fracción más conservadora del PRI y los partidos de derecha. El abanico de las fuerzas inmersas en el "asunto Juchitán" se abre, la COCEI queda como fuerza única a vencer, y las formas del enfrentamiento empiezan a ser compartidas por sus opositores. Local, regional y estatalmente, las fuerzas del poder oaxaqueño empiezan a adquirir coherencia frente al enemigo común. En Juchitán, los conflictos interpriístas se suspenden temporalmente, el CCDDPJ y el comité municipal del PRI se unifican para oponerse a la Coalición. El PPS juchiteco y de todo el Istmo apoya las posiciones del PRI en el área en relación con Juchitán. La Cámara de Comercio juchiteca y las cámaras de comercio de las ciudades istmeñas —coordinadas por un miembro de la familia López Lena— participan activamente al ser afectados sus intereses económicos. Igual acontece con los propietarios agrícolas.

Estatalmente, las cámaras de comercio aglutinarán en torno suyo a toda la iniciativa privada oaxaqueña, e incluso a sectores medios de la población que pertenecen a la CNOP para presionar al gobierno en su actitud hacia Juchitán.

Las nuevas formas que adopta la lucha y las fuerzas sociales que incorpora activamente hacen que la Secretaría de Gobernación

aparezca en la escena política —siempre había estado ahí como expectadora, e incluso como instancia de apoyo del ayuntamiento en su enfrentamiento con el gobierno estatal y con el CCDDPJ. Ahora, en mayo, la presencia de Gobernación no era para garantizar los postulados de la Reforma Política, sino para amenazar al movimiento social.

### 3. EL MOVIMIENTO LABORAL

En páginas anteriores dije que la organización de los trabajadores asalariados de la COCEI no se iniciaba en el centro de trabajo —a la manera clásica de la penetración ideológica. En el caso de Juchitán, la organización de los comités de barrio como instancia de movilización y lucha en la ciudad por parte de la Coalición es fundamental. La COCEI es dominante en varios barrios, principalmente los habitados por campesinos comuneros y ejidatarios pobres, jornaleros agrícolas, artesanos, pequeños comerciantes y pescadores. El nexa barrial de los hijos de estas familias es un factor importante para la simpatía de los trabajadores asalariados por la Coalición. Posteriormente, este vínculo ideológico llega al centro laboral formando sindicatos o creando grupos de trabajadores que exigen reivindicaciones a los sindicatos existentes; incluso se cuestionan las mismas organizaciones sindicales en que participan para democratizarlas y ganarlas a favor de la COCEI (lo anterior fue lo que ocasionó la huelga en la empresa refresquera meses antes). La rebelión de algunos grupos de trabajadores en contra de sus dirigencias sindicales llevó a las centrales de trabajadores oficiales de Juchitán (CROC, CROM y CTM) a una comunión con el sector empresarial para enfrentarlos.

El 20 de marzo, sin una fuerza verdadera aún, se creaba la Central de Trabajadores del Istmo (CTI) que decía agrupar a trabajadores de Salina Cruz, Unión Hidalgo, Juchitán, Ix-

tepec, Zanatepec, Tapanatepec, Chahuities, Santa Cruz Bamba y Tehuantepec. La CTI nació afiliada a la COCEI y a una Coordinadora Sindical Nacional. Las principales demandas que establecía a corto plazo para sus agremiados eran: aumentos salariales superiores a los topes oficiales; indemnización a los despedidos por ajustes empresariales; participación de utilidades; mejoramiento del servicio médico del Seguro Social; derecho a la vivienda; respeto a la jornada de ocho horas y democracia sindical (*Hora cero*, núm. 70, Oaxaca, 27 de marzo de 1983). Los miembros de la CTI laboraban en las siguientes empresas: Refinería del Pacífico y el Dique Seco —en Salina Cruz—, Cementera Cruz Azul —Lagunas—, Maquinaria Agrícola de PRONAGRA, Calera la Tehuana, Molino de Arroz Presidente Juárez, Embotelladoras Coca-Cola y Barrilitos O'key y las Distribuidoras de cerveza Modelo y Superior —todas estas empresas ubicadas en Juchitán. Existía, además, un grupo de peones y jornaleros agrícolas de Juchitán. Desde su creación, la CTI declaraba tener emplazamientos a huelga en las siguientes empresas: Calera la Tehuana, Fábrica de Hielo González Román y Cía., Cervecería Modelo y Cervecería Moctezuma (*Hora cero*, núm. 70, Oaxaca, 27 de marzo de 1983). En caso de que sus demandas no fueran cumplidas, amenazaban con iniciar las huelgas simultáneas el primero de mayo.

El día del trabajo, las organizaciones campesinas y laborales de la COCEI realizan una marcha independiente en Juchitán. Al finalizarla, se realiza la invasión de un predio urbano perteneciente al Instituto de la Vivienda de Oaxaca (IVO) —del gobierno estatal; los posesionarios inician inmediatamente la construcción de chozas de barro, madera y palma (*Noticias*, Oaxaca, 3 de mayo de 1983). En los días siguientes, la CTI estalla huelgas en la Distribuidora de Cerveza Carta Blanca, la Fábrica de Hielo González Román y en el Molino de Arroz Presidente Juárez ("Desplegado de la CTI", en *Hora cero*, núm.

73, Oaxaca, 31 de mayo de 1983). Estas huelgas se gestan con la oposición de las centrales laborales a las que los sindicatos estaban afiliados. El martes 3 de mayo, los trabajadores de la Central de Maquinaria Agrícola —del gobierno estatal— inician también un movimiento huelguístico exigiendo aumento salarial de emergencia, respeto a la jornada de ocho horas y reparto de utilidades. El día del trabajo marcaba una ronda nueva de enfrentamientos sociales en el municipio. La respuesta gubernamental sería represiva y policiaca en el caso de las invasiones, y de apagar el conflicto mediante los trámites burocráticos en los paros laborales.

La primera respuesta del gobierno ante la invasión de su propiedad es negar el derecho de audiencia al ayuntamiento. El gobernador requería del cabildo el desalojo de las familias invasoras como requisito previo para atender cualquier gestión de éste —el chantaje económico se daba nuevamente (*Hora cero*, núm. 73, Oaxaca, 31 de mayo de 1983). La comunicación con las autoridades estatales se fracturaba. La administración Vásquez Colmenares iniciaba nuevas relaciones con el CCDDPJ y la invasión del terreno era un ataque a su patrimonio y autoridad. En la madrugada del sábado 7, un dispositivo de decenas de policías del estado desaloja sorpresivamente a los invasores —alguna de las versiones afirmaba que la policía había sido acompañada por miembros del CCDDPJ. Respuesta de la sorpresa, la COCEI se apodera de una radioemisora privada —de la familia López Lena— para denunciar el desalojo, pero la policía interviene nuevamente para hacerlos abandonar la estación. Sin embargo, por la tarde, la COCEI realiza una gran concentración frente al Palacio, marcha hacia el predio, hace huir a la policía y se apodera nuevamente del terreno (*Hora cero*, núm. 72, Oaxaca, 11 de mayo de 1983).

#### 4. EL PODER DE LOS PROPIETARIOS

Pero lo más peligroso para el movimiento social fue la intervención de las fuerzas económicas de la entidad. El enfrentamiento entre patronos y trabajadores es más violento en contextos sociales como el de Oaxaca; la huelga en pequeñas y medianas empresas industriales y comerciales, cuando es el comercio la principal fuente de acumulación, despierta reacciones tensas entre los propietarios, quienes temen perder sus privilegios por la amenaza laboral de obtener condiciones de trabajo comunes en otras partes de México. No es raro encontrar entre los empresarios oaxaqueños la opinión de que es preferible la inversión comercial a la industrial, por las secuelas de sindicalización que supone esta última. Por eso, en el estado el comercio es la principal actividad empresarial, seguida de los servicios —transporte, turismo y otros— y en menor medida existe un pequeño grupo de industriales —algunas veces vinculados con el comercio también. Éstos son los grupos económicos dominantes en la capital del estado y en las principales ciudades de Oaxaca, ya que en el campo predomina la producción agrícola y ganadera en grandes extensiones territoriales vinculadas con las formas de poder caciquil orientadas a la comercialización —grupos de productores rurales de esta naturaleza se encuentran en las regiones de Tuxtepec, la Costa y el Istmo oaxaqueño.

Desde que la COCEI se hizo cargo del ayuntamiento, los grupos económicos dominantes de Oaxaca estuvieron descontentos con la situación. Pero no llegaron a una acción conjunta que los identificara frente al nuevo ayuntamiento. De todos los grupos económicos de la entidad, el de mayor peso político es el organizado en torno de la Cámara de Comercio de la ciudad de Oaxaca. Su posición geográfica, su importancia económica y la participación de varios dirigentes de ella en

la propiedad de algunos diarios estatales le dan esa fuerza. Los propietarios agrarios y empresarios agrícolas, salvo cuando son afectados en sus áreas de acción, no se expresan permanentemente en la vida política pública de la entidad, ni durante mucho tiempo; aunque sus formas de acción directa —pistolero, represión, etcétera— sí tienen bastante peso político.

Las huelgas de principios de mayo inquietaron a toda la iniciativa privada oaxaqueña llevándola a actuar directamente en el escenario político. Los comerciantes empiezan a exigir garantías para los inversionistas y repudian las huelgas de Juchitán. Se expresan contra la COCEI acusándola de crear la violencia en el Istmo y presionan públicamente para que el gobernador suspenda la negociación frente al movimiento social (*Noticias*, Oaxaca, 8 de mayo de 1983). Pero, además, querían que el gobierno federal interviniera más profundamente en el conflicto y cambiara sus anteriores posturas frente al ayuntamiento. Para lograr tales cambios de rumbo, los comerciantes tenían que lograr el apoyo de toda la iniciativa privada oaxaqueña e incluso de otros sectores sociales sin predominio económico. Y lo lograron.

La Cámara de Comercio de Oaxaca agrupa a todas las instancias del gran comercio de la capital, los servicios turísticos y el transporte de pasajeros en automóviles de la ciudad. En esos días, la Cámara se convierte en el grupo dirigente de toda la iniciativa privada de Oaxaca y consigue la alianza de los comerciantes medios —un sector de movilización política importante en la entidad— que expenden en los mercados de la capital del estado.

Para presionar a los gobiernos estatal y federal, el 12 de mayo se realiza un paro general de actividades en todo el estado. Las poblaciones más importantes de Oaxaca suspenden sus actividades comerciales, industriales y de servicios del transporte. En la capital del estado, los comercios afiliados a la

Cámara, el pequeño comercio, todos los mercados públicos, el servicio de taxis, el de mudanza y el de transporte de carga foráneo, las panaderías y las pequeñas industrias suspenden sus labores en su mayoría. Las organizaciones que a nivel estatal se incorporaron fueron: las diez cámaras de comercio de Oaxaca, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, el Comité Coordinador Empresarial, la Cámara de la Industria Panificadora, las organizaciones de locatarios de la capital, la Cámara del Pequeño Comercio, la Federación de Permisarios de Autos de Alquiler, el Comité Estatal del Autotransporte Federal, los permisarios de acarreo y mudanzas y la Asociación de Hoteleros (*Noticias*, Oaxaca, 9 de mayo de 1983).

La Cámara de Comercio de Oaxaca dirigía a toda la iniciativa privada de la entidad en una acción de gran peso político. Aunque no se suspendieron el total de las actividades programadas, sí pararon la mayoría de las empresas, incluyendo las de Juchitán.

Un elemento a resaltar es que los pequeños comerciantes de los mercados y los organismos del transporte de mudanzas, foráneo y de autos de alquiler pertenecen a la liga estatal de la CNOP. Como en otras ocasiones, el grupo de los hermanos Gutiérrez Ruiz, dirigentes de la CANACO de Oaxaca, los incorpora por medio de una alianza histórica que tienen con la lideresa de los mercados Genoveva Medina —ex-diputada federal y actual senadora suplente— y el dirigente de los taxistas. Siendo miembros del partido oficial, participaron con los grupos dominantes para presionar al gobierno, sin que éste pudiera evitar su indisciplina. La alianza no tiene nada de casual; desde fines de los años cuarenta y principios de los cincuenta, los expendedores de los mercados han mantenido relaciones de alianza con los grandes comerciantes de la capital en las luchas para desconocer a dos gobernadores —Mayoral Heredia, en 1952 y Edmundo Sánchez Cano, en

1948. Esa alianza continuó firme en las luchas de 1975 y 1976, cuando se opusieron a la destitución del gobernador Zárate Aquino.

La forma en que la burguesía oaxaqueña presenta su movilización pretende recuperar apoyo de otros sectores de la sociedad. Al rechazo de las huelgas de algunas empresas y la toma de una estación de radio en Juchitán, se agregan demandas que buscan solucionar el grave problema del agua potable en la ciudad de Oaxaca y el cese de las arbitrariedades de la policía federal.

El poder económico de la entidad exigía una redefinición del espectro político de las fuerzas. Las huelgas de mayo traen a los propietarios urbanos del estado a la lucha contra la COCEI de manera directa. Por un lado, presionando desde sus organismos gremiales y sus simpatizantes incrustados en el PRI y la administración Vásquez Colmenares y, por el otro, llamando a la injerencia directa del gobierno federal.

Los propietarios de Oaxaca exigían garantías para el comercio y la industria juchitecos. Las relaciones entre los dos grupos regionales parecían estar encaminadas al mismo fin. La CTI se consideraba como un organismo de agitación que al cerrar algunas empresas actuaba fuera de la ley. La supuesta ilegalidad provenía de que la COCEI había ganado a las bases sindicales de esas empresas y las huelgas se ejercían con oposición de los dirigentes oficiales.

Un día antes del paro estatal de la iniciativa privada, el miércoles 11 de mayo, el Secretario General de Gobierno declaraba que los problemas laborales tendían a resolverse luego de que Vásquez Colmenares decretó la creación de una Junta Especial de Conciliación y Arbitraje —que se estableció en Tehuantepec para evitar movilizaciones frecuentes de la COCEI— que fiscalizara los problemas. El gobierno pensaba que de esa manera se verificaría la legalidad de los procedimientos seguidos, obligando a la COCEI a acatarse a ellos para que las huelgas fueran

consideradas legales. Para ese día sólo continuaba en huelga una de las empresas, ya que las demás habían entrado en el burocratismo de los procedimientos exigidos por el tribunal (*Noticias*, Oaxaca, 11 de mayo de 1983).

Al anunciarle al gobernador la decisión de efectuar el paro, al mismo tiempo que afirmaban que realizarían otros subsiguientes en caso de no resolverse sus peticiones, los comerciantes solicitan a Vásquez Colmenares que les tramite una entrevista con la Secretaría de Gobernación para hacerle saber sus demandas. El futuro del ayuntamiento se perfilaba en algunas declaraciones de empresarios y políticos ligados a ellos. El Centro Patronal de Oaxaca no sólo se incorporaba al paro, sino que además se pronunciaba por la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (*Noticias*, Oaxaca, 12 de mayo de 1983). El líder de la cámara de diputados, Raúl Bolaños Cacho, declaraba que, de acatarse las nuevas reformas constitucionales al Artículo 115, la Legislatura podía decretar la desaparición de poderes en Juchitán ya que, a su modo de ver, los trabajadores habían sido alentados y casi obligados por la COCEI a tomar las empresas (*Noticias*, Oaxaca, 13 de mayo de 1983).

El paro de labores, organizado por la iniciativa privada, se efectúa a pesar de los avances en las negociaciones de las huelgas. El sector privado quería ir más allá del rechazo a ellas, capitalizando la movilización para lograr un mayor peso en la toma de decisiones del gobierno. Y eso lo han logrado; la presencia en Palacio de Gobierno del líder de los comerciantes de Oaxaca es permanente desde entonces. Así, el comercio de la capital no sólo defendía los intereses del gremio empresarial de la entidad sino que también buscaba materializar su importancia dentro de la administración.

Pero la administración Vásquez Colmenares tenía todavía espacios de autonomía frente a los propietarios. Respetaba el paro comercial y empresarial, pero llamaba a los

grupos a no actuar como grupos de presión. Sosteniendo el empuje empresarial, afirmaba que los problemas políticos deberían resolverse políticamente y la forma era a través de las urnas electorales (*Noticias*, Oaxaca, 14 de mayo de 1983). El dirigente estatal del PRI secundaba la opinión del gobernante, pero los sectores obreros del PRI repudiaban las huelgas e incitaban a la represión. Igual posición autoritaria tenía la Barra de Abogados, el Colegio de Arquitectos y la CCI. El Partido Acción Nacional capitalizó el paro comercial para efectuar un mitin de rechazo a la COCEI en el centro de la capital.

Si bien el gobernador declaraba no actuar bajo presiones, desde los primeros días de mayo se instala de manera permanente una guarnición de policía en Juchitán comandada por el jefe de la policía estatal (*Hora cero*, núm. 73, Oaxaca, 31 de mayo de 1983). Luego de la recuperación del terreno, los precaristas estuvieron amenazados por un nuevo desalojo ya que varias patrullas policíacas vigilaban de cerca todos los días.

Las huelgas eran controladas por el gobierno. En junio, la CTI denunciaba las maniobras dilatorias de la Junta de Conciliación en el emplazamiento de los trabajadores del molino de arroz; la petición no era tramitada porque la directiva oficial del sindicato había presentado un contrato firmado conjuntamente con la empresa (*Noticias*, Oaxaca, 19 de junio de 1983).

La CTI expresaría su presencia en otros núcleos de trabajadores. Desde los primeros días de junio, los choferes, mecánicos y personal de la empresa "Servicios Especializados Huerta", que transportaba derivados del petróleo, iniciaban una huelga por el respeto a sus niveles salariales que la patronal quería disminuir alegando reducción de sus ganancias. También los trabajadores del volante de las líneas de pasajeros —Cristobal Colón, Golfo-Pacífico y Unión de Propietarios de Camiones del Istmo— reclamaban desde meses atrás, efectuando suspensiones del servi-

cio, aumentos salariales, mantenimiento de las unidades y respeto a la democracia sindical ("Manifiesto de la CTI", *Hora cero*, núm. 75, Oaxaca, 20 de julio de 1983). La huelga de los piperos se prolongaría por más de cuarenta días a pesar de las movilizaciones para resolverla (*Noticias*, Oaxaca, 18 de julio de 1983). Estos dos problemas repercutían en la región del Istmo ya que las líneas de pasajeros funcionan principalmente en la zona y las pipas transportan líquido de Salina Cruz a la ciudad de México.

En las empresas de Juchitán tomadas por los trabajadores y en las que existían emplazamientos de huelga, el gobierno estatal facultó la instalación de patrullas policiacas en sus instalaciones para prevenir posteriores paralizaciones. Combinando el resguardo policiaco con los vericuetos legales del tribunal laboral, el gobernador impedía que la violencia física surgiera en los problemas laborales. Pero no podía hacer extensiva esta actitud en los problemas relacionados con la tenencia de la tierra y la lucha electoral.

## 5. PROBLEMAS AGRARIOS Y ENFRENTAMIENTOS

Las huelgas pudieron dirimirse sin enfrentamientos físicos a pesar de que existían relaciones de provocación entre los simpatizantes de la COCEI, los dirigentes de las centrales sindicales oficiales y los patrones. El conocimiento de las empresas en conflicto permitían al sistema policiaco adelantarse a las consecuencias. Pero en el problema agrario y en la lucha electoral los enfrentamientos no podían predecirse. La fuerza policiaca tendría una doble función aquí: presionaba con su presencia a la COCEI, pero no podía evitar los enfrentamientos —a pesar de que su objetivo pudo haber sido éste.

Las agresiones se iniciaron en el municipio de San Francisco del Mar —municipio huave

perteneciente al distrito de Juchitán. Al invadir una extensión de tierra de pastizales, los campesinos coceístas son rechazados por los ganaderos de esa población, militantes del PRI todos ellos. Hubo varios lesionados y al estar en mayoría los ganaderos, aprehendieron a varios campesinos de la Coalición, los que fueron rescatados posteriormente por la policía (*Noticias*, Oaxaca, 10 de junio de 1983).

La violencia se acrecienta cuando se inician las campañas para la elección de diputados locales. El CCDDPJ, al dirigir la oposición al ayuntamiento, lograba la postulación del "Rojo" Altamirano, quien contendría contra el Síndico Municipal, Desiderio De Gives, candidato de la Coalición PSUM-COCEI. Las campañas expresaban la tensión política y se mezclaban con la lucha social permanente desde mayo en Juchitán.

El 19 de junio, en Xadani, cuando los grupos de los dos candidatos realizaban sus campañas simultáneamente, se produce de nuevo el enfrentamiento. Varias personas, la mayoría de ellas simpatizantes priístas resultaron heridas por piedras (*Noticias*, Oaxaca, 20 de junio de 1983). Algunas noches antes, luego de que la policía municipal efectuara la detención de un individuo acusado de malversar los fondos de una obra de electrificación de un barrio juchiteco, la policía estatal desaloja al "Rojo" Altamirano y sus seguidores, los cuales se habían apostado frente al Palacio Municipal para exigir la libertad del aprehendido —se dijo que a pesar de estar amparado se realizó su detención. El PRI denunciaría la actitud de la policía estatal, al querer evitar un enfrentamiento (*Noticias*, Oaxaca, 17 de junio de 1983).

El 2 de junio, cuando la COCEI quería iniciar un acto de campaña en el municipio de San Francisco del Mar, el presidente y simpatizantes del PRI les cerraron el paso. Sin embargo, los coceístas rompieron el cerco e intentaron realizar el mitin en el centro del poblado. Se produjo otra vez un enfrenta-

miento entre las fuerzas y varias personas resultaron lesionadas e incendiada una camioneta del Ayuntamiento de Juchitán. La policía y un grupo de marinos permanecieron a la expectativa sin intervenir en los hechos (*Noticias*, Oaxaca, 4 de julio de 1983).

Algunos días después, un grupo de campesinos pobres de la agencia municipal de la Ventosa invade 280 hectáreas de terrenos de riego que eran propiedad de un empresario de San Luis Potosí. La COCEI recurría a la justificación del decreto presidencial de 1964 que creaba el ejido para Juchitán y anexos. Pero en esa zona, por vía del hecho, la tierra es considerada de propiedad privada. La invasión de la Ventosa agudiza los conflictos porque se realiza en periodo electoral. El dirigente regional de la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, Porfirio Montero —quien había figurado como uno de los posibles candidatos a la dirección del CM priístas—, exige el desalojo inmediato de los invasores (*Noticias*, Oaxaca, 11 de julio de 1983). Una concentración multitudinaria de la COCEI el día anterior en la cabecera municipal hacía temer a los propietarios la continuidad de las invasiones. El terrateniente José Terán demandaba, dos días después, protección policiaca en sus terrenos por temor a que fueran invadidos (*Noticias*, Oaxaca, 13 de julio de 1983).

El 14 de julio, en audiencia con el presidente juchiteco, el gobernador solicita que sean desocupados los terrenos invadidos en la Ventosa (*Noticias*, Oaxaca, 15 de julio de 1983). Pero los invasores continúan posesionados de la tierra. Así que, atendiendo las presiones de los propietarios privados, el gobernador ordena que la policía estatal desaloje a los campesinos el domingo 17 por la madrugada. Por la mañana, al acudir al lugar del desalojo, el pintor Toledo, un periodista y un poeta de la Casa de la Cultura son golpeados y robados por un grupo de priístas del CCDDPJ, sin que la policía haga algo por evitar la agresión (*Hora cero*, núm. 76,

Oaxaca, 3 de agosto de 1983). El cabildo acude más tarde para pedir a la policía que respete un acuerdo establecido con el gobernador, el cual estipulaba que sería el 20 de julio cuando se determinaría la solución al problema agrario. Nada se consigue y deciden realizar una marcha por las calles del poblado citado, originándose una balacera y enfrentamiento entre coceístas y los priístas de la pequeña propiedad. El saldo es de un herido grave de la COCEI, una lesión de postas en un brazo del Presidente Municipal y el incendio de una camioneta del ayuntamiento (*Hora cero*, núm. 76, Oaxaca, 3 de agosto de 1983). La policía no interviene para prevenir el choque.

La COCEI había sido la vencida en este momento y aparecía como el sector agredido. La amenaza de la policía era utilizada por los propietarios agrarios como protección y como apoyo indirecto en el enfrentamiento. El gobernador acusaba al presidente de Juchitán de querer hacerse pasar como mártir y justificaban el desalojo como medida para evitar la violencia entre los grupos.

Con el problema de la Ventosa, el de Juchitán se tornaba más violento. La distancia espacial entre la acción de la COCEI y la del ayuntamiento no existía ya más. Se movían a partir de ese momento como fuerza única de lucha política y social. Los actores sociales en el municipio se agrupaban en tres instancias: la COCEI, el ayuntamiento y sus aliados y el PSUM; el PRI municipal, el CCDDPJ y la iniciativa privada —agraria y empresarial—, y la policía como garante de la presencia del gobierno del estado, que buscaba evitar caer en el centro de los enfrentamientos físicos.

Al día siguiente, el gobernador se responsabilizaba del desalojo (*Noticias*, Oaxaca, 19 de julio de 1983). La policía estatal había desarmado a la escolta del ayuntamiento despojándola de cinco escopetas (*Noticias*, Oaxaca, 20 de julio de 1983). Al exigir Polo de Gives la devolución de las armas, el gobierno rechaza la petición y amenaza proce-

der contra la policía municipal; se le exige a Gives una relación del armamento y número de policías existentes, ya que se considera que se excede del reglamentado en la Ley Orgánica Municipal (*Noticias*, Oaxaca, 27 de julio de 1983).

Las relaciones del gobierno y el ayuntamiento coceísta habían cambiado. Dos días antes del desalojo, los treinta y dos trabajadores del servicio de agua potable —afiliados a la CTI— habían tomado los cuatro pozos distribuidores y suspendían el servicio para la ciudad istmeña. Como trabajadores del gobierno, exigían su nivelación salarial con el resto de los empleados estatales (*Noticias*, Oaxaca, 16 de julio de 1983). Aunque se establecieron negociaciones con el gobernador, la policía desaloja a los trabajadores e instala una guardia permanente con el contento de los enemigos del ayuntamiento. Ahora las negociaciones se acompañaban con la intervención policiaca, aunque evitando los derramamientos de sangre.

Desde fines de junio, algunos priístas pedían la represión de la COCEI. El Diputado Federal, Raúl Enríquez Palomec, demandaba la intervención del ejército y la desaparición de poderes en Juchitán (*Noticias*, Oaxaca, 30 de junio de 1983). La red se había tendido. El gobierno estatal se hacía presente con los destacamentos policiacos en empresas, en edificios públicos y en los terrenos invadidos. El arma de la provocación era el comodín escondido: el gobierno no la ocasionaba, pero tampoco la impedía. El movimiento social de la COCEI y las fuerzas opuestas al ayuntamiento —dirigidas por el sector más reaccionario y represivo del PRI— habían ya iniciado las contiendas físicas. Las huelgas y las invasiones, que habían presentado a las fuerzas económicas del estado que presionaban al gobierno, localmente enardecían los ánimos de los dos bloques de fuerzas. Había sido en el campo donde los enfrentamientos se habían dado, en el espacio del sector más violento del partido oficial, en donde la COCEI recla-

maba la comunalidad de la tierra que era defendida por pequeños propietarios. No es gratuito que en las agencias donde la propiedad privada es la forma de tenencia, el PRI tenga a la población a su favor.

Las campañas políticas sintetizaban todas las rivalidades de los dos bloques de fuerza. Las elecciones del 7 de agosto definirían quién tenía la fuerza en el distrito electoral. Pero la jurisdicción electoral comprendía decenas de municipios más. La fuerza de la COCEI, a pesar de haber penetrado en otras poblaciones, residía esencialmente en el municipio juchiteco. Por eso el enfrentamiento era anunciado con anterioridad; la propaganda radial del PRI amenazaba con violencia desde meses atrás. Sin embargo, los grupos que se habían enfrentado no habían sido lo suficientemente grandes para que la COCEI no hubiera podido controlar sus propias respuestas. El propio ayuntamiento reconocía que todas las actitudes de sus detractores lo llevaban a caer en una provocación en que apareciera como el agresor. El Estado no podía romper la legalidad del ayuntamiento recurriendo a actos ilegales sin justificarse. Así que las únicas salidas posibles para destruir al ayuntamiento eran el triunfo electoral del PRI el 7 de agosto y el 20 de noviembre, o hacerlo caer en una provocación que diera elementos para justificar la intervención abiertamente represiva del Estado.

## 6. DESCONOCIMIENTO Y REPRESIÓN

La idea anterior no debe ser interpretada como una actitud voluntarista y maniquea del Estado. Las piezas no ajustaban completamente. El Estado preveía la posible explosión de violencia sangrienta, pero no quería ser partícipe en ella ya que lo pondría en una actitud ilegal frente a un poder local legalmente constituido. Pero pensaba en el enfrentamiento que podía ocurrir como recurso

que le permitiera atacar al ayuntamiento sin aparecer como fuerza autoritaria frente a la opinión pública nacional. El gobernador también jugaba su propia posición política de actuar equivocadamente.

¿Pero, la COCEI podría evitar caer en la provocación? ¿Podría dejarse agredir sin desgastar su imagen de combatividad y lucha entre sus bases sociales? ¿Podría reprimir la subjetividad exaltada de sus masas que ha sido la fuerza de su movilización? Si era agredida, tenía que responder como lo había hecho en ocasiones anteriores. Pero tenía que evitar ser la agresora. Esto último era más difícil, especialmente cuando sus contingentes eran muy grandes y la masa se tornaba ingobernable; cuando el plan de acción no está determinado previamente —como se hace por ejemplo, al organizar una invasión— y surge la agresión al calor de la emotividad del acto político, en la reafirmación colectiva de la masa.

La COCEI tenía un abanico de fuerzas, que articulaban la oposición en el municipio, los grupos económicos y el priísmo, aliados al PPS, en la región del Istmo, y la fuerte presión de la iniciativa privada estatal, el gobierno del estado y el CDE del PRI, que la enfrentaban. Faltaba la provocación para caer en la ilegalidad. Y la situación se presenta el 31 de julio. Ese día, el PRI y la alianza PSUM-COCEI realizaban simultáneamente los mítines de cierre de campaña. Los dos actos reúnen miles de personas.

Al pasar el contingente priísta cerca del Palacio Municipal, donde se hacía el acto de la COCEI, los dos grupos se lanzan insultos y luego se origina una zacapela entre ambos, que desemboca en piedras y disparos desde los dos lados. Dos personas resultan muertas y muchas más son heridas. Como la acción acontece en presencia de miembros del cabildo, se acusa a la policía municipal de haber ocasionado la balacera.

El enfrentamiento sangriento era el motivo esperado. Aunque luego se estableció que

los muertos no pertenecían al PRI —como se argumentó originalmente— sino que eran ajenos a los dos grupos, las respuestas de todas las fuerzas sociales y políticas de la entidad no se hicieron esperar. El gobernador declaraba que se investigarían los hechos; el PAN en Oaxaca y el priísmo juchiteco exigían la deposición de las autoridades municipales. Los medios de comunicación se niegan a publicar cualquier versión diferente de los acontecimientos informados por el PRI y el gobierno. La COCEI y el ayuntamiento eran oficialmente los causantes de las muertes. Las cámaras de comercio y la iniciativa privada, los sectores del partido oficial, el PAN, el PPS y el PDM, todas las fuerzas de la entidad opuestas a la lucha de la COCEI, se expresaban en una sola opinión: la desaparición de poderes. A las fuerzas simpatizantes de la COCEI —la COCEO, los partidos de izquierda y sectores democráticos del SNTE— se les negó el acceso a los medios de comunicación estatales. Y aun la misma prensa nacional parecía compartir la misma situación.

A petición del gobernador, la comisión permanente de la Cámara de Diputados convoca a un periodo extraordinario de sesiones para discutir el asunto de Juchitán (*Noticias*, Oaxaca, 3 de agosto de 1983). En una rápida sesión en la que se dispensan los trámites de rigor, la Legislatura decreta por mayoría de votos —veinte a favor y uno en contra— el desconocimiento de las autoridades del municipio de Juchitán. Presenciaron la reunión los dirigentes de la iniciativa privada de la entidad, más no así los miembros del ayuntamiento desconocido, que no tuvo ningún derecho de apelación.

Luego del desconocimiento, el gobernador es facultado para nombrar una Junta de Administración Municipal que se encargue de Juchitán hasta el primero de enero del año siguiente. Se le daría un apoyo económico sin precedente en la historia municipal de Oaxaca y la Comisión Estatal Electoral suspendería la elección de Diputado Local en el distrito

electoral de Juchitán hasta que terminara el clima de violencia.

El documento que sirve de base para el desconocimiento es un informe que el Procurador de Justicia hace, siguiendo un mandato del gobernador elaborado el día del enfrentamiento. Ahí se le imputa al ayuntamiento el haber actuado al margen de la ley desde su establecimiento y se le hacen los siguientes cargos: violación de garantías individuales al no respetar amparos promovidos por particulares; existencia de averiguaciones previas en contra del Presidente Municipal y otros miembros del cabildo; encabezar la apropiación ilegal de cuatro hectáreas de suelo urbano por parte de trescientas personas; violación de la Ley Orgánica Municipal en materia policiaca, al exceder el número de policías y no informar sobre el armamento existente; no informar sobre el manejo de los recursos del municipio; por mantener lazos con la COCEI al encabezar sus demandas en la marcha de febrero; arbitrariedades en algunas agencias municipales; suspensión del servicio de transporte como medio de presión; tomas de instalaciones públicas y privadas; injerencia en la paralización de empresas por medio de huelgas y suspensión del servicio del sistema de agua potable (*Renovación*, núm. 6, Oaxaca, 15 de agosto de 1983).

El decreto del 3 de agosto desconocía al Ayuntamiento de Juchitán y nombraba un Consejo de Administración Civil porque:

han prevalecido condiciones que quebrantan gravemente el orden constitucional establecido [...] la autoridad municipal ha sido incapaz para otorgar a la Ciudadanía las garantías que tiene obligación de brindar toda Autoridad y [...] deben evitarse nuevos hechos de violencia que coloquen a la Ciudadanía en situaciones de riesgos y de peligro (LI Legislatura del Estado, "Decreto del 3 de agosto de 1983", en *Renovación*, núm. 6, Oaxaca, 15 de agosto, 1983).

Sin embargo, hay problemas de carácter legal con el decreto. Si estuvieran aprobadas

en Oaxaca las reformas al Artículo 115 de la Constitución, la Legislatura no hubiera incurrido en ninguna ilegalidad —ya que éstas facultan a las legislaturas estatales para poder declarar desaparecidos los ayuntamientos, previa comparecencia de los mismos— aunque de igual forma hubiera sido autoritaria. Por otra parte, el nombramiento de juntas de administración es una violación constitucional a la que, sin embargo, recurre frecuentemente el gobierno en Oaxaca.

Al no tener el recurso del Artículo 115 modificado, la diputación oaxaqueña utilizó el Artículo 95 de la Constitución local, el que a la letra dice:

Los Poderes del Estado son los únicos superiores jerárquicos de los Cuerpos Municipales, sobre los que ejercen las facultades de organización y regulación de funcionamiento, sin coartar ni limitar las libertades que les conceden la Constitución General de la República y la particular del Estado (*Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca*, 1974).

Como no existe en la Constitución oaxaqueña ningún artículo que faculte a autoridad alguna a declarar desaparecidos los poderes municipales, la Legislatura violó su propia legalidad. El artículo citado arriba puede utilizarse para cualquier cosa, menos como excusa legal para el desconocimiento de un ayuntamiento. Violando todo derecho de réplica, el decreto legislativo no esperó a que el ayuntamiento juchiteco presentara su defensa; no era necesario hacerlo, el poder regional de Oaxaca podía dispensar ese y otros trámites legales que fueran necesarios, si así convenía a sus intereses. El Artículo 2 del mismo precepto establece: "Los Poderes Públicos, entidades morales, autoridades y funcionarios sólo tienen las facultades que les da la ley. Los individuos pueden hacer todo lo que ésta no les prohíbe".

El golpe se había dado. Del 3 de agosto al día primero de enero de 1984, se terminan, primero las posibilidades de la COCEI para

derogar el mandato legislativo y luego, para triunfar en las elecciones municipales.

Desde el desconocimiento, la COCEI toma como reducto el Palacio Municipal. Durante los meses siguientes, funcionarán en Juchitán dos poderes locales: el de la Junta de Administración Municipal, apoyado por los gobiernos estatal y federal, y el del ayuntamiento desconocido. Éste iniciaría su defensa solicitando un amparo de la justicia federal contra las disposiciones de la Legislatura; aquélla se declara incompetente para amparar cuerpos colegiados, ya que se arguye que el amparo sólo se extiende para proteger garantías individuales y no derechos políticos. Luego se recurrirá al apoyo de los Diputados Federales del PSUM para exigir un juicio político en contra del gobernador. La mayoría priísta declara improcedente la solicitud de la izquierda; el gobierno federal expresaba el respaldo a Vásquez Colmenares frente a la medida adoptada. La administración asentaba su predominio político en Oaxaca, pero había modificado sus formas de hacer política que la caracterizaron tres años antes. Un nuevo equipo dirigía los destinos del país, y la COCEI no encontró el respaldo de la Reforma Política que le permitió, en varias ocasiones, enfrentar los ataques de los grupos más reaccionarios de Oaxaca. No obstante la ilegalidad de la decisión de los diputados oaxaqueños, el poder federal toma la decisión como un hecho consumado.

La COCEI se sostiene en esos meses movilizándose constantemente y recurriendo al apoyo de las fuerzas nacionales de izquierda. Sus jornadas demostrarán un heroísmo cívico que no alterará las nuevas relaciones de poder establecidas. El 7 de agosto, miles de gentes repudian el decreto de la Cámara de Diputados. La semana siguiente, una gran concentración de campesinos y trabajadores juchitecos —con la presencia de intelectuales y dirigentes políticos de la izquierda mexicana— realizan un *referéndum* político para apoyar al ayuntamiento depuesto. La movilización

continúa siendo la fuerza de la permanencia en el edificio municipal. El 5 de septiembre se conmemora la derrota inflingida a los franceses en 1966 con la reinauguración del Palacio Municipal y la realización de una gran fiesta popular con la asistencia de intelectuales y periodistas que apoyaron al ayuntamiento en su lucha; miles de asistentes siguen refrenando el apoyo a la Coalición. La instancia que faltaba jugarse era la de las elecciones municipales del 20 de noviembre.

El gobierno suspende el desfile militar y deportivo del 20 de noviembre para que la fuerza pública pueda vigilar las elecciones. La COCEI tiene que dividir sus fuerzas en los distintos municipios en que presenta planillas, en Juchitán y en el cuidado del Palacio Municipal previendo un probable desalojo por parte de la policía o del PRI. La amenaza del desalojo y el resguardo del edificio municipal fueron armas para mantener el espíritu combativo de sus masas, debilitaron su capacidad organizativa en las elecciones. Los resultados oficiales favorecían a un PRI unificado temporalmente por la represión contra la COCEI: 9 691 votos para el candidato priísta y 8 212 para Daniel López Nelio, candidato de la alianza PSUM-COCEI (*Renovación*, núm. 13, Oaxaca, 30 de noviembre de 1983). Aunque se denunció la implementación de un monstruoso fraude, la decisión gubernamental fue implacable; no podía permitir un nuevo periodo de la Coalición, a pesar de su arraigo popular. La movilización local y la denuncia nacional no lograron los efectos de 1981.

Con los desalojos del 13 de diciembre, se daba otro golpe a la organización. Varios de sus dirigentes serían puestos en prisión —algunos continúan todavía cautivos— acusados de varios delitos inventados por el gobierno. El más obvio de todos es el que se le formuló al comandante de policía del ayuntamiento coceísta, a quien se le trató de inmiscuir en el asesinato de tres hermanos ex-parti-

cipantes del movimiento universitario de fines de los años setenta en Oaxaca, asesinados por esos días. Pero la represión gubernamental no impediría otro estallido de violencia el primero de enero, día de la toma de posesión del ayuntamiento priísta. Tampoco evitaría la continuidad de la organización y su prestigio entre un sector importante de los habitantes de Juchitán y de otras poblaciones

de la región.

Después de grandes obstáculos legales, algunos meses más tarde la Legislatura oaxaqueña, para guardar la apariencia de pluri-participación, aprueba la documentación correspondiente para darle posesión al diputado impulsado por la COCEI, electo el mismo día que el ayuntamiento, y que logró su curul por vía plurinominal.

### III. EL PODER REGIONAL; ENTRE EL PODER CENTRAL Y EL MOVIMIENTO SOCIAL

#### 1. EL CENTRALISMO MEXICANO

El estudio de la coyuntura del gobierno de la COCEI en el municipio de Juchitán es un periodo social rico en elementos para caracterizar algunos de los mecanismos por los que se ejerce el poder político en el México actual. Si a nivel nacional se puede afirmar que el poder se centraliza en una pirámide que parte del presidente en turno, trascendiendo a las instancias directivas del partido oficial y de sus organizaciones de masas, estructurando a las clases sociales en un proyecto de dirección nacional de la clase política heredera de la revolución, hasta llegar a los hombres de las más alejadas comunidades —a quienes incorpora ideológica, partidaria, gremial o administrativamente—, los eslabones de tal construcción no son férreos, no se dan inmediatamente sino que el verticalismo tiene sus limitaciones. La hegemonía del grupo gobernante, establecida por una peculiar alianza en donde el campesinado y la clase obrera, convidados de piedra de la burguesía, participan corporativamente para consolidar la permanencia de la sociedad nacional, no se cimienta en decisiones que mecánicamente se emiten desde el CEN del PRI o desde la presidencia

para acatarse sin chistar. La virtud de la clase política en México radica en encontrar, hasta la fecha, la relación adecuada entre ella como grupo dirigente de la sociedad y los intereses y demandas de las clases sociales en su conjunto y conservar, al mismo tiempo, la reproducción de las relaciones de clase prevaletentes. Existe una compleja dialéctica entre las determinaciones del grupo dirigente y las aspiraciones y proyectos de las clases subalternas y las diversas fracciones de la burguesía mexicana. Esta dialéctica, aunque tiene como límite de variabilidad la reproducción del sistema económico-social, no está establecida de una vez y para siempre; depende del carácter y consistencia de las fuerzas sociales de la alianza con el Estado y de las formas históricas en que éste ejerce su dominio sobre la sociedad. Esto ayuda a comprender porqué entre un sexenio gubernamental existen diferencias sin alterar su estructura genérica, en relación con otro, y permite comprender el carácter centralista del sistema político mexicano no como acción vertical e inmediatamente asimilada por los grupos y clases, sino como un conjunto de prácticas del grupo gobernante en las que intervienen las diversidades sociales y regionales de los sujetos colectivos del país.

Hasta ahora, se ha estudiado más un aspecto de esta sociogeografía del poder: el de la verticalidad referida a las diversas clases sociales nacionales. El otro, el de su distribución horizontal, ha sido descuidado. ¿Cómo se extienden espacialmente las clases y grupos sociales, y cómo se articulan en la historia nacional reciente? Puede decirse, tentativamente, que en esta última cuestión el poder político, y la centralidad de éste, se construye en un doble movimiento que atraviesa distintos espacios, considerando la diversidad de clases y grupos que ahí se desenvuelven: de lo nacional a lo estatal, y de ahí a lo microrregional o municipal; para luego, de este nivel, volver a lo estatal y nacional. El doble movimiento no es mecánico, ni opera siempre temporalmente distanciado. Pueden darse al mismo tiempo los tres niveles de la relación, aunque el aspecto esencial de la articulación política privilegie a uno de ellos.

En el corto tiempo y en el espacio local, el poder político no está predeterminado; resulta de un complejo proceso de reajustes y alianzas entre grupos, clases e individuos en toda la sociedad y regionalmente, dentro del partido oficial y fuera de él, y su funcionamiento es cotidiano y sirve de alimento y fortalecimiento del sistema político a nivel nacional. Junto a este poder recreado cotidianamente con la praxis de los sujetos colectivos e individuales, a través de obras gubernamentales, acciones de los partidos, negociaciones de las organizaciones patronales y laborales, cooperaciones, afirmación ideológica, represión, etcétera, existe también un elemento permanente del poder que opera como el recipiente o vasija dentro del cual el poder se ejerce todos los días, sin llegar a rebasar sus bordes: el poder de los grupos y clases económicamente dominantes, cuyo desborde o ruptura representaría el trastocamiento completo de tales condiciones estructurales.

Si bien el Estado, como instancia hegemónica, y las instancias del ejercicio del poder en

países de un desarrollo capitalista tardío como el mexicano presentan algunas características que permiten compararlos y encontrarles semejanzas, esto no debe llevarnos a inferir que la *unicidad* de ese Estado y de ese poder en un país concreto esté descubierta. Es necesario someter a una aguda reflexión el conjunto de acontecimientos, las clases, la cultura nacional y la historia para hallar los elementos que den la clave del *nudo histórico* de cada sociedad concreta.

Quizás la revalorización del análisis de coyuntura permita explicar la justa medida entre lo que de permante tiene una sociedad y su relación con lo que cambia más frecuentemente; su límite de variación histórica y la multitud de posibilidades de acción de los grupos y clases dentro de esos límites o aún pensando la potencialidad transformadora de su vida social. ¿Cómo se da la relación entre esos elementos no fáciles de modificar del poder político, determinados estructuralmente por las relaciones existentes con los medios materiales y subjetivos de producción de la sociedad, y aquellos elementos menos permanentes, de ajustes y articulaciones del poder? El análisis de coyuntura puede aclarar también el problema del poder regional y su relación con el poder ejercido nacionalmente. Preguntas que se pueden derivar de esta aseveración son: ¿cómo se da el rejuego de las fuerzas y grupos locales —en un municipio, por ejemplo— que pretenden influir en las instancias de dominio como los ayuntamientos, las directivas del partido oficial y las organizaciones gremiales?, ¿o a nivel regional y estatal en torno de las designaciones de un gobernador, su equipo administrativo, la dirección estatal del PRI o de las organizaciones corporadas (CTM, CNC, CNOP y otras)? ¿cómo se construye desde lo local y estatal la injerencia del poder central nacional?, ¿por qué en algunos conflictos los resultados favorecen inmediatamente a los grupos locales del poder económico y en otros a grupos políticos vinculados con la clase política nacional?

## 2. LA COYUNTURA JUCHITECA

Los límites más generales que se pueden asentar en el caso de la coyuntura del Ayuntamiento de Juchitán se inician con los acontecimientos de la anulación de las elecciones municipales en los dos últimos meses de 1980 y el triunfo de la planilla de la Unidad Popular (PCM-COCEI) en los comicios extraordinarios de marzo de 1981; el cierre del momento social se perfila en el mes de febrero de 1983 con la marcha campesina, empieza a concretarse con el enfrentamiento del 31 de julio y tiene como acontecimiento cumbre el 3 de agosto cuando se desconoce al ayuntamiento, para apagarse en los meses siguientes con la movilización de defensa del cabildo, el fraude electoral del 20 de noviembre y la toma de posesión del ayuntamiento priísta en enero de 1984. Al principio y al final de la coyuntura —que toma los acontecimientos como referencia y expresión sintética de las relaciones de fuerza existentes, pero cuya vida social los trasciende— se encuentran diferencias en la forma en que se estructuran las diversas fuerzas sociales y políticas, tanto las locales como las oaxaqueñas y las nacionales.

De los estudios que se han hecho en torno de la COCEI y del triunfo electoral de 1980, el de Felipe Martínez tiene un mérito frente a los demás (Martínez, 1983). Haciendo a un lado los esquematismos teóricos y la equivocada utilización de categorías construidas y utilizadas en otros contextos sociales y espaciales, que Martínez utiliza para refutar los análisis ideologizados de la lucha electoral de 1980, considera algunos de los elementos que intervienen local y estatalmente en Oaxaca para la aceptación de la movilización y acción electoral de la COCEI. Sin embargo, a pesar de que analiza las divisiones inter-priístas en Juchitán y la no consolidación de un nuevo grupo de gobierno estatal abandona el análisis en la superficialidad de los grupos políti-

cos del partido oficial, sin comprender cómo éstos se vinculan con las diversas expresiones de las clases sociales en la entidad. Así, deja el asunto reducido al aspecto electoral formal de la utilización de la COCEI de los cauces de la Reforma Política por medio de lo que él llama "golpe de audacia de la COCEI".

Al contrario, creo que respecto del triunfo electoral de 1980-81 y de los primeros meses de la administración de la COCEI, es necesario enriquecer dinámicamente los aspectos que intervinieron.

En el nivel de la sociedad nacional operaba una apertura del grupo gobernante que permitía en esos años la expresión —aunque no completamente libre y autónoma— de algunas diversidades políticas. La Reforma Política que comenzó con el famoso discurso de Reyes Heróles en 1977 abría una forma de relación hacia algunas minorías políticas del país. Se pretendía legalizar e incorporar por la vía electoral las disidencias de sectores tradicionalmente relegados de la participación dentro de los cauces reconocidos del gobierno, además de buscar el fortalecimiento hegemónico del grupo en el poder. La crisis política de 1968, la guerrilla urbana y rural activada en los primeros años de la década de los setenta, el abstencionismo, el control sindical y la represión en el campo eran otros tantos índices de la pérdida de legitimidad del sistema político frente a algunos sectores medios politizados. Este nuevo marco de pluralidad controlada permitió, entre otras cosas, el reconocimiento de nuevos partidos políticos como el PCM, el PST y el PDM; se otorgó el carácter de entidades de interés nacional a organizaciones y partidos y se abrieron espacios a los medios de comunicación para la difusión de sus idearios.

Finalmente, la Reforma Política terminó en una mera reforma electoral que permitía la participación de las organizaciones que se expresaban nacionalmente. En las elecciones federales de 1979 mostró sus limitaciones nacionales. En 1980, en Oaxaca, se expresaría

en la lucha por el control de los ayuntamientos. Aquí, como en los demás estados, afrontarían sus restricciones. Las Legislaturas instrumentarían en cada estado las modalidades generales dictadas por la Ley Federal de Organizaciones y Procesos Políticos y Electorales y las modificaciones al Artículo 115 de la Constitución. El carácter urbano de los nuevos elementos electorales se palpa en el número de habitantes exigido para que en un municipio se pudieran integrar ayuntamientos pluripartidistas —trescientos mil, según las adiciones al Artículo 115. Con esta salvedad, ningún municipio oaxaqueño podía constituirse plurinominalmente, así que el gobierno estatal optó por participar de las nuevas rutas nacionales: la nueva Ley Electoral de Oaxaca baja el límite a los municipios con población de cien mil habitantes o más. La Reforma Política, en su aspecto pluripartidista, alcanzaría al municipio de Oaxaca de Juárez, asiento de la capital del estado, por ser el único que cubría el requisito (Bailón, 1983). Las reglas electorales no fortalecían la participación de un gran número de mexicanos sin opciones previas de actividades políticas.

Sin embargo, en el caso de la COCEI se trataba de una fuerza social real constituida desde varios años antes y con gran presencia entre la población juchiteca. La política nacional de apertura hacia fuerzas de oposición que se incorporaran a las exigencias legitimantes del Estado lleva a la COCEI a decidir participar con el registro nacional del PCM —hoy PSUM— en las elecciones municipales de Juchitán por varias razones. El cambio de autoridades municipales había sido violento en las cuatro elecciones anteriores. En las dos primeras, cuando la COCEI no se creaba todavía, un amplio sector de la población rechazó las imposiciones del partido oficial (1968 y 1971). En 1971, con el registro del PPS, el descontento popular logró la instauración de una Junta de Administración luego de anularse las elecciones; pero el líder del mo-

vimiento, que encabezaba la Junta, abandonó los principios de sus seguidores. En 1974 nació la Coalición, dirigida por un cerrado y hermético núcleo de jóvenes de extracción estudiantil —que persiste hasta la actualidad—, organizando y encabezando diferentes demandas de la población, hasta concretizar lo que sería el eje de su lucha: la recuperación de las tierras comunales de los zapotecos de Juchitán acaparadas por propietarios privados.

En 1974 y 1977, la COCEI participó con candidatos propios y planillas independientes en las elecciones municipales; los resultados favorecieron a los candidatos priístas, y al denunciar procedimientos fraudulentos, finalmente hubo represión gubernamental en contra de la COCEI. En esos años, la participación en las elecciones municipales era considerada por la organización como un *medio* de agitación y concientización que sustentaba su lucha por la tierra. Para 1980, la visión de la COCEI se modificó. Con una historia y experiencia de seis años de lucha, la alianza electoral con el PCM se estableció muy claramente: autonomía local de la organización en las tácticas de lucha y programa de gobierno, sin permitir que el PCM interviniera en su organismo, y aceptación del registro y apoyo nacional que el partido instrumentara fuera de Juchitán. La COCEI considera su tradicional antipartidismo —resultado en parte de su experiencia electoral con el PPS en Juchitán— para aliarse al registro del PC. Polo de Gives afirmaba ahora: "participar [...] nos ha permitido consolidar a nuestros contingentes que marchan con nosotros en este proceso electoral, y atraer a nuevos sectores, fortaleciendo nuestro movimiento" ("Entrevista con el compañero Leopoldo de Gives de la Cruz", en *Punto Crítico*, núm. 114, p. 4, México, D.F., 1980).

Con una cobertura del gobierno federal que declaraba el respeto a las decisiones electorales que fueran favorables a la oposición, el triunfo de la alianza COCEI-PCM fue posible

dentro de una lógica de estructuración del poder oaxaqueño que cubre diversos niveles espaciales. Localmente, en el municipio, la COCEI movilizó electoral y políticamente a una amplia capa de los grupos socialmente pobres: comuneros, pescadores, artesanos, pequeños comerciantes, jornaleros demandantes de tierra y asalariados de los niveles inferiores de calificación por su propia fuerza, más que por la del PCM y el POS —que en Juchitán se incorporaba a la campaña. En Juchitán el discurso político, especialmente el zapoteco, es fuerza material de movilización y la COCEI articuló la recuperación de la tradición de lucha de los zapotecas del Istmo en contra de las imposiciones del gobierno y la lealtad de la dirección política hacia sus bases, probada en su independencia frente al PRI y en el enfrentamiento permanente con el gobierno estatal y las dependencias federales —lo cual no significa superioridad frente a los mismos.

Pero la fuerza social de la COCEI en Juchitán se logró concretar electoralmente por la incidencia de otros factores:

a) El enemigo electoral, el PRI, estaba enfrascado en pugnas y profundas divisiones municipales que afloraron durante la anterior administración del ayuntamiento y continuaron en el periodo de selección del candidato a la presidencia municipal durante la segunda mitad de 1980. Esto le dio votos a la COCEI, o cuando menos contó con la abstención de priístas descontentos con la nominación de su partido. En Juchitán, el PRI no enfrentó de manera unificada a la Coalición, ni tampoco logró la participación completa de los empresarios juchitecos a su favor.

b) En el nivel estatal, la COCEI contó con elementos que fortalecieron sus movilizaciones. La división local del PRI permanecía porque en la entidad no había alternativas de dirección claramente establecidas. Las elecciones municipales transcurrieron en un parteguas político en la entidad: en unos días saldría como gobernador interino Jiménez

Ruiz y tomaría posesión en diciembre, como gobernador electo en el mes de agosto, Pedro Vásquez Colmenares. Las exigencias de un clima de tranquilidad por la proximidad de la sucesión hicieron que las presiones de la COCEI (toma del Palacio Municipal exigiendo la anulación de las elecciones, movilizaciones en la capital oaxaqueña y difusión nacional del problema) consiguieron sus objetivos. El gobierno no quiso resolver un problema que ya no le correspondía y dejó que el reciente electo buscara la solución. Por su parte, Vásquez Colmenares decidió no iniciar su mandato con medidas violentas; además de que había hecho eco de la política de apertura del gobierno federal a lo largo de su campaña para la gubernatura.

En la actitud del nuevo gobernante influía no sólo el compromiso con la Reforma Política, sino que contaba también el hecho de que el recién llegado de la ciudad de México no constituía aún su propio grupo político que lo fortaleciera frente a los demás grupos del partido local y frente a los grupos económicos de la entidad. Debilidad por no constituir aún su propia fuerza interna, pero fortaleza al tener cierto margen de autonomía frente a los intereses económicos dominantes. Con respecto a los grupos del PRI en el nivel estatal, éstos estaban sumergidos en el proceso de reacomodo frente al nuevo gobierno buscando colocar sus personeros en la administración o en las instancias de dirección política, en esa pugna que no siempre llega a los medios de difusión.

Pero además, es necesario considerar otro elemento de gran importancia para la política estatal en ese momento. A la relativa autonomía de decisión del nuevo gobernante y a la debilidad del inicio de su periodo, hay que incorporar una división que aunque ya hubiera sido superada tenía sus secuelas ente los empresarios oaxaqueños. La renuncia del gobernador Manuel Zárate Aquino en 1977 y el interinato del Gral. Jiménez Ruiz repercutió en la unidad de las fuerzas económicas de la

entidad, principalmente en el sector dirigente de las mismas: los comerciantes de la capital. Si la división de los comerciantes surgía luego de la renuncia del gobernador que defendió los intereses económicos de los propietarios frente al poder central hasta sus últimos momentos de mandato, ésta se expresaba públicamente a finales de enero de 1980 en una lucha entre dos fracciones que arrastraba a todo el comercio de la entidad.

La disputa se entabló entre el sector más conservador de la empresa oaxaqueña, dirigido por los hermanos Gutiérrez Ruiz, y el considerado más liberal, acaudillado por Nicolás Monteagudo, Carlos Hampshire y Heriberto Jiménez. Los primeros controlaban la Cámara de Comercio de la capital y los últimos la dirección de la Federación de Cámaras de Comercio del Estado. La lucha se hizo pública en relación con la sucesión de la mesa directiva de la Federación, en los dos primeros meses de 1980, que el grupo de los Gutiérrez buscaba controlar.

Como el grupo de los Gutiérrez mantenía el control sobre el comercio organizado de la capital de la entidad, la Federación optó por convocar a las elecciones en un terreno que le era favorable; decidieron hacer las elecciones en Juchitán, donde Monteagudo tenía relaciones con el gremio comercial. Ahí contaba con el apoyo de las cámaras más importantes después de la de la capital: las de las ciudades istmeñas de Ixtepec, Salina Cruz, Tehuantepec, Matías Romero y Juchitán (*Carteles del Sur*, Oaxaca, 29 y 30 de enero de 1980). La lucha era por el control y dirección de la iniciativa privada oaxaqueña, ya que el dominio sobre la Federación y la Cámara de la capital aseguraba el liderazgo de todas las demás instancias empresariales. El dirigente nacional de las cámaras comerciales tuvo que intervenir directamente para mediar el conflicto (*El informador*, Oaxaca, 24 de febrero de 1980). En esa ocasión, se declaró que el problema iba más allá del comercio y perfilaba la obtención de posiciones ante la sucesión

gubernamental próxima —el destape del candidato oficial estaba cercano. Y un sector de comerciantes declaró a la prensa que el grupo Gutiérrez acataba la decisión de la dirección nacional de cámaras de comercio ante la posibilidad muy cercana también del cambio de dirigentes en ese nivel, en el que un familiar de uno de los hermanos aparecía como probable líder (*El informador*, Oaxaca, 24 de febrero de 1980).

Un factor que también pudo intervenir en las fricciones entre los comerciantes pudo ser la amenaza de una nueva ley catastral y su reglamentación, que amenazaban instrumentarse por esos meses. El grupo de los Gutiérrez expresaba al respecto que: "por considerarlas inoportunas en esta época en que se están aplicando nuevos impuestos federales que por ahora y a pesar de los esfuerzos tienen efectos inflacionarios que repercuten en las clases económicamente débiles, (es la) razón de nuestra oposición" (*Carteles del Sur*, Oaxaca, 30 de enero de 1980).

La debilidad orgánica del comercio oaxaqueño posiblemente fue un elemento que intervino en la designación del candidato oficial. Las presiones de la iniciativa privada y del sector del PRI ligado a ésta se limitaban en esos meses a influir para evitar la posible candidatura de Heladio Ramírez, dirigente del PRI en la entidad durante el gobierno del general vinculado al echeverrismo, enemigo de los grupos de la iniciativa privada y al que se acusaba de haber estado inmiscuido en el golpe contra Zárate Aquino.

Las pugnas interempresariales, no superadas completamente para finales del año, impidieron una movilización conjunta de la burguesía oaxaqueña frente al movimiento coceísta.

Así las cosas, la COCEI, localmente movilizaba con sus fuerzas propias, con una capacidad de agitación estatal y con la presión nacional del PCM y el espacio de la Reforma Política expandió su fuerza ante un PRI municipal dividido, un poder gubernamental en

proceso de consolidación y una clase empresarial que no ha resuelto sus conflictos, así logró la anulación de las elecciones y la celebración de las extraordinarias en el mes de marzo de 1981. En este último mes, por la movilización local, la cobertura nacional y la repercusión internacional —por la toma de las embajadas de Guatemala y la India, pocos días antes de las nuevas elecciones—, la COCEI logró el reconocimiento de su triunfo. Los resultados eran: 4 194 votos para la Unidad Popular (PC-COCEI) y 3 851 de la Alianza Popular Revolucionaria (PRI-PPS). Aunque el nuevo grupo gobernante de Oaxaca tenía ya casi tres meses en el poder buscando consolidarse, y no obstante que el candidato priísta pertenecía al grupo del nuevo mandatario, la unidad del partido oficial en Juchitán no se lograba. En noviembre, los resultados de la Comisión Electoral Municipal —que fueron impugnados por la COCEI— emitieron una votación favorable al PRI: 3 266 votos para éste, 2 997 para la UP, 1 027 para el PPS y 80 del PAN. La idea priísta de conjuntar fuerzas con el PPS para derrotar a la COCEI no prosperó. El movimiento social tuvo la capacidad ideológica para convencer al electorado. Se iniciaba el gobierno de la Coalición y el gobernador declaró que en Juchitán no había vencidos ni vencedores: el triunfo correspondía al pueblo juchiteco y a la Reforma Política.

### 3. EL AYUNTAMIENTO Y EL MOVIMIENTO SOCIAL

Una vez que el nuevo ayuntamiento inició su administración, el espacio para la represión se cerró. La legalidad del sistema político podría romperse al no existir justificación por parte de sus detentadores, lo que no debe llevar a pensar que no afrontaría grandes problemas; desde el principio, la autoridad local enfrentaría dos fuerzas que desde dis-

tintas trincheras buscaban desgastarla. Por un lado, el gobierno estatal trataría de entorpecer el funcionamiento del nuevo grupo municipal retrasando las participaciones presupuestales, evitando el financiamiento de obras públicas que el cabildo quería promover. El ayuntamiento respondía con movilizaciones locales y actos políticos en la capital oaxaqueña —previa propaganda nacional— para lograr la entrega de su presupuesto, el incremento al mismo y las promesas de financiamiento. Por otro lado, se organizaba localmente el movimiento opositor a la autoridad municipal, por parte de una fracción de la militancia priísta, que cristalizaría en la creación del CCDDPJ y el "Plan de Juchitán" de diciembre de 1981.

La principal arma de defensa del ayuntamiento fue la movilización constante de su base social y la difusión nacional de sus problemas. Aunque dos militantes del PCM participaban en el cabildo, las decisiones de movilización de la autoridad y el movimiento social siempre fueron tomadas por la dirigencia coceísta. Ésta no contaba tanto con un apoyo estatal, que se dio en algunas ocasiones por parte de la delegación oaxaqueña del SNTE y otros organismos de la capital del estado. Tampoco mantuvo sus relaciones de trato político con el Comité estatal del PCM, cuya fuerza de apoyo no era significativa. Usando una de las formas de expresión del centralismo político del sistema, la fuerza local de la COCEI se potenciaba con los apoyos logrados en la capital del país a través de una relación directa con el Comité Central del PCM y con otras organizaciones de la capital ligadas con la lucha agraria independiente —que rechazan a los partidos de izquierda tradicionales. Pero también recurriendo a la Secretaría de Gobernación para denunciar al gobierno estatal por restringir el apoyo económico al ayuntamiento y la violencia que amenazaba desatar el CCDDPJ en Juchitán.

En los primeros meses de gestión del ayuntamiento coceísta, la estrategia del CCDDPJ

difería de la del gobierno estatal, e incluso había profundas diferencias con éste, las cuales se evidenciaban en el abandono de la militancia en el comité municipal de partido para trabajar mejor en el organismo mencionado. El priísmo que creaba el CCDDPJ rechazaba lo que consideraba medidas centralistas del gobierno estatal frente al asunto electoral de Juchitán y lo presionaba para que rectificara su política. Pero aunque el nuevo equipo gobernante de Oaxaca se afianzaba y estaba interesado en controlar y someter al ayuntamiento de la oposición, sus métodos eran distintos.

Creo que la llegada de Vásquez Colmenares a la gubernatura sin un grupo consolidado y sin presiones unificadas del poder económico le permitió ganar elementos de movilidad frente a los grupos de su partido y la iniciativa privada. El nuevo gobierno reconoció el triunfo de la oposición partidaria en diecisiete municipios —en los que estaban algunas de las ciudades más importantes de Oaxaca— e integró siete Juntas de Administración compartidas entre el PRI y otros partidos (Bailón, 1983). La actividad de otros partidos aumentaba la autonomía del gobierno hacia los grupos económicos estatales temporalmente. Frente a éstos, surgía también el movimiento de los maestros oaxaqueños, cuya relación de respeto con el gobierno estatal fortalecía a éste. Un aspecto más: el grupo gobernante tenía la posibilidad de distanciar su margen de decisión y autonomía al reconocer y legalizar la participación de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil de Oaxaca (COCEO) —frente de organizaciones que actúa en los valles centrales del estado— en las marchas obreras oficiales del primero de mayo e incluso incorporó a ex-dirigentes de ésta en su administración —uno ocupó la secretaría particular del gobernador y luego la oficialía mayor del estado y otro participó en el CDE del PRI.

Las diferencias del gobierno y el CDE hacia los priístas descontentos de Juchitán resultan

de la necesidad de los primeros de mantener la estabilidad general de la entidad, tomando en consideración las diversas fuerzas y su magnitud al enfrentar los problemas. En una entidad tan conflictiva como Oaxaca, el gobierno tiene que considerar esos elementos. El no enfrentar a la COCEI de manera violenta en los primeros meses del ayuntamiento juchiteco y el entablar las negociaciones luego de sus movilizaciones es una exigencia de esa función general de estabilizador de la entidad. El gobierno estatal demuestra su capacidad política de *condontiero* si puede ver por encima de los grupos —sí es que tiene autonomía— sin lesionar los intereses fundamentales de los grupos propietarios. De ahí que su perspectiva difiriera de la de los miembros de su partido en la ciudad istmeña. Ellos, localmente, enfrentaban las consecuencias de un ayuntamiento dirigido por un grupo que, tradicionalmente, los ha combatido. Podría decirse que el gobierno estatal, para mantener la pacificación y el dominio hegemónico sobre su jurisdicción, tiene que pensar en función del sistema estatal global, mientras que la fracción priísta no veía más allá de lo que eran sus intereses políticos y económicos locales.

Todavía en su segundo informe de gobierno —noviembre de 1982—, Vásquez Colmenares, haciendo alusión indirecta al CCDDPJ, reprochaba el grupismo como causa de tensiones "con ingredientes artificiales" que dividían a comunidades y personas. El mandatario afirmaba: "el gobernador no llegó al poder con un grupo hecho y no ha favorecido la formación de ninguno, por lo que tiene autoridad moral para exhortar a todos, para no hacerle el juego a los extremos, al conflicto, a la violencia y para que actuemos con madurez, reflexión y sensatez" (*Hora cero*, núm. 57, Oaxaca, 3 de noviembre de 1982). Obviamente, se refería a las presiones que el CCDDPJ ejercía sobre él. El mensaje político remarcaba que los intereses de los grupos de presión "frecuentemente cerrados" y que in-

tervenían en el seno del aparato gubernamental lo obligaban a invertir mucho tiempo en los problemas que creaban, los cuales tenían "ingredientes artificialmente conflictivos" que dividían y separaban a los oaxaqueños. Las afirmaciones del gobernador evidenciaban el movimiento de los grupos sociales y políticos frente a la administración, buscando penetrarla en sus conductos de decisión, en un momento en que el grupo gobernante declaraba todavía pronunciarse contra la represión como forma de control político.

#### 4. EL ENGRANAJE SE AJUSTA Y LAS PINZAS SE TENSAN

El desarrollo de los acontecimientos en la coyuntura estudiada mostró las limitaciones autoritarias de la Reforma Política y del sistema de poder en México. Derivados del descontento en procesos de elección municipal o gubernamental —por los candidatos, por el fraude, por la imposición, etcétera—, pueden surgir movimientos sociales cuyo radio de actividad se limita a las decisiones electorales. En estos casos, el Estado puede permitir vías de solución a las demandas del movimiento. Pero cuando un movimiento social existe desde antes, y no como pura consecuencia de la problemática electoral, las posibilidades negociadoras del Estado se fracturan y el ceño autoritario del régimen se frunce. El movimiento social de los zapotecas de Juchitán encabezados por la COCEI se orienta más allá del control del ayuntamiento; aunque se expresa en la lucha electoral, su carácter social lo supera. Ahí donde el movimiento de la Coalición rebasó el asiento formal de la administración municipal, el Estado no tuvo otra instancia más que la de la represión. La COCEI aprovechó el poder legal que le daba el controlar el Ayuntamiento para fortalecer la esencia de su movimiento: la lucha por la tierra comunal y las condicio-

nes salariales de los trabajadores zapotecas. A diferencia de todos los partidos de oposición —incluyendo al PCM—, el movimiento social, cimentándose en una agitación y movilización permanentes, buscó obtener más de lo que el gobierno estaba dispuesto a otorgar. Fue más adelante del marco formal de la administración local y de las relaciones políticas formales con el Estado y rompió con ellas sin abandonar la legalidad constitucional del país. El gobierno no puede controlar al ayuntamiento porque éste supo aprovechar los resquicios legales; siendo una fuerza social completa en su municipio, el apoyo y fusión de la COCEI con su autoridad le permitió moverse en la legalidad, mantener por un tiempo autonomía política y fracturar los ataques administrativos del gobierno recurriendo a las atribuciones —aunque son muy limitadas— que confieren a la Contribución General de la República y la Constitución del Estado de Oaxaca a los municipios. El sometimiento del cabildo hacia el gobernador no podía darse, porque en Juchitán el aspecto leal-formal de la administración encerraba el de la lucha de los grupos sociales del municipio.

Para el movimiento social campesino, el fortalecerse y crecer es base de su desenvolvimiento y permanencia. Ello lo obliga a dar siempre pasos hacia adelante, no detenerse por su propia decisión —aunque la represión estatal hacia él sí lo haga. Cuando el movimiento se detiene por consideración de su liderazgo, se estanca y deviene inactivo; si se moviliza y obtiene avances en sus demandas, se consolida provisoriamente. La represión parcial, cuando existe el sentimiento colectivo de identidad y la subjetividad de sus masas es combativa, lo mantiene vivo.

En el caso del movimiento juchiteco —y quizás eso no fue sopesado adecuadamente por su dirección para dosificar los avances de la lucha ante condiciones de coyuntura política desfavorables— lo zapoteca, la lengua indígena y su discurso incendiario y una gran identidad local con su existencia histórica

(que la tradición oral se ha encargado de reproducir), aunque aspectos superestructurales en la larga duración, en la coyuntura política se convierten en fuerzas materiales para mantener la lucha y movilización de las masas. Y ése era otro de los peligros para el gobierno estatal y las fuerzas económicas. A diferencia de los partidos y otras organizaciones —como las sindicales, por ejemplo— que avanzan y detienen su movilización, manteniendo la disciplina de sus cuadros, el movimiento social campesino juchiteco se sustenta bastante en la explosividad del imaginario colectivo en el papel del sueño indígena como fuerza política. Aunque hay que tener presente que la movilización constante y la agresividad hacia lo externo pueden ser base de su funcionamiento como cuerpo social, como alimento pueden también indigestarlo: la represión puede llevarlo a disgregarse o desaparecerlo completamente.

En 1983, las condiciones de fuerzas sociales y políticas se articulaban de manera diferente frente a la Coalición y al ayuntamiento. La unidad del movimiento social y de la autoridad municipal creaba un poder real en Juchitán que iniciaba acciones directas en su jurisdicción. Como poder local, enfrentaba la estructura de poder oaxaqueño, negociando y presionando como autoridad consistorial para mantener los espacios de autonomía que derivaban de un adecuado manejo de la legislación y amenazando la propiedad de la tierra y las condiciones de explotación empresarial en su demarcación. La COCEI y su ayuntamiento se convirtieron en un pequeño contrapoder. No aún como poder social alternativo al del gobierno y de los propietarios de la entidad, pero sí peligroso por su presente juchiteco y por el futuro posible, que se perfilaba regional. El movimiento social no es ya un movimiento de poder regional que incendie la región istmeña por su fuerza, pero la forma de sus movilizaciones y prácticas sociales empezó a tener repercusiones ideológicas estatales —esto es una realidad a pesar

de que el gobernador, hasta el cansancio, afirmaba que el problema de la COCEI había sido siempre un problema limitado a Juchitán (Vasquez, 1983). Si los grupos económicamente dominantes de Oaxaca no habían intervenido frontalmente en el asunto, ahora sí lo hacían. El grupo de los Gutiérrez era ya hegemónico en la iniciativa privada de la entidad, que se unifica en acciones y presiones respecto del movimiento juchiteco y sus autoridades. Las acciones emprendidas contra la empresa y los terratenientes afectan a la clase económica del estado, preven futuras amenazas para ellos y además los atemorizan por la movilización política —no sólo por argumentadas pérdidas de los prestadores de servicios turísticos de la capital, sino por la peligrosidad expansiva del clima de lucha política. En febrero, la COCEI enarbolaba demandas de autoridades y grupos campesinos de la zona istmeña; luego anunciaba festivamente la participación electoral en varios municipios de la región —como de hecho aconteció en noviembre; incluso sus prácticas de lucha eran seguidas por otros grupos de oaxaqueños. En esos meses, un sector de los campesinos priístas de Pochutla marchó hacia la capital para presionar al CDE del partido para que las próximas designaciones de candidatos —para diputados y presidentes municipales— consideraran las decisiones de la base; algunas comunidades exigían el respeto a sus formas tradicionales —plebiscitarias— de designación de autoridades; el propio PPS —que es un enemigo violento de la COCEI porque ésta le ganó a todas sus masas en Juchitán— y el PAN hicieron marchas de pobladores hacia la ciudad de Oaxaca para protestar por argumentados fraudes en noviembre. La tozudez de la COCEI, aunque repudiada, era usada por algunos de sus opositores en sus relaciones con la administración gubernamental y el PRI.

En 1983, la administración Vásquez Colmenares estaba consolidada al igual que el grupo político del gobernador, pero también

estaba fuerte el grupo heredero del ex-gobernador Zárate Aquino, cuyas personalidades visibles son el Secretario General de Gobierno y el Secretario General del CDE del PRI. El grupo de los Gutiérrez lideraba a los propietarios y se identificaba con los políticos del ex-gobernador desde hace años. Los propietarios de la entidad, los comerciantes de Juchitán, el grupo tradicional de políticos priistas de la entidad y el CCDDPJ coinciden en sus presiones hacia el gobierno y en los ataques hacia el ayuntamiento y el movimiento zapoteca. Esta nueva relación de fuerzas y las acciones de la COCEI que afectaban los intereses directos del equipo gobernante —las dos huelgas en entidades del gobierno y la invasión del terreno en el municipio— modifican la política del ejecutivo estatal y el desenlace de los acontecimientos hasta esos meses.

En el terreno nacional, también hubieron factores que contribuyeron para las nuevas formas de la política en Oaxaca. A finales de 1982, un nuevo gobierno federal se instaló. Aunque una de las principales metas del nuevo sexenio consideraba la descentralización administrativa y el fortalecimiento económico de los municipios, el régimen recurría a aumentar las formas de control local. En febrero de 1983 se aprobaron nuevas reformas al Artículo 115 constitucional, con las que se le permitió a los municipios el derecho de captar más recursos al apropiarse del impuesto predial, pero también se legalizaba un control mayor: las legislaturas estatales eran facultadas para desconocer a las autoridades municipales de sus territorios. La COCEI no contaba ya con el paraguas político de Gobernación en su lucha contra el CCDDPJ y el gobierno. Al contrario, ahora el CCDDPJ recurría al apoyo federal para presionar al gobierno local en su trato con la Coalición y en contra del ayuntamiento. Los comerciantes, con su paro estatal, también buscan la intervención federal presionando al gobierno estatal y denunciando la ausencia de un clima para invertir en el municipio istmeño y en toda la entidad.

La manera como las fuerzas políticas y sociales de Oaxaca se articulaban al final de la primavera y al comienzo del verano de 1983 y la política sexenal que se iniciaba hacen que el gobierno federal reitere y apoye la represión del ayuntamiento oaxaqueño. En Oaxaca, las diversas fuerzas coincidían en la represión que se efectuaría. Toda esta nueva estructuración del poder no podría ser enfrentada por el movimiento social favorablemente, a pesar de acontecer en un momento en que ya era vigoroso y su práctica era conocida nacionalmente.

Existía un problema para resolver la represión. El ayuntamiento poseía un fuero delegado constitucionalmente y habría que encontrar sus puntos débiles. Se había manejado ya una auditoría al cabildo pero no prosperó políticamente. Quizás por lo que se optó fue por llevar a la autoridad local a un terreno en que pudiera caer en acciones de ilegalidad públicamente conocidas. El movimiento local de oposición al ayuntamiento desempeñó aquí un papel importante. Si el cabildo hubiera contado con una posición de consenso generalizado de su población, la intervención estatal final hubiese requerido una represión abierta para destruir el ayuntamiento. Sin embargo, aquí la violencia local, gestada desde 1981, rendiría sus frutos para la represión encubierta del estado.

Estatalmente, el gobierno contaba con dos armas contra la autoridad juchiteca: el presupuesto y la policía, o el auxilio del ejército. Localmente, contaba con un movimiento conservador, violentamente enfrentado con la COCEI que fue el que utilizó. El CCDDPJ se convirtió en el arcabús del estado. El lugar que se encontró débil para el golpe contra el ayuntamiento fue el espacio donde los grupos sociales locales se enfrentaban sin mediaciones: el propio territorio municipal fue el terreno propicio para la ruptura de la institucionalidad de su autoridad. En junio y julio se produjeron con frecuencia choques físicos de los dos movimientos. El carácter simbiótico-

co del movimiento social y el ayuntamiento, la red de fuerzas locales y estatales opuestas a éstos y la cobertura nacional del nuevo régimen fueron los factores que en última instancia explican la violencia del 31 de julio. Es en el nivel de los grupos locales, en donde incluso problemas que no tienen tras de sí proyectos sociales contrapuestos, en donde la violencia física se desencadena, ¿cómo no habría de ocurrir en el caso de un movimiento social que controla la autoridad local y recibe presiones de fuerzas de todo tipo y de distinta naturaleza social y espacial?

Aunque el origen de la provocación no hubiera surgido directamente de una decisión estatal, sí era históricamente necesario para el gobierno encontrar elementos de deslegitimación de la autoridad municipal y de ruptura de su orden constitucional. Después del desconocimiento del ayuntamiento, la COCEI y su autoridad mantenida durante varios meses —aunque legalmente inexistente— atraviesan los corredores de la ilegalidad manejada por el sistema, y la represión puede encubrirse más que cuando la COCEI posee el

fuerro legal del control del cabildo.

El gobierno se construyó así un supuesto consenso frente a los acontecimientos del 31 de julio. Las presiones de la iniciativa privada y de los partidos de oposición y del propio PRI se vuelven discursivamente expresiones populares de descontento. El poder descarnado del sistema se recubría para funcionar represivamente: no era el gobierno el causante de la violencia, era el ayuntamiento el que usaba la violencia hacia un grupo de pobladores. Aunque todo el procedimiento del desconocimiento del cabildo juchiteco violó la Constitución, era la salida más adecuada para el gobierno en vez de una intervención policiaca directa. El fraude de noviembre de 1984 y la intervención policiaca en los desalojos no se hacía contra ninguna autoridad, sino contra un grupo disidente. El poder federal ratificó las decisiones de la administración Vásquez Colmenares y permitió el triunfo priísta en el nuevo proceso electoral. El carácter institucional de la represión contra el movimiento social protegió la instalación de un nuevo ayuntamiento.

## BIBLIOGRAFIA

- Aubague, Laurent, *Discurso político, utopía y memoria popular en Juchitán*, Fotocopiado, Oaxaca, ISUABJO, 1981.
- Bailón Corres, Moisés J., *Tehuantepec: Monografía de un municipio del istmo oaxaqueño*. Fotocopiado, Oaxaca, IISUABJO, 1981.
- Bailón Corres, Moisés J., *Los milagros de Guissi; crónica política de una Junta de Administración Municipal*, fotocopiado Oaxaca, IISUABJO, 1982.
- Bailón Corres, Moisés J., "El municipio mexicano; reto, vencimiento y realidad de la Reforma Política (notas sobre los Ayuntamientos oaxaqueños en 1980)", ponencia, México, 1983.
- Carbajal, Pérez, Arturo, *El Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, Oax.*, 1981. Fotocopiado, Oaxaca, IISUABJO, 1982.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca*, Oaxaca, Ed. del Gobierno del Estado. 1974.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. 1979.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, México, ed. Gaceta Informativa de la CFE 1979.
- Covarrubias, Miguel, *El sur de México*, México, INI, 1980.
- De la Cruz, Víctor, *La rebelión de Che Gorio Melendre*, México, Ed. del H. Ayuntamiento de Juchitán, 1983.
- Juchitán: un pueblo que clama justicia*, Oaxaca, Ed. Fegosa, s/f.
- Ley Orgánica de Ayuntamientos del Estado de Oaxaca*, Oaxaca, Instituto para el desarrollo municipal del estado de Oaxaca A.C., s/f (reedición de la ley vigente desde el 5 de diciembre de 1925).
- Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca*, Oaxaca, Ed. del Periódico Oficial del Estado, 2 de febrero, 1984.
- Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales del Estado de Oaxaca*, Oaxaca, Ed. del Periódico Oficial del Estado, 10. de diciembre de 1979.
- López Monjardín, Adriana, "Juchitán, una etnia redefinida", ponencia, México, 1984.
- López Monjardín, Adriana, "Las historias de la discordia", ponencia. México, 1984.
- Martínez López, Felipe, *El crepúsculo del poder (monografía de Juchitán de Zaragoza)*, Oaxaca, IISUABJO, 1981.
- Martínez López Felipe, *El crepúsculo del poder (una crisis política y un Ayuntamiento de oposición)*, Fotocopiado, Oaxaca, IISUABJO, 1983.
- Oaxaca. Conflictos de clase, movilización y represión*. México, Colección cuadernos populares, 1978.
- Peterson Royce, Anya, *Prestigio y afiliación en una comunidad urbana: Juchitán, Oaxaca*, México, SEP-INI, 1975.
- Títulos primordiales de Juchitán*, México, Patronato de la Casa de la Cultura de Juchitán, 1980.
- Zerméño, Sergio, *Juchitán: la cólera del régimen*, Fotocopiado, México, 1983.
- Vásquez Colmenares, Pedro, *III Informe de Gobierno*. Oaxaca, 10. de noviembre, 1983.

## PERIÓDICOS CONSULTADOS

*Carteles del Sur*, Oaxaca, Oaxaca (algunos números).  
*El Informador*, Oaxaca, Oaxaca (algunos números).  
*Hora cero*, Oaxaca, Oaxaca.  
*Noticias*, Oaxaca, Oaxaca.  
*Pueblo Libre (Órgano del CCDDPJ)*, Juchitán, Oaxaca.

## REVISTAS CONSULTADAS

*Guchichi'Reza*, Ed. del H. Ayuntamiento de Juchitán, Oaxaca.  
*El Buscón*, México, D.F. (el número 6 de 1983).  
*Punto Crítico*, México, D.F. (algunos números).  
*Tesis*, Juchitán, Oaxaca.

## OTROS DOCUMENTOS

- CDE del PRI, *Opinión sobre las bases y forma para la renovación de la autoridad comunal Juchitán, Oaxaca*. Oaxaca, 5 de agosto, 1981.
- Comité Municipal del PRI de Juchitán, *Carta de análisis al C. Gobernador del Estado por los resultados electorales de Juchitán*, Juchitán, abril, 1981.
- H. Ayuntamiento Constitucional de Juchitán, *Respuesta al Diputado Arturo Molina Sosa, por la requisición de auditoría por parte de la Legislatura estatal y explicación de los motivos que hicieron ilegal el procedimiento de los auditores*, Juchitán, 7 de enero, 1982.
- H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero, *Respuesta al Gobernador del Estado de Oaxaca, por denunciar violación de la soberanía de su estado al establecerse una Normal Superior en Juchitán auspiciada por la UAG*, Chilpancingo, 10 de junio, 1983.
- Pineda, Jesús (ex-presidente del Comité Municipal del PRI de Juchitán), *Telegramas al CEN del PRI y al Secretario de Gobernación denunciando la actuación de José Murat como Delegado Especial del CEN en las elecciones de San Luis Potosí*, Juchitán, diciembre 15, 1982.
- SARH, *Organizaciones formales de la tenencia de la tierra del distrito de riego Núm. 19, según información de la Promotoría 10 de la SARH*, Tehuantepec, 1980.
- SRH, *Memoria de la Presa "Benito Juárez"*, Tehuantepec, 1964.

**JUCHITÁN: LA CÓLERA  
DEL RÉGIMEN**

**CRÓNICA Y ANÁLISIS  
DE UNA LUCHA SOCIAL)**

**SERGIO ZERMEÑO**



## LA VELA PINEDA

La noche del sábado tres de septiembre de 1983, se festejaba en Juchitán, Oaxaca, la Vela Pineda, una más de las tradicionales festividades que enorgullecen justificadamente a los habitantes de este lugar. La celebración, que a juzgar por los lugareños respondía más al gusto de las familias acomodadas y no tanto a la imagen del pueblo; se efectuaba a escasos cien metros del palacio municipal, sede de los depuestos poderes de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI).

Quizás el juicio en torno del carácter de clase de la Vela Pineda se apoyaba en el simple hecho de que la carpa circense, instalada para el efecto en medio de una de las principales calles de Juchitán (no por ello pavimentada), debió haber tenido un alto costo, al igual que los objetos con que había sido adornada; pero más que esto por el impecable atavío tradicional en el vestido y en las joyas áureas de los asistentes.

Hacía poco menos de un mes, el 7 de julio, el ayuntamiento popular había sido destituido por el Congreso de Oaxaca bajo circunstancias por todos conocidas: el día en que el candidato de la COCEI a la diputación local, Desiderio de Gives, daba por concluida su campaña encabezando una manifestación atareada en recrear un sinnúmero de tradi-

ciones, algunos elementos claramente identificados con el Partido Revolucionario Institucional, en actitud primero fanfarrona y luego abiertamente violenta, dispararon contra la muchedumbre. El resultado fue de dos muertos: dos priístas, insistieron hasta el cansancio, absurdamente, los medios de difusión de la República entera, sobre todo los controlados por el Estado. En menos de tres días y sin escuchar la versión del presidente municipal de Juchitán Leopoldo de Gives de la Cruz, a quien se le pedía en un telegrama presentarse en la capital del estado dentro de 48 horas y en un segundo telegrama, 24 horas antes de lo convenido, los honorables congresistas de la tierra del Benemérito de las Américas destituyeron al legítimo ayuntamiento popular, nombraron a un Consejo que tomaría el gobierno en su lugar, pospusieron indefinidamente las elecciones para la legislatura y recibieron el aval de la cámara de diputados de la capital de la República ya que ésta se negó a sancionar a sus colegas oaxaqueños y al gobernador de aquel estado por las irregularidades constitucionales cometidas a lo largo del amañado proceso de destitución.

Por si lo anterior no fuera suficiente, entregaron al flamante Consejo sustitutivo una

parte sustancial de los 240 millones de pesos que le habían sido escamoteados durante largo tiempo a los coceístas.

Así que, según aquellas formalidades, el ayuntamiento popular de Juchitán no existía más y a la opinión pública se la había bombardeado hasta el cansancio con semejante versión.

Sin embargo, a casi un mes del desconocimiento, el palacio municipal seguía en manos de la COCEI y algo más, aquel sábado 3 de septiembre de 1983, el de la Vela Pineda, quien fuera también candidato a diputado, pero por parte del PRI, "Rojo" Altamirano, conocido como "el loco" porque entre otras cosas portaba una ametralladora, al acercarse a la plaza central y ser descubierto por los coceístas se vio obligado, ante la persecución de unos cien jóvenes de la U.P. (como se conoce a la alianza PSUM-COCEI), a refugiarse en un edificio cercano. "Los azules", la policía estatal, enemigos inmediatos del ayuntamiento popular, tuvieron que rescatarlo prácticamente de enmedio de la muchedumbre con todos los riesgos que eso significó.

La Casa de la Cultura es, sin duda, la mansión más hermosa y con mejor gusto arquitectónico de todo Juchitán. Aún así, el lujo no aparece por ninguno de sus rincones y muchos de aquellos espacios recuerdan la modestia de ciertas escuelas rurales. Es una casona de una planta con tres alas, cuyos tejados tienden hacia el gran patio central, lo mismo que sus amplios corredores. El lado no construido está más o menos guardado a prudente distancia por el simplísimo templo de San Vicente, patrono de Juchitán, construido por los dominicos en los primeros años del siglo XVII. La reja que hoy los separa tiene su historia: hasta antes de las Leyes de Reforma la casona cumplió en ocasiones la función de claustro. En la Casa de la Cultura se imparten clases de baile, de pintura, se dictan conferencias de literatura, de política, etcétera y, en otras tantas habitaciones, se encuentran la biblioteca y la oficina del director, en donde

quedan bajo custodia mochilas, suéteres, máquinas de escribir, libros y toda clase de pertenencias vigiladas por nadie, o quizás vigiladas por Felgueros, Siqueiros, Nichisawa, Toledo, Rojo y tantos otros que ya no cupieron o esperan de nuevo turno en el gran salón de exposiciones.

"Este lugar tiene abiertas sus puertas para todas las personas que habitan en Juchitán y para todos los que vienen de fuera, sean turistas, priístas o coceístas", estableció Macario Matus director de la Casa de la Cultura. Sin ocultar en ningún instante su apoyo a la COCEI, manifiesta que la cultura es un ejercicio universal y en ningún instante puede ser un apéndice de la política. Por eso, entre la Casa de la Cultura, "que existe mucho tiempo antes que el ayuntamiento popular", y la COCEI se ha generado un espacio de autonomía, respeto y cooperación. "Por años, incluso, mis relaciones han sido frías con pintores, escritores y otros artistas juchitecos cercanos a la COCEI, pero a la larga hemos entendido todos la importancia de esta distribución". Macario Matus se quejaba de la duplicidad de funciones; no entendía por qué la COCEI decidió crear otra biblioteca en lugar de enriquecer el acervo y la funcionalidad de la ya existente en esa Casa de la Cultura. No entendía tampoco el sentido y la implantación real del discurso marxista, radical y a veces incendiario que difundía, cuando cesaban las interferencias del gobierno, Radio Ayuntamiento Popular (XEAP), con sede en el palacio municipal.

Muchas otras cosas preocupaban a Macario, como por ejemplo la difícil y errónea relación que los coceístas habían establecido con los sectores medios juchitecos, "no con los reducidos grupos de mayor ingreso, especuladores y comerciantes, francamente opuestos al cambio", sino con los asalariados públicos y privados, maestros, empleados, profesionistas liberales, "la clase instruida", a quienes el PRI se encuentra reclutando con mayor inteligencia, a sabiendas de que se

trata de sectores que fácilmente se dejan atraer por una occidentalización de la comunidad: venden las tierras, reivindican el consumismo y apelan a la cultura local como una referencia meramente folklórica y arrinconable.

## LO QUE SON LAS PRIMERAS IMPRESIONES

Para hablar con toda sinceridad, la primera hipótesis que habíamos configurado sobre el fenómeno COCEI-Juchitán nos parecía indefectible: alentados sin duda por una serie de conversaciones tenidas en el D.F. y en la ciudad de Oaxaca, con escritores, militantes de izquierda, priístas, agrónomos y viejos amigos universitarios hoy activos coceístas, y resultado también de nuestros primeros tres días en Juchitán, el panorama comenzaba a ordenarse, así lo creíamos en un principio, bajo las siguientes ideas: la COCEI está compuesta, en primer lugar y de manera predominante, por jóvenes muy jóvenes, en muchos casos ni siquiera originarios de la región; la COCEI es fundamentalmente una vanguardia más que un movimiento popular y llegó a la presidencia municipal sobre todo por la animadversión que los pobladores han establecido durante años hacia el PRI más que por un proyecto propio, de la misma manera que el PPS se hizo del ayuntamiento en los tempranos años setenta, los líderes principales, los más maduros, estudiaron en la capital de la República y algunos incluso trabajaron en París en los años sesenta; profundamente impresionados por el movimiento estudiantil mexicano y por su desenlace trágico, como ellos mismos lo confiesan, formaron la COCEI unos años después; es por ello que los habitantes del palacio municipal durante la reconstrucción del edificio recuerdan el ambiente del radicalismo estudiantil en las huelgas universitarias; "la COCEI no es otra cosa, decía con gran ironía un 'informante' en

el D.F., que un CCH sólo que en zapoteca"; *combis* en proceso de destrucción y camiones manejados por estudiantes de pelo largo, guaraches, paliacate rojo y chava en el asiento derecho van y vienen a los mítines de la COCEI acarreado campesinos indígenas en situación vital crítica o intranquilizando a la población con catastrofistas discursos grabados en casetes y difundidos en ocasiones a toda voz por altoparlantes desde las cinco de la mañana; por algo los juchitecos llaman a los ocupantes del ayuntamiento local "ique raxhi" (jóvenes de cabello largo); todo el cuidado puesto en la reconstrucción del palacio municipal recordaba los pleitos entre los grupos políticos de la UNAM para ver quién se quedaba con "el cuartito" del Comité de Lucha, siempre había uno en cada facultad, a que daba derecho el triunfo en las elecciones estudiantiles. ¡Hasta dónde puede uno llegar con las primeras impresiones!

El anterior escenario se veía redondeado por la corroboración de que el ayuntamiento había descuidado las obras municipales, a tal grado que el drenaje, fundamental para cambiar la apariencia de un pueblo en el que ni las calles de la plaza central están pavimentadas, no había avanzado ni en la excavación de las zanjas. Pero más grave era el olvido, o al menos la lentitud, en la construcción del puente sobre el Río de los Perros, ya que para llegar al centro de la ciudad en las épocas húmedas del año un amplio sector de la población más pobre tiene que hacer un rodeo de más de tres kilómetros, pasando por el puente de la carretera panamericana. Terrible error de la COCEI el dejar a un amplio sector de su propia base sin una conexión inmediata con el centro del pueblo. "Puente de burro" quiere decir en zapoteco ¿y el puente burro? Era una broma ya popular con que los juchitecos recordaban a carcajadas la ausencia notoria de estas obras públicas. Incluso se emprendió un maratón radiofónico con tal de reunir fondos para el mencionado puente sin que hasta esa fecha se pudiera

contar con ningún resultado palpable.

Es cierto que el presupuesto del ayuntamiento había sido escamoteado por el gobierno estatal, y que se había llevado a cabo un estudio de mecánica de suelos para asentar científicamente los basamentos de la obra, pero también es cierto que se perdió la dimensión que liga a la política, en tanto legitimidad de una vanguardia, con su capacidad de transformación material, con su referencia al futuro: hubieran bastado algunos pilotes encajados en el vado, de utilidad real o simbólica, para que la COCEI llenara ese hueco que parecía agrandarse conforme nuestra indagación progresaba. En términos prácticos, dicho hueco podría enunciarse como la ausencia de un "ministerio" de economía y de planificación en el seno del ayuntamiento.

## ¿CULTURA Y PASADO O ECONOMÍA Y DESARROLLO?

Lo anterior, por contraste, nos conduce a un punto central: la COCEI, además de una elite política es, fundamentalmente, un gran impulso ideológico, cultural, y como todo gran fenómeno en este plano, los cocceístas se encuentran imbuidos en la recuperación, en el cultivo y en la difusión de las raíces, del pasado, en la exaltación de los valores y la historia de la etnia, casi de la nación juchitecozapoteca y de su lengua.

Enfrente del palacio municipal, sobre la plaza, se levantaba una sólida construcción que albergaba a la Librería Municipal. Ahí se encontraba a la venta *Guchachi Reza* (Iguana Rajada), publicación trimestral del H. Ayuntamiento Popular de Juchitán dirigida colectivamente por Víctor de la Cruz, Francisco Toledo y Gloria de la Cruz (en otra época lo fue también por Elisa Ramírez), editada por la Imprenta Madero y diseñada por Silvia Aceves y Vicente Rojo. Colaboraban en el número quince que acababa de salir a la luz, Arturo Warman, José Emilio Pacheco, Car-

los Monsiváis, Antonio García de León, Pedro Baxa, etcétera. En otro formato había cerca de quince publicaciones sobre relatos, leyendas, cuentos, poemas, etcétera, referentes a las costumbres, los héroes, las guerras, la mitología y la historia de los juchitecos y del pueblo zapoteca. Otro diseño editorial, "aunque" exclusivamente en zapoteco, y no como los otros en dos lenguas: un libro de finísima impresión con algunas obras pictóricas de Francisco Toledo; el texto en la portada, para nosotros incomprensible, dice así: Gubidxa, beeune ca beleguí Stiidxa' ra guyá' guidxilayú, Bizee Luni, Francisco Toledo. A continuación se encontraba el departamento de las postales con antiguas fotos costumbristas: parejas matrimoniadas, niños muy bien peinados paraditos sobre unas sillas, hermosas mujeres tradicionalmente ataviadas y tantas otras imágenes. Y en fin, un poco más hacia el fondo, el área de *posters*, muchos de ellos evocando también un romanticismo fundamentalista, el regreso a la tierra, pero otros con temas del presente como el dedicado a Víctor Yodo, popular líder cocceísta secuestrado por el ejército desde 1978.

Sería un error pensar que toda esta exaltación de la herencia responde a un acto meramente deliberado, como quien escarba para encontrar pedazos de idolillos sin conexión alguna con la cultura de nuestros días. Nada más alejado de lo que sucede en Juchitán. A Víctor de la Cruz, a Elisa Ramírez y a otros muchos les debemos un seguimiento histórico de las luchas sociales que han tenido lugar en la región desde que Cosijoeza, rey de Sachila y último emperador zapoteca, venció, una vez más, a los aztecas casi a la llegada de los españoles hasta, prácticamente, la derrota del PRI a manos de la COCEI.

## CUATRO SIGLOS DE LUCHAS ZAPOTECAS

Para entender a Juchitán en nuestros días,

hay que recordar lo siguiente: salvo en momentos muy excepcionales, los zapotecas se mantuvieron históricamente dentro de una formación teocrática descentralizada. En los siglos XV y XVI de nuestra era, tal orden los condujo a una elevada fragmentación en una serie de ciudades rectoras y aldeas tributarias. Y es que esta sociedad gozó de gran autonomía a lo largo de muchos siglos de movimientos étnicos, guerras y reorganizaciones políticas y espaciales llevadas a cabo por los grandes imperios, principalmente por los tolteca-chichimecas. Por ello, los zapotecas se encontraban totalmente libres de la dominación azteca a la llegada de los españoles y así se explica que se mantuvieran intransigentes con respecto a su soberanía a lo largo de los casi cinco siglos de vida colonial y republicana de nuestro país. "La fragmentación de la etnia zapoteca en diversas ciudades rectoras con sus aldeas tributarias sin llegar a constituir un Estado que le diera unidad de dirección frente al invasor [...] nos permite entender el tipo de respuesta que dio cada centro rector zapoteca a la colonización española [...] Cosijoeza, desde el Valle de Zaachila, en guerra con los mixtecos de Cuilapan, y su hijo Cosijopí de Tehuantepec, asediado por los mixtecos de Tututepec por la costa, buscaron alianza con los españoles para hacer frente a los mixtecos y a una eventual agresión de sus forzosos parientes políticos aztecas cuyo gobernante se había rendido a los conquistadores. En cambio los zapotecas de Ixtexpi y sus aldeas, en alianza con los mixtecos de Cuilapan, y los de Xalapa se enfrentaron a los invasores y a sus aliados indígenas" (De la Cruz, s/f).

Pero en el fondo, la división respondió desde su origen al hecho de que las clases bajas tendieron a defender la civilización zapoteca mientras las clases dirigentes y los grandes señores renunciaron a su soberanía, abdicando a favor del rey de España.

Así, entre 1547 y 1550 se produjeron tres rebeliones en los valles centrales de Oaxaca y

en contra de esta ciudad que simbolizaba el poder opresor de los colonizadores. Esto se explica, en gran parte, debido a que la epidemia de 1545-1548 acabó con un cuarto o un tercio de la población indígena y ello aumentó la demanda de mano de obra por parte de los conquistadores, quienes buscaron atrapar a los indígenas plebeyos mediante una nueva institución laboral: el repartimiento, que permitía la mejor distribución de la escasa mano de obra entre sus explotadores (*Ibidem*, p. 14).

En 1660 se desató la llamada rebelión indígena de Tehuantepec, inmediatamente después de que el colapso demográfico de los años 1640 y 1650 redujera a una cuarta parte el número de tributarios, sin que el monto del tributo fuera modificado. Los caciques indígenas, al no poder reunir el tributo entre su gente, eran desnudados y azotados. El cacique de Tequisistlán murió a consecuencia del castigo, y los indígenas chontales de ese pueblo, así como los zapotecos de Tehuantepec y los huaves, zoques y mixes se rebelaron contra el alcalde mayor don Juan de Avellán, quien fue linchado junto con su servidumbre. Inmediatamente después, los indígenas nombraron a nuevas autoridades y recuperaron las tierras que eran de origen comunal.

Durante más de un año, los pueblos alzados mantuvieron independiente de la corona española a la región, hasta que el obispo del lugar, mediante una labor ideológica minuciosa, convenció a los indígenas de entregar las armas. Vinieron entonces los castigos: contra Gerónimo Flores, Fabián Mendoza y Lázaro Mir, pena de muerte y "que el dicho Gerónimo Flores fuese hecho cuatro pedazos puestos por los caminos reales de Tehuantepec" (*Idem.*). El resto de los prisioneros, entre quienes había muchas mujeres, no recibieron un trato más indulgente.

A pesar de la brutalidad de la represión, cincuenta y cinco años después, los indígenas de Tehuantepec volvieron a rebelarse. A la cabeza del movimiento estaba la llamada in-

dia Teresa. Esta vez, sin embargo, los indígenas no pudieron ser reprimidos con la misma saña porque los españoles no contaban con soldados suficientes.

Como lo dice Víctor de la Cruz, todavía está por explicarse cómo fue que habiendo comenzado en el Valle de Oaxaca, en el siglo XVI, las rebeliones zapotecas desplazaron su foco hacia el sur, hacia Tehuantepec, en los siglos XVII y XVIII y pasaron finalmente a Juchitán en los siglos XIX y XX, después de iniciada la independencia política del país.

Sea como sea, en 1834 se sabe del primer levantamiento armado de los zapotecas de Juchitán, encabezados por José Gregorio Meléndrez, quien hasta su muerte, en 1853, fue líder indiscutido de zapotecas, huaves, choñtales y zoques. El origen de los conflictos estuvo fincado en el control de las salinas y en la esperanza de los indígenas en que, una vez ganada la independencia, les sería restituida la propiedad colectiva de los recursos naturales. En realidad, el Estado central siempre fomentó la explotación de las salinas y de las tierras en forma monopólica y privada en favor de la burguesía criolla. Los enfrentamientos con Benito Juárez, desde que fue gobernador de Oaxaca, se explican con base en esta contradicción insuperable. Desde 1847, en medio de la guerra con los Estados Unidos, Juchitán permaneció independiente de la capital del estado hasta que en 1850 Benito Juárez ordenó atacar a los juchitecos con batallones selectos, fuerzas de caballería y piezas de artillería. El poblado fue tomado e incendiado el 19 de mayo de 1850. *Che Goyo Melendre* se hizo fuerte después de huir hacia el sur; luego, en una contraofensiva, derrotó a los juaristas y tomó Tehuantepec el 7 de julio de 1850. La rebelión llegó a su fin sólo después de que se firmaron minuciosos acuerdos políticos entre Melendre y Mariano Arista, ante la rabia de Juárez, quien se inclinaba por una derrota militar a fondo de los rebeldes.

Disipados los nubarrones de la inter-

vención los juchitecos continuaron sus reclamos sobre la propiedad privada de las salinas. Recurrieron a la influencia de Porfirio Díaz, con quien habían combatido a los invasores franceses, y aunque los decretos juaristas de desamortización de 1856 formalizaban prácticamente el despojo de sus bienes comunales, un decreto presidencial reconoció el derecho de los juchitecos sobre las salinas. Fue sin duda un pago tardío por los valientes servicios que ese pueblo había prestado a la patria y a los liberales en contra de los invasores.

Luego fue el turno de Albino Jiménez, quien hacia 1870, quiso independizar del estado de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec, como ya había sido el caso entre 1853 y 1857. Esta vez, la causa fue los actos de barbarie que el gobernador de la entidad y hermano de don Porfirio, Félix Díaz, había cometido contra los indígenas. Entonces el gobernador se propuso aplastar a los rebeldes para que sirviera de escarmiento a sus gobernados fusilando a los líderes, incendiando, una vez más, el pueblo de Juchitán y aserrando la esfinge de San Vicente, patrono del pueblo, hasta reducirla a pequeños cubos de madera. Los juchitecos, en respuesta, hicieron lo propio con el mismísimo cuerpo de don Félix Díaz, pues en 1872 lo apresaron cuando huía de la capital del estado después de haberse unido al Plan de la Noria, primer intento fracasado de su hermano Porfirio por obtener la presidencia del país. No fue sino hasta 1877 cuando Díaz hizo las paces con los juchitecos, pues éstos reconocieron el plan de Tuxtepec que condujo a la presidencia a Porfirio.

Estos zapotecas han sido incansables: hacia 1881 estalla la rebelión indígena contra la dictadura porfiriana encabezada por *Mexu Chele* debido a las causas históricas de siempre: tierras, impuestos, salinas e imposición de las autoridades municipales. Al ser derrotados, los insurrectos fueron confinados en los campos de trabajos forzados de Valle Nacional y Quintana Roo, aunque una parte

de ellos permaneció en Juchitán y fue obligada a construir el palacio municipal en 1883.

Finalmente, y ya en nuestro siglo, los juchitecos se aliaron a la causa maderista en 1910 encabezados por el licenciado José F. (Che) Gómez quien termina siendo *de facto* la autoridad en Juchitán. Benito Juárez Masa, Gobernador a la sazón e hijo del Benemérito, para recordar quién era el que mandaba, nombró al coronel Francisco León, el mismo que había reprimido a los juchitecos en la rebelión de 1880-1881, como sustituto de Che Gómez. El pueblo se encargó de impedir ésa y otras imposiciones hasta que fue sitiado y luego tomado con fuertes pertrechos de artillería.

De esta época es la siguiente noticia en el diario *El País* del 7 de noviembre de 1911: "Mil cadáveres insepultos en las calles de Juchitán. La artillería federal destruyó el palacio municipal y el Hotel Central donde se encontraban parapetados los alzados, logrando huir el criminal llamado Che Gómez".

En 1919, Heliodoro Charis jura luchar hasta vencer o morir con tal de echar a las fuerzas carrancistas de Juchitán. Como Obregón era ya candidato a la presidencia y Charis tomó las armas contra la revuelta delahuerista, en 1924 fue elevado a general brigadier.

## CONCIENCIA DE IDENTIDAD

Pero más importante que el recuento mismo es que tales fechas, personajes y situaciones se encuentran vivas en la conciencia popular. No son sólo estribillos de canciones o fórmulas lingüísticas repetidas mecánicamente, sino que perviven en la memoria de los habitantes viejos y jóvenes del pueblo y son transmitidos por medio de la historia oral. Elisa Ramírez así como Adriana López en sus análisis y tesis doctorales abundan en demostraciones fehacientes sobre este punto. No hay más que ver los cuentos populares como el de *Coyote y Conejo* rescatado en el idio-

ma escrito, por Víctor de la Cruz, y en el pictórico por "Chico" Toledo y editados en un solo cuadernillo, precioso documento, una joya de la cultura de aquel lugar.

Carlos Monsiváis nos lo había advertido: "se van ustedes a enfrentar a uno de los raros movimientos en nuestro país con una *conciencia de identidad*; quizás el sinarquista haya sido otro ejemplo de esto".

Y nos pareció que tenía razón. No hay más que recordar que en el México posrevolucionario las luchas sociales se han caracterizado mucho más por *aquello a lo que se oponen* que por *aquello que identifica* a los distintos grupos, fuerzas sociales, clases o individuos que se alían o coaligan para emprender tal o cual lucha. En efecto, el Estado mexicano ha sido un actor tan poderoso en la historia de nuestro país que antes de hacernos la pregunta sobre aquello que nos identifica a quienes luchamos en un mismo frente, nos reconforta la idea de que, sea quien sea el que se encuentre junto, luchamos contra el mismo adversario. Que nos pregunten a los sesentaiochinos si quienes luchamos en aquel otoño seguimos algún camino más o menos unificado y coherente: la explosión de tendencias fue absoluta una vez reprimido el movimiento y pactada *de facto* la amnistía con el echeverrismo: ha habido ministros de Estado, miembros de la DIP, trabajadores agrícolas en comunas suecas e integrantes de la COCEI, entre tantos otros.

Por eso, hablar de un movimiento con una "conciencia de identidad" en nuestro país es un asunto verdaderamente relevante y en esto radica, sin duda, la dimensión espectacular de la COCEI, de Juchitán y de los zapotecas en semejante contexto.

Así que el calificativo de "CCH en zapoteca" aplicado a la COCEI no constituía una caricatura adecuada por la enorme importancia de la dimensión étnica, lingüística, cultural... pero para ser sinceros tampoco nos parecía completamente vacía de sentido.

## LA REINAUGURACIÓN

Sin embargo, esta imagen se vino abajo la mañana del domingo 4 de septiembre durante la reinauguración del palacio municipal.

Desde que nos encontrábamos cruzando la plaza con Macario y Víctor de la Cruz nos quedamos sorprendidos. La lluvia no había cesado en las últimas dos horas y amenazaba con lo mismo por el resto del día. "Esto va a deslucir la ceremonia", había dicho Macario un rato antes, sin mostrarse por ello visiblemente preocupado. Y es que faltando más de una hora para que el acto diera principio, ya se encontraban frente a palacio, algunos con plásticos, otros con paraguas y la mayoría así nomás, cerca de tres o cuatro mil juchitecos. El cuidado en su ropaje no era menor que el de los invitados de la víspera a la Vela y el ambiente festivo, el hormigueo, la animación, los colores de los huipiles y los bidaani' daban clara cuenta de que la ausencia del sol no era una tragedia, con él se iba el calor abrazante, húmedo, insoportable.

El primer templete, un tablado construido la noche anterior, se vino abajo. El segundo no podía fallar: era el propio palacio municipal recién restaurado. A pesar de todo, el presidium se vio un poco deslucido como resultado del percance, pues cada balcón no es mucho más amplio que la estrecha puerta que le da acceso, así que los oradores tuvieron que desfilar de uno en uno.

Carlos Sánchez fue el segundo orador, sin duda el más contundente y resaltó, como casi todos los oradores, la persona de Polo de Gives "nuestro presidente" y explicó, una vez más, la forma anticonstitucional como había sido depuesto; se lanzó contra el gobernador Pedro Vásquez Colmenares y juró que la COCEI ganaría nuevamente las elecciones con el apoyo del pueblo. Para finalizar, habló en español, "en atención, dijo, al mayoritario porcentaje de extranjeros, principalmente cubanos y salvadoreños, que se encuentran

entre nosotros"; era un alusión llena de sarcasmo a las acusaciones que el PRI y la clase política estatal y nacional habían venido formulando contra la COCEI en un intento más por hacerla perder legitimidad: "La COCEI es al gobierno mexicano lo que centroamérica a Reagan" señaló oportunamente Manuel Buendía en el *Excelsior* del 18 de agosto de 1983.

Quién sabe si habría uno o dos salvadoreños por ahí en busca de trabajo, refugiándose del genocidio de su patria, pero lo que sí había ya para esas alturas era una masa de entre seis y diez mil juchitecos. Las 9 secciones, como les llaman ahí a los barrios, habían ido llegando una a una con el aplauso de la masa.

Se confundía el rojo de las banderas pesu-mistas y coccéistas con las blusas de flores encarnadas, los paliacates y la infinidad de claveles sembrados en las oscuras cabelleras femeninas.

Las agencias municipales se hicieron presentes y la ovación fue prolongada también cuando apareció el sólido autobús del PSUM, que con la hoz y el martillo pintados junto a la bandera mexicana, dobló por la esquina derecha, al fondo según la perspectiva desde los balcones, transportando a su secretario general y a otros cuadros de ese partido así como a periodistas y fotógrafos.

En el interior del palacio, a espaldas del orador en turno, Leopoldo de Gives se había embarcado en una intensa actividad invitando a una serie de recién llegados a tomar asiento aquí y allá sin poner mucha atención en el "rollo" que las bocinas desplegaban, ni siquiera cuando se referían a él. En ese ambiente de trastienda, Polo dedicó largo rato a la lectura, en voz alta, de un artículo aparecido en el seminario oaxaqueño *Hora cero*. Traducía del español al zapoteco y su interlocutor era una mujer de edad avanzada sensiblemente emocionada por la lectura, casi sonriente. Era la madre de Víctor Yodo, el

líder desaparecido en el 78. El artículo se refería a su hijo. Na China Yodo tenía el pelo completamente blanco, estaba vestida con un huipil negro, lo mismo que las tres mujeres también mayores que le hacían compañía. En su turno, el presidente municipal, en un acto desmitificador, invitó a todo el pueblo a conocer los interiores del edificio: "ninguna puerta estará cerrada". Por poco se vuelca la mesa con las ollas de bizaa dxima, Guidaxadó' T' gucheguina", Zeberlabihui, Gueta-gun beelaza, Guetagun Guchachi', etcétera, es decir, los tamales grasosos de res, puerco, iguana, los camarones y los moles a base de tomate y maíz que las mujeres del mercado habían traído. Cuando los aplausos indicaron que Polo había roto el rutinario listón, la muchedumbre se lanzó peligrosamente a través del túnel de entrada. La gente revisaba cuidadosamente las paredes simples, desnudas, en aquella sucesión de cuartos sin muebles, comunicados monótonamente por puertas de metal sin ningún chiste. El desfile duró varias horas y las colas para salir del edificio alcanzaron hasta cincuenta metros en el amplio corredor trasero de la planta alta.

## LO AGRARIO, LO POPULAR Y LO INDÍGENA

Las doce horas de carretera que nos tomó el regreso a la capital fueron muy productivas. Había que reconstruir todo: la vanguardia coceísta no era, en primer lugar, un grupo de jóvenes radicales externo a Juchitán y tolerado, mientras existiera, por los pobladores.

La COCEI es una organización perfectamente implantada, compenetrada cultural, lingüística, étnica y anímicamente con el pueblo. Por otra parte, la crítica en torno de la falta de una dimensión futura de la base económica, de un impulso capaz de ligar racionalmente herencia con planificación, pasado con desarrollo (la falta de un "ministerio" de la planificación económica, decíamos),

sin ser completamente errada, no puede aceptarse de manera simplista. Es cierto que la dirigencia coceísta difícilmente podría recibir el calificativo, hasta hoy históricamente honorable, de vanguardia modernizadora.

Incluso si pensáramos en una vanguardia que se estuviera planteando revolucionar la economía por la vía socialista. No parece razonar, para hacer una comparación excesiva, en los términos de la dinastía Meiji, que fue capaz, sin romper con la tradición, de transformar al Japón de la segunda mitad del siglo XIX en una economía competitiva frente a los países europeos que vieron surgir en su seno la revolución industrial.

Es cierto, pues, que en el fenómeno coceísta la corriente Meiji no abunda, pero también es cierto que no está completamente ausente. Manuel López Mateos, matemático universitario y durante un tiempo director de XEAP (Radio Ayuntamiento Popular), nos explicaba que a pesar del severo castigo presupuestal a que ha sido sometida la alcaldía coceísta siempre fue cultivada la imagen según la cual el control de los poderes municipales no tendría muy pronto justificativo (se pensaba en la segunda presidencia coceísta), si la producción en la ciudad y en el campo no era revolucionada o si dicha revolución era incapaz de allegar a la comunidad el excedente monetario o los insumos necesarios para echar a andar la construcción del puente sobre el Río de los Perros y la pavimentación de, al menos, las principales calles de Juchitán.

"Pero, preguntamos nosotros, ¿cuáles son las características de esas unidades productivas?"

En primer lugar, explicaba Manuel, no se trata de expropiar a los fabricantes o comerciantes ya establecidos. Se trata más bien, por ejemplo, de fomentar, desde el ayuntamiento, una serie de cooperativas que produzcan diversos materiales para la construcción de viviendas populares (la escasez al respecto es un problema crítico en aquella ciudad).

De esa manera, los sectores capitalistas, aunque se trata sobre todo de comerciantes, serán incapaces de competir en la región. Digamos, entre paréntesis, que el adversario más agresivo de la COCEI en el plano de las fuerzas sociales es la Cámara de Comerciantes lugareños (filial de la CANACO), y que este organismo fue una base firme de la "contraofensiva" priísta.

Pero en lo que se refiere a la cuestión agraria, el proyecto tiene una coherencia mucho más elevada:

"En 1949 los campesinos de la comunidad de Juchitán y sus anexos solicitaron el reconocimiento de sus tierras comunales, nos dice un estudio de la COCEI,<sup>1</sup> y en junio de 1964 por Decreto Presidencial se confirmaron y titularon sus bienes comunales al mismo tiempo que se revertían al régimen ejidal, argumentando las autoridades que esto se hacía por encontrarse esas tierras en un sistema de riego.<sup>2</sup> Las tierras confirmadas fueron 68 000 hectáreas, de las cuales 28 000 son de riego y el resto de temporal" (COCEI, s/f:3).

Las reacciones frente al decreto fueron de dos tipos: por una parte, estaban los campesinos indígenas que insistían en que el reparto debió favorecer la propiedad comunal ya que ése era el carácter originario de la tierra.<sup>3</sup> Por otra parte, se encontraban los "pequeños" propietarios (neolatifundistas) poseedores de modernas maquinarias y técnicas

<sup>1</sup> El ejido de Juchitán se integra en la actualidad por seis comunidades indígenas: Chicapa de Cartro, Unión Hidalgo, La Ventosa, Espinal, Xadani y Juchitán. Todos con una población total de cerca de 200 mil habitantes. El 60% de la población económicamente activa es campesina, sin contar a los que se emplean como trabajadores agrícolas". ("La tenencia de la tierra y el movimiento campesino en el Istmo de Tehuantepec", documento inédito, sin fecha, firmado por la Coalición Obrero, Campesino, Estudiantil del Istmo, 18 págs., p. 2).

<sup>2</sup> La presa Benito Juárez se inauguró en el año de 1964.

<sup>3</sup> Estos campesinos indígenas producen ajonjolí para el comercio y maíz, calabaza, sandía y melón para el autoconsumo.

avanzadas para el control de plagas y para la fertilización; cultivan principalmente arroz, caña de azúcar y sorgo. Aprovechando el descontento del primer grupo, estos acaparadores desataron una serie de campañas en el medio campesino asegurando que las tierras ejidales serían distribuidas entre campesinos del vecino Valle de Oaxaca. Así, el descontento campesino-indígena terminó por oponerse a la forma ejidal por la que se había inclinado el decreto presidencial.

Bajo este ambiente de doble inconformidad, el departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC), entonces bajo la dirección de Norberto Aguirre Palancares, llegó a un curioso acuerdo con el Cuerpo Consultivo Agrario, según el cual y a pesar del decreto presidencial de 1964, serían respetadas como propiedad privada las tierras de un nutrido grupo de pequeños propietarios, entre quienes se encontraban caciques y acaparadores, muchos de ellos ex-presidentes del municipio. Curiosamente, todas estas tierras, en total 25 000 hectáreas, se encontraban y se encuentran dentro del distrito de riego.

El problema se agudizó porque la presa Benito Juárez abrió enormes expectativas entre los derechohabientes de las treinta mil hectáreas, aproximadamente, que serían irrigadas por la obra hidráulica dentro del municipio de Juchitán.

"El Presidente Díaz Ordaz en 1966 enterado del conflicto y convencido del error político de haber entregado tierras de primera calidad a campesinos pobres, decidió proteger los intereses de los acaparadores y de las transnacionales expidiendo 25 000 títulos que supuestamente amparan la propiedad privada de las tierras y las excluye del decreto de 1964 tomando como base únicamente el simple acuerdo del Cuerpo Consultivo Agrario. Estos títulos no tienen ninguna validez legal ya que violan flagrantemente las leyes agrarias", concluye la COCEI (*Ibidem*, p.5).

Tres regímenes de tenencia de la tierra se sobrepusieron entonces como resultado de

toda esta historia a propósito de la propiedad formal de aquella región: la comunal, la ejidal y la privada (pequeña propiedad).

Arturo Warman, en un ensayo titulado *Los campesinos, hijos predilectos del régimen* (ed. Nuestro Tiempo, 1972) y que ya forma parte de la bibliografía calificada sobre el agro, puso de manifiesto la profunda ignorancia e irracionalidad de la decisión burocrática, "ingeniería desde el escritorio", que dio vida al distrito de riego número 19:

La enorme obra hidráulica se planeó, se decidió y se construyó desde el centro del país. La población local nunca fue consultada, nunca se le permitió participar en las decisiones, ni siquiera se les informó cual era el propósito y objetivo de la enorme obra de irrigación. Quienes se encargaron de la planeación de ingeniería de la presa no tenían ningún conocimiento sobre las prácticas agrícolas del Istmo de Tehuantepec; de hecho no tenían ningún conocimiento verdadero sobre las condiciones geográficas. Tenían un conocimiento puramente estadístico y el factor más importante para cualquier agricultor del Istmo, los vientos que soplan en la estación de secas, nunca fueron tomados en cuenta por los que planificaron la presa. Ellos pensaban que con el agua se podía obtener un segundo cultivo en la estación de secas, que es precisamente cuando soplan vientos que alcanzan velocidades extraordinarias, de más de cien kilómetros por hora (Warman *apud* Toledo, 1983:2).

La caña de azúcar, único cultivo que resistió las condiciones eólicas, crecía enano ya que después de una primera estirada, los vientos sólo le permitían una progresión inclinada.

No cuesta trabajo, en este marco de irracionalidad, entender por qué a partir de 1974 la COCEI ha enarbolado una política agraria abiertamente agresiva basada en la invasión de tierras como punto de arranque para las negociaciones y basada, también, en la búsqueda

de un régimen comunal de propiedad de la tierra. Al menos en las tierras arrebatadas mediante acciones directas, la COCEI buscó el trabajo colectivo como forma de explotación y la forma colectiva ejidal como objetivo más adecuado para la tenencia. Así sucedió con un rancho ganadero de 250 hectáreas que el Banco de Crédito Rural administraba debido a que sus propietarios no cubrieron una deuda de 20 millones de pesos. Los campesinos lo invadieron desconociendo deliberadamente la deuda, pero mientras tanto han aprovechado la pastura para alimentar a su ganado.

A las tomas directas responden los terratenientes con amparos y en la gran mayoría de los casos las tierras permanecen ociosas durante el litigio. Tradicionalmente se invocó, en repetidas ocasiones, una ley que en estos casos permite al presidente municipal arrendar las tierras a los campesinos que las soliciten con el resultado conocido: fueron los propios caciques y acaparadores quienes salieron beneficiados recuperando sus extensiones. Por eso, la lucha por controlar la presidencia municipal y el comisariado de bienes comunales iba a tener una mayor importancia para la COCEI.

A pesar de los escollos y a medida que la organización se fue consolidando, se lograron algunas conquistas. Por ejemplo, la resolución presidencial en favor de los campesinos de la Colonia Álvaro Obregón que despojó al terrateniente Federico Rasgado de 1 000 hectáreas en litigio desde hacía quince años. Lo mismo ha sucedido en otros casos que no podemos enumerar por cuestiones de espacio.

## ESTUDIANTES ARRAIGADOS

Es importante destacar a partir de esta recapitulación, el hecho de que la COCEI surgió y se desarrolló como una organización esencialmente "campesinista" como dice Felipe Martínez (1983). Además, en contraste

con la idea de un "CCH en zapoteca", obra en favor de esta dirigencia el haber establecido un estrecho compromiso con sus bases, a pesar de la larga historia represiva de que fueron víctimas los jóvenes cocejistas. En efecto, la asociación surge en 1973 librando una batalla contra la corrupción que impera en la clínica de salud de Juchitán. Después de varios mítines y manifestaciones es destituido el director y acusado por cobrar elevadas cuotas por servicios que debían ser gratuitos. A raíz de esta acción, se forma la Coalición Campesino Estudiantil de Juchitán (CCEJ). Inmediatamente después, se dedican a la tarea de recuperar el Comisariado de Bienes Comunales y a librar pequeñas batallas: libertad de estudiantes, indemnización a familiares de muertos en accidentes camioneros, denuncias por corrupción en bancos rurales y en dependencias de gobierno, aumento de salarios, reinstalaciones, indemnizaciones, etcétera. Como la actividad se extiende al medio obrero, aunque se trata de una región sin industrialización prácticamente, la organización adopta el nombre de Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil de Juchitán (COCEJ).

Con estos antecedentes, los "cocejistas" se sienten fuertes para participar con un candidato independiente en las elecciones municipales de 1974. A pesar del gran apoyo popular, gana la planilla priísta. La Coalición se manifiesta contra la imposición y el fraude y, en una marcha celebrada el 20 de noviembre de aquel año, resulta muerta Lorenza Santiago en lo que sería el comienzo de una escalada represiva. A principios de 1975, la Coalición gana las elecciones de la Asociación Ganadera local con el apoyo de los ganaderos en pequeño.

En febrero de 1975, la policía tortura y asesina a dos campesinos y encarcela y golpea a importantes líderes como Héctor Sánchez, Daniel López Nelio y César Pineda. A partir de ahí se soltaron los perros: el 20 de no-

viembre, cuando la Coalición conmemora un año de la muerte de Lorenza Santiago, matones al servicio de caciques abren fuego contra los manifestantes: ocho campesinos y un estudiante resultaron muertos. Se desata una gran agitación en los pueblos del Istmo, lo que da pie para que la COCEJ pase a llamarse COCEI. La dirigencia se ve obligada a abandonar Juchitán en 1976 y, durante este año, recaerá la lucha en una generación más joven de estudiantes que el 22 de febrero, al exigir frente a la cárcel municipal la libertad de algunos de sus compañeros, son víctimas de las ametralladoras con un saldo de cinco muertos y decenas de heridos. Sin duda, la caída del gobernador Zárate Aquino está ligada a este acto brutal. En el proceso electoral de 1977, la COCEI postula nuevamente a un candidato independiente, el mayor del ejército, Leopoldo de Gives Pineda, padre de quien luego fuera presidente, que realiza su campaña en medio de un masivo apoyo popular; todo para que se repitiera, una vez más, el fraude priísta. La toma de posesión se hizo en medio de los disparos del ejército y de una intensa acción de la policía: esta vez el saldo fue de un muerto, varias decenas de heridos y la destrucción, como respuesta de la masa, de varios locales comerciales. "Shuncu pe laacabe, ruuti ca cobarde ca laacabe sica rati bicu" (pobrecitos de ellos, los cobardes los matan como si fueran simples perros-animales). Luego, el ejército se acantonó prácticamente en Juchitán, el mayor de Gives fue detenido en el campo militar número uno donde purgó tres años y medio y los líderes de la COCEI fueron amenazados de muerte. De esta derrota se conservó, al menos, la organización urbana conformada por los comités seccionales que fue la base del ayuntamiento popular y que durante años funcionó y funciona paralelamente al ayuntamiento constitucional.

Hacia principios de 1981, dos factores se iban a conjugar para que, por fin, la COCEI pudiera erigirse en ayuntamiento popular:

## LUCHA DE CLASES

En primer lugar y como consecuencia de la destitución del gobernador Zárate Aquino, el PRI del estado se había dividido, y eso lo llevó a perder cierta fuerza en el momento de escoger candidato para la presidencia de Juchitán. Esto no quiere decir que sin tales divisiones el triunfo priísta hubiera sido fácil —la historia de fraudes a la COCEI ya era larga—, implica simplemente que el gobernador se vio obligado a anular las elecciones porque el candidato elegido, al serlo "de mediación" entre los priístas en pugna, resultó extremadamente débil como para ser apoyado a ultranza, sobre todo porque la COCEI y el pueblo de Juchitán tomaron el palacio municipal en cuanto se supo del intento de fraude. Entonces el candidato priísta para las elecciones extraordinarias fue otro: Israel de la Cruz, cuyos antecedentes políticos lo acreditaban, incluso, como hombre de izquierda dentro del PRI (fue secretario particular del ex-presidente del PRI, Carlos Madrazo). En un esfuerzo desesperado por ganar las elecciones, el partido oficial realizó, durante la campaña, obras municipales, reparaciones y repartición de bienes materiales, pero ya era tarde.

En segundo lugar, la reforma política permitió a la COCEI contender legalmente bajo la cobertura del Partido Comunista Mexicano (luego bajo la del PSUM). Convalidar el fraude hubiera significado un golpe severo a la reforma política animada por José López Portillo, ya que ésta, entre otras cosas, permitía una publicitación nacional de tales sucesos. Así que el gobernador Pedro Vásquez Colmenares, ante la segunda derrota de su partido, optó por declarar: "aquí no hubo vencidos ni vencedores, el que triunfó fue el pueblo de Juchitán y la Reforma Política".<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Para una visión en detalle de la vida de la COCEI, consúltese el trabajo de Gutiérrez (1981).

La trayectoria de la COCEI no deja, pues, lugar a dudas: nos encontramos con una dirigencia cuya base está constituida por sectores, más bien por masas, netamente populares. En esta medida, la COCEI se identifica con una clase social bien definida. Sin embargo, el PRI no representa necesariamente a la otra clase. Más bien, el PRI cuenta con un apoyo pluriclasista.

Veamos cómo es que se ha llegado a esto, citando extensamente el trabajo de Felipe Martínez:

La gran fuerza de la COCEI reside principalmente en la capa de campesinos pobres y jornaleros agrícolas que viven en las zonas periféricas de la ciudad; por su parte, el PRI tiene sus fuerzas en las zonas rurales del municipio. Esto no impide que la COCEI poco a poco haya penetrado en estos lugares, como es el caso de la Colonia Álvaro Obregón y el Ejido Emiliano Zapata. La característica fundamental de las zonas donde mayor penetración ha tenido la COCEI es que son lugares donde el campesinado ha emprendido movimientos para exigir dotaciones de tierras, mientras que el PRI tiene sus bases de apoyo en los lugares donde la tierra fue repartida por los regímenes revolucionarios.

Así, mientras la COCEI moviliza a la población urbana —de los suburbios de Juchitán—, cuya actividad está vinculada al campo, y tiene como demandas principales la restitución de las tierras comunales, o la dotación de tierras ejidales, el PRI moviliza a la población rural de las agencias del municipio. Ahí donde la demanda por la tierra es la lucha principal, la COCEI es la fuerza hegemónica, mientras que en las agencias sin grandes problemas por la tierra es el PRI el organismo aglutinador de la población. Éste es el caso de la Verdad.



la Ventosa, Chicapa de Castro y, en cierta forma, de la colonia Álvaro Obregón [...]

El caso de esta última es excepcional. Fue fundada en 1930 por los soldados que integraron el décimo tercero Batallón Revolucionario al mando del Gral. Heleodoro Charis Castro en las tierras que Álvaro Obregón le otorgó al triunfo del Plan de Agua Prieta. En 1964 los pobladores de la entonces Colonia Álvaro Obregón pidieron que se les reconociera como nuevo centro de población, sin que se les aprobara la petición; en 1974 los líderes de la COCEI unificaron a los solicitantes bajo la bandera de esa organización. Para entonces la mayor parte de las tierras estaban en manos de Federico Rasgado, quien le planteó a López Portillo en una gira que la resolución presidencial de reparto no debía de ser sobre 2 300 hectáreas sino solamente sobre 1 000 puesto que el resto había sido repartido entre 80 campesinos. Con ese millar de hectáreas se creó en 1977 el Ejido Emiliano Zapata, triunfo de la COCEI. Casi en respuesta, el 27 de diciembre de 1981, en un acto político encabezado por el presidente del PRI Antonio Fábila, la heredera del Gral. Charis entregó títulos de propiedad a aproximadamente cien familias. Los nuevos posesionarios dijeron ser auténticos soldados, o sus herederos, del décimo tercero Batallón de Infantería. Así en la zona coexisten dos ejidos (aparte de los pequeños propietarios). Los ejidatarios de Emiliano Zapata y buen número de los de Álvaro Obregón estuvieron permanentemente en el palacio municipal durante la toma de noviembre-diciembre de 1980, mientras que la mayoría de ejidatarios de Álvaro Obregón y los pequeños propietarios han sido tradicionalmente militantes del PRI (Martínez, 1983:27-28).

Caben dos acotaciones a lo escrito por Felipe Martínez: primero, "la mayoría de los ejidatarios" de un lugar no quiere decir la mayoría de la población y, segundo, las bases

del PRI, aparte de estar formadas por los ejidatarios a quienes la Revolución hizo justicia, no por ello menos pobres, se integran por la casi totalidad de los grupos acomodados de Juchitán, especialmente por los comerciantes a través de la CANACO del estado de Oaxaca. Esto sirve para no perder de vista que en términos cuantitativos la COCEI es ampliamente mayoritaria, aunque en el plano de las denominadas "fuerzas reales de poder", en donde las clases medias y altas tienen un gran peso, su ventaja es menor.

Recapitemos: la COCEI es una auténtica organización de clase que finca sus apoyos en los sectores más populares y desposeídos de la población. No viene al caso, pues, la hipótesis de "un CCH en zapoteco".

Sin embargo, hay aspectos poco aclarados del fenómeno: es obvio que la referencia al pasado, por parte de los coceistas, es mucho más poderosa que las consideraciones sobre el futuro, sobre la generación de recursos crecientes o la planificación económica (aunque sólo se trate del alcantarillado, la pavimentación, los pilotes del puente, etcétera).

Conocidas las dificultades presupuestales a que se enfrentó la COCEI como resultado del boicot del gobierno estatal, no sale sobrando la insistencia sobre este punto.

Son significativos a este respecto los escritos firmados por la COCEI sobre la colectivización ejidal y que el echeverrismo, principalmente, inició la discusión: "La colectivización implementada por el Estado es la base de la modernización del capitalismo en el agro. La nueva Ley Federal de Reforma Agraria da personalidad jurídica a los ejidos para que sean objeto de crédito. Esto permite la modernización de los medios de la producción y crea una élite en el ejido. Propicia la renta de las parcelas y el acaparamiento de las tierras.

"El Estado no puede solucionar los problemas agrarios, son los propios campesinos en alianza con los otros sectores oprimidos, quienes deberán imponer la solución de sus demandas [...] La explotación de la tierra

debe ser colectiva, en beneficio de las comunidades, bajo la dirección de sus auténticos representantes y demandando crédito oportuno, riesgo a bajo costo y mejores precios para sus cosechas" (COCEI, s/f: 8).

## NARODNICHESTVO. CIEN AÑOS DESPUÉS

Ya desde la tarde del domingo en que se reinauguró el palacio municipal, esa tarde en la que el moderno autobús del PSUM fue balanceado cuando regresaba al D.F. en algún punto entre Sayula y Ciudad Alemán, se nos habían venido a la mente algunas asociaciones. "Las actividades de las narodniki, escribía, por ejemplo, el traductor de Andrzej Walicki, comenzaron a fines de la década de 1860 en un movimiento conocido como khozhdenie y narod ('Ir hacia el pueblo'). Los intelectuales, vestidos a la usanza campesina, recorrían la campaña (rusa) difundiendo sus ideas de reforma. Las persecuciones a que se vieron sometidos los llevaron a crear, en 1876, la organización secreta Zemliá i Volia ('Tierra y Libertad'), pasando de la propaganda pacífica al terrorismo y la conspiración" (Walicki, 1970:81). El movimiento de los populistas rusos, como se les conoció genéricamente, tuvo un fuerte contenido ideológico y cultural derivado del carácter mismo de sus animadores. Sin embargo, se opuso al "intelectualismo abstracto" de ciertos revolucionarios más puramente marxistas que "trataban de educar a los campesinos imponiéndoles los ideales del socialismo occidental, en lugar de aprender cuáles eran sus verdaderas necesidades y de actuar en pro de aquellos intereses e ideales de los que habían adquirido conciencia los propios campesinos" (*ibidem*, p. 83). Hacia 1890, una de sus corrientes llegó al extremo, paradójico por el carácter mismo de quienes animaban el movimiento, de declarar que la *intelligentsia* debía dejar sitio a las opiniones del pueblo.

Pero en lo fundamental el populismo consistía en la preeminencia de los "principios del pueblo" por oposición al capitalismo. Como lo precisó Lenin, el populismo era "una protesta formulada contra el capitalismo desde el punto de vista de los pequeños productores inmediatos, quienes, arruinados por el desarrollo capitalista, veían en él únicamente una regresión, pero a la vez exigían la abolición de las antiguas formas feudales de explotación" (Lenin, *apud* Walicki, 1970:85). Para los populistas, el capitalismo equivalía a la expropiación, la proletarianización y la total miseria de las masas. Provocaba el divorcio creciente entre la "riqueza nacional" y el "bienestar del pueblo".

Sin embargo, el movimiento populista no fue un fenómeno meramente reaccionario, en el sentido de pensar que siempre lo anterior fue mejor (aunque hay que aceptar que esa fue una lectura desviada pero muy difundida de las tesis de Lenin). En realidad, aunque los populistas se oponían al desarrollo burgués de Rusia, albergaban las esperanzas de que la comuna actual permitiera una transición directa al socialismo. Éste fue el principio de oro de *narodnichestvo*. Es más, en muchas partes del mundo, como lo recuerda Walicki "la idea de un desarrollo no capitalista de países atrasados se ha hecho realidad" (*Ibidem*, p. 86). Ello minó profundamente la idea clásica sobre el evolucionismo (el etapismo necesario)<sup>5</sup> desde donde se han lanzado las más duras críticas a los populistas y contra la que éstos lucharon desde muy temprano, y acertadamente, en la historia del marxismo. De hecho, autores populistas como Mijailovski se apoyaron en algunas apreciaciones que el propio Marx había esbozado en *El Capital* y precisado más tarde: "El comunismo es el renacimiento de una forma más alta de la 'relación arcaica de propiedad'

<sup>5</sup> "El país más desarrollado industrialmente no hace sino mostrar al menos desarrollado la imagen de su propio futuro".

representada por la comuna campesina rusa, y en consecuencia a Rusia le sería posible —suponiendo que las condiciones externas le fueran favorables— pasar directamente de las comunas rurales a la producción comunista moderna en gran escala” (Marx Karl, borradores posteriores a su carta a Zasulich, 8 de marzo de 1881; citado en Walicki, 1970).

A pesar de formar parte de una corriente unitaria, los populistas se dividieron fundamentalmente en dos grupos y esto tiene gran pertinencia para el caso que aquí nos ocupa:

Por una parte, estaba el grupo que fue denominado *los iluministas*, cuyas características enumeró Lenin: 1) “Violenta hostilidad hacia el régimen de servitud y todas sus consecuencias económicas, sociales y legales; 2) Ardiente defensa de la educación, la libertad y la europeización de Rusia en general; 3) Defensa de los intereses de las masas, principalmente de los campesinos” (Lenin, *apud* Walicki, 1970). *Los Iluministas* no reflejaron en sus concepciones el punto de vista del pequeño productor. Algunos de estos *iluministas* eran, pues, decididos occidentalófilos, como Chernishevski, que a la vez defendían con gran energía la comuna campesina y pensaban que Rusia podría *modernizarse* al pasar directamente al socialismo sin los sufrimientos que el capitalismo había traído a las masas.

Por otra parte, estaba el grupo al que el mismo Lenin dio el nombre de *romanticismo económico*. El romanticismo “significa una crítica al capitalismo formulada desde el punto de vista de una utopía pequeño-burguesa retrospectiva, una idealización del tipo de relaciones económicas y sociales precapitalistas” (Walicki, 1970:93). Al constituir el capitalismo un deterioro, se afirma la creencia de que el sistema económico ruso tradicional, el *artel*<sup>6</sup> y otras formas de propiedad son

de carácter excepcional. *En esa medida el romanticismo económico entre los populistas significa un localismo, o a lo mucho un regionalismo pero descuida los vínculos legales con las instituciones políticas nacionales y pierde de vista, o francamente rechaza, una concepción universal, global, tanto del progreso económico como de los valores culturales (del enganche de la economía local con la nacional)*. El progreso, escribió Mijailovski, “consiste en la aproximación gradual al individuo íntegro, a la más completa y diversificada división posible del trabajo entre los órganos del ser humano, y la menor división posible del trabajo entre los hombres” (Mijailovski, *apud* Walicki, 1970:102). Esta fórmula, agrega Walicki, “expresaba la esencia misma de la utopía retrospectiva populista que idealizaba a la primitiva economía campesina otorgando un gran valor a su autarquía, a su independencia con respecto al mercado capitalista” (Walicki, 1970:102).

Pero como quiera que sea, en su tendencia global, el populismo no resulta una manifestación social, política e ideológica en absoluto condenable: “en materia de teoría el populismo se asemeja a un Jano que mira con un rostro hacia el pasado y con otro hacia el futuro”, afirmaba Lenin, y Andrzej Walicki agrega: “al aproximarse al socialismo populista desde la perspectiva de nuestra época, resulta difícil negar que en él no sólo aparece el rostro ‘retrospectivo’ de Jano sino también el ‘prospectivo’” (*Ibidem*, p. 95).

En la actualidad, a juzgar por estas consideraciones sobre el populismo, las posibilidades de desarrollo implícitas en la comuna campesina parecen posibles a condición de superar un romanticismo económico autárquico y de convertir el radicalismo democrático anti-feudal (léase también antilatifundista), en socialismo agrario anticapitalista. ¿Es posible esto bajo formas productivas comunitarias modernas, aunque no sean a gran escala como imaginaba Marx?

<sup>6</sup> Los arteles son granjas colectivas semejantes a los Koljoses, pero donde se permite a los miembros la posesión de ciertos bienes.

## ¿INTEGRARSE A LA POLÍTICA Y A LA ECONOMÍA NACIONALES O FUGARSE EN EL LOCALISMO, EL PURISMO IDEOLÓGICO Y LA VIOLENCIA?

La historia y el presente de la COCEI no se encuentran fuera de las coordenadas marcadas por esta discusión. De un lado, podemos descubrir claramente un escenario en donde aparece una *dirigencia* apoyada en una *base popular*, campesina, e indígena, que echa mano de una *herencia* étnica, lingüística, educativa y cultural y termina encerrándose defensivamente en lo regional o, aun más, en lo juchiteco, en lo *local*. Varios "informantes", desde el D.F., habían expresado su baja esperanza en que la COCEI pudiera convertirse en un movimiento regional o al menos en una organización que aglutinara a los municipios que forman el Istmo de Tehuantepec (aunque fuera en Oaxaca, ya no digamos en Veracruz). De otro lado, cabría imaginar una *coreografía* contrastante en donde la *dirigencia* no se identifica exclusivamente con las *masas populares*, sino busca sus bases también entre los grupos medios e incluso entre los comerciantes y manufactureros dinámicos. Sería mucho más el *desarrollo de la economía* y no tanto la recreación de la herencia cultural lo predominante (habría más bien un detrimento de ésta), mientras que la comunicación con el sistema político y la *economía nacionales* tendería a ser fluida.

Naturalmente, Juchitán nunca ha tenido una élite política o económica con estas características. El PRI, siempre identificado con la corrupción, el cacicazgo y los acaparadores, quedó históricamente descalificado para cumplir una función semejante. Cuando en 1981 quiso vestir el ropaje de la modernidad, del cambio y de la eficiencia, fue ya muy tarde y no pudo evitar la catástrofe electoral.

Tampoco quiere decir esto que la COCEI esté condenada a permanecer dentro del pri-

mer esquema. Ya hemos visto cómo una corriente populista fue capaz de plantear la conexión inevitable con el desarrollo económico y tecnológico modernos apelando de manera inteligente a las formas de propiedad y a la matriz cultural de que era heredera. Es cierto que el poder soviético no fue muy respetuoso de estos planteamientos —la modernización se hizo con base en un trauma desintegrador—, pero hay muchos ejemplos más, como Rumania, o incluso dentro del capitalismo, como Japón, en donde la articulación ha sido mucho más exitosa. Una pregunta elemental en el caso de la COCEI, ya lo decíamos, es si existe o no una corriente que tienda a ligar herencia con desarrollo.

Pero por lo pronto, lo central en Juchitán es de carácter político y tiene que ver con la destreza o la esclerosis del Estado y del sistema político mexicanos para acoplarse a los cambios que, en ocasiones, él mismo propone para estar acorde con la realidad nacional.

En el plano parlamentario y hasta en el electoral, la reforma política, bien o mal, había avanzado entre 1976 y 1983. Pero Juchitán marcó los límites evidenciando que cuando los movimientos sociales logran una continuidad, se dan una *dirigencia* y ésta, de manera real o formal, se liga a un partido político y logra una voz en las cámaras; la tolerancia del régimen rápidamente se agota, como lo pusieron de manifiesto también, en aquel momento, los trabajadores de los sindicatos universitarios, la industria nuclear, la experiencia popular de la Universidad Autónoma de Guerrero, la corriente independiente de los normalistas, etcétera. Pero cuando aparte de todo lo anterior, el movimiento social y su *dirigencia* dan clara muestra de autonomía con respecto a las reglas electorales y parlamentarias e inclusive con respecto a los partidos políticos (por más de izquierda que puedan ser), la envoltura de la reforma política estalla: se despierta iracundo el monstruo de nuestra semioriental matriz autoritaria.

Esto es lo que sucedió en Juchitán; una vez que la COCEI tomó la presidencia, el gobierno central y el estatal comenzaron a actuar como un padre desesperado, lamentando su liberalismo. Así que la COCEI fue muy rápidamente llamada a cuentas: "aquí las tierras las reparto yo, y búscate otra fuente de legitimidad, si puedes, que no creo, porque como castigo por tus veleidades populistas te voy a reducir el presupuesto municipal al mínimo".

Luego entonces: ¿la COCEI tendió al encierro, o fue encerrada por el Estado en un localismo fundamentalmente cultural, que apela a las raíces, que "va al pueblo" y busca su ira, que se apoya cada vez más en las tradiciones y en el pequeño productor campesino? En otros términos, ¿se le dio oportunidad a la COCEI para ligar pasado con futuro, cultura con desarrollo económico?

### SUICIDAS Y ASESINOS, LA LÓGICA DE LAS LUCHAS SOCIALES EN MÉXICO

Sin duda, no se le dio a la COCEI la oportunidad para transformar su rica herencia de manera positiva y sin rupturas y para ligar nación y localismo, economía e ideología. No se le dio la oportunidad para hacer política, entendiéndola como la difícil construcción de las mediaciones, de los acuerdos, como el arte delicado de evitar la guerra. Por el contrario, se le empujó a hacer de la política un ejercicio inflexible de los principios, del desacuerdo, de la separación, de la ruptura, del purismo ideológico que conduce a la violencia. Parece entonces que la matriz de la acción social y política de nuestro país actuó, una vez más, en Juchitán: el asesino, en este caso el Estado autoritario, a pesar de sus declaraciones de reforma política acorrala a su víctima hasta convertirla en un suicida. Es debido a este doble impulso del suicida y el asesino que los movimientos sociales en México no pueden ser leídos como *una tendencia*, es decir, con

una cierta continuidad y permanencia en el tiempo, con formas de organización y contenidos ideológicos más o menos estables, etcétera, sino que dan la impresión de ser una infinidad de pequeñas explosiones en un magma ígneo de manera que cada pequeña explosión libera ciertas presiones, es cierto, pero no deja de ser un momento muy corto que se destruye en sí mismo sumamente localizado y sin conexión acumulativa con los otros fenómenos de su especie.

La radiografía de la acción social y política en México se asemejaría, entonces, a una lámina punteada, como una de esas fotografías de grano grueso, donde es muy difícil encontrar indicios de algún espectro lineal, de tendencias con cierta continuidad en el tiempo, como acontece con los movimientos sociales en otras sociedades.<sup>7</sup>

En efecto, en el caso de Juchitán el asesino actuó con una lógica implacable rehuyendo el hacer política, despojando de todos los medios económicos a su víctima y echando mano de la provocación. Para ello, instaló en aquel año de 1983, alrededor del escenario, a los más poderosos medios de difusión como fueron las cámaras, los micrófonos y los "autorizados" locutores de la televisión oficial y privada y tantos otros periodistas de la prensa nacional y extranjera.

Pero antes de analizar aquel desenlace, hagamos una digresión hacia un ejemplo en donde localismo y acoso provocan locura, en donde el atraso y la crisis económica combinadas con la falta de expectativas profesionales o políticas conducen a una vanguardia estudiantil al rechazo del desarrollo económico, de la modernización y del sistema político nacional, al localismo, a la hiperideologización, al purismo y, finalmente, a la violencia: el movimiento guerrillero peruano Sendero Luminoso adoptó la costumbre

<sup>7</sup> Sobre este punto véase nuestro trabajo, "Los trancos caminos de la oposición en México", en *Nexos*, septiembre, México, 1984.

de ahorcar perros para simbolizar sus fobias hacia el "perro" Deng Tsiao Ping que hizo fracasar la Revolución Cultural y ejecuta estos actos ante un campesinado que a menudo ignora qué es China.<sup>8</sup> China en el tiempo de Mao y el Perú actualmente, dicen los "senderistas", tienen en común el ser "sociedades semifeudales y semicoloniales" y la liberación será alcanzada cuando una guerra popular prolongada que tenga al campesino como columna vertebral dé el "asalto" a las ciudades. "Además de volar torres eléctricas y asaltar campamentos mineros para apoderarse de explosivos, Sendero Luminoso devastó las pequeñas propiedades agrícolas de Ayacucho (las grandes habían sido destruidas con la Reforma Agraria de 1960), matando o hirviendo a sus dueños" (*Ibidem*, p. 9). Los "senderistas" mataban animales, prendían fuego a las maquinarias y causaban daños por millones de dólares. "La verdadera razón de esto era la voluntad 'senderista' de cortar toda comunicación del campo con la ciudad, ese centro de corrupción burguesa al que un día el ejército popular vendrá a regenerar" (*Ibidem*, p.9).

Lo que precipitó la ruptura entre los indígenas más pobres y Sendero fue "el intento de los revolucionarios de aplicar en las 'zonas liberadas' una política de autosuficiencia económica y control de la producción. El objetivo: desabastecer a las ciudades e ir inculcando al campesinado un sistema de trabajo acorde con el modelo ideológico. Las comunidades reciben consignas de sembrar únicamente aquello que consumen, sin ningún excedente, y de cesar todo comercio con las ciudades. Toda comunidad debe autoabastecerse de manera que desaparezca la economía monetaria. Sendero Luminoso impone esta política con métodos contundentes. A principios de enero clausura a balazos la Feria del Lirio y dinamita la carretera (*Ibidem*, p. 11). Hay

<sup>8</sup> Al respecto, véase: "Historia de una Matanza", en *Vuelta*, núm. 81, agosto de 1983.

ejemplos aún más extremos de este fenómeno, como el movimiento mesiánico que tuvo lugar en la hacienda de Canudos al doblar el siglo y que el propio Vargas Llosa relata en *La guerra del fin del mundo*, o el Kmer Rojo con Pol Pot en Camboya.

Juchitán está muy lejos de esto y es, por lo demás, uno de los lugares mejor comunicados de la República Mexicana. La COCEI, además, ha rechazado claramente la violencia en cualquiera de sus formas; pero el ejemplo anterior viene al caso para recordar lo que sucede cuando a un movimiento se le impide una salida hacia adelante por una crisis económica, por un acoso político o por ambos, y pasan a primer plano el exceso de referencias a los orígenes y al fundamentalismo ideológico.

En el mes de septiembre, cuando los integrantes del Grupo de Investigación Social (GIS) realizamos nuestros dos primeros viajes a Juchitán, los líderes de la COCEI no habían abandonado el palacio municipal y no pensaban hacerlo a pesar de la destitución del ayuntamiento por los congresistas oaxaqueños a instancias del gobernador Pedro Vázquez Colmenares.

Para entonces, ya había quedado atrás el punto en el que estos líderes pudieron haber sido arrestados, desaparecidos o asesinados sin crear una reacción de incalculables consecuencias entre sus bases; sin duda, mucho más atrás había quedado el tiempo en el que, por medio del presupuesto o de la apertura y el diálogo, la dirigencia coceísta, o una parte de ella, pudo haber sido "integrada" a la política nacional o a la política estatal.

La situación de Juchitán pareció haber llegado a ese punto muerto al que llegan todos los movimientos sociales auténticos en México: el momento en que todos los espacios intermedios de negociación entre la acción social y las estructuras políticas establecidas institucionalmente son destruidos o desaparecidos. "El movimiento social y su dirigencia han sido arrinconados por la fuerza políti-

ca dominante a nivel nacional: las posibilidades de un suicido colectivo, que no será otra cosa que la represión brutal y generalizada del Estado, parecen estar en Juchitán, como en tantos otros Juchitanes, a la vuelta de la esquina", habíamos escrito en aquellos primeros informes de septiembre de 1983. Y añadíamos: "la dirigencia del movimiento y el movimiento mismo han sido empujados a cometer errores, ciertamente. Que no nos vengán a decir que con todo el poder de un gobernador y de un gobierno central, como el mexicano, no se han aprovechado las debilidades de un movimiento local y de una dirigencia susceptible de ser empujada a posiciones radicales con sólo anunciar, durante quince días, por más inconstitucional que parezca, que el presupuesto de ese municipio queda en suspenso hasta no demostrar cómo se han gastado los dineros en los últimos seis meses. Siendo que tales dineros ni siquiera habían sido entregados puntualmente y en los montos convenidos".

Dime cuántos años tienes (en la "real politike", en el PRI y en la biología) y te diré cómo te irrita.

Así pues, la Reforma Política es fundamentalmente una cuestión de honestidad y por encima de los preceptos jurídicos, y esto es lo que no se ha observado por parte del gran *educador* político que debiera ser el Estado en un sexenio de reforma moral. ¿Para qué traer a colación el rosario de fraudes electorales, sobre todo en los estados del norte de la República, que se desataron a partir de 1983 (ahí están los trabajos de Alberto Aziz sobre Chihuahua y de Carlos Martínez Assad sobre San Luis Potosí).

Pero no nos hagamos falsas ilusiones: la política es el "arte" de encontrar los puntos débiles del adversario y descargar ahí toda la capacidad ofensiva hasta acabar con él (al menos esa es la concepción de la política en un Estado autoritario).

¿La COCEI y sus bases tienden a refugiarse en su localismo, en su lengua, en su mitolo-

gía, en la reconstrucción de los símbolos como el palacio municipal, en la literatura, en la pintura? Muy bien, hay que impedirles a toda costa transformar pasado en futuro; primero, suspendiendo el presupuesto con el pretexto de una auditoría, luego, desconociendo al ayuntamiento por medio de una provocación, más tarde desmantelando a la COCEI con el arma de la represión y, finalmente, dándole al PRI todos los medios económicos para poner drenaje, nivelar las calles, pavimentar, construir un puente, acercar a la zona el mayor número de industrias posible, hacer evidente que el proyecto Alfa-Omega (que sustituiría en buena medida al Canal de Panamá con un acarreo ferroviario transístmico) redundaría en beneficio directo de los habitantes del lugar; ¿y cuántas otras cosas no son posibles cuando el Estado nacional, el de ochenta millones de habitantes, enfoca todas sus baterías sobre un poblado de sesenta mil almas mayoritariamente indígenas?

"Las persecuciones a que se vieron sometidos llevaron (a los narodnichestvo), a crear la organización secreta, Zemliá! Volia ("Tierra y Libertad"), pasando de la propaganda pacífica al terrorismo y la conspiración... Narodnaia Volia ('La Voluntad del Pueblo'), cometió varios crímenes políticos que culminaron el 13 de marzo de 1881 con el asesinato de Alejandro II" (Nota del traductor, en Walicki, 1970).

## SIGNOS DE AISLAMIENTO CORREGIDOS CON VISIÓN POLÍTICA

No está mal mostrar la tendencia, o una tendencia posible, con estas referencias al populismo ruso, pero es incorrecto confundir la realidad con sus posibilidades.

Es cierto que cuando la COCEI tomó la dirección política del municipio mostró sus puntos débiles con su localismo, su culturalismo exacerbado en detrimento de una inclina-

ción dirigente y su aislamiento hacia la política nacional.

Así, en agosto de 1981, el propio Leopoldo de Gives se deslindaba de la política del PCM argumentando que:

La COCEI decidió no participar en las elecciones presidenciales, un proyecto que no tiene perspectivas para el pueblo y crear ilusiones y esperanzas flacas para el pueblo [...] el PCM es un partido que se concreta sólo a las acciones electorales y no busca la ligazón como partido de masas; quizá eso se deba a la reforma política, pues ésta debilita a los partidos de oposición al abrirse mayor confusión, disputa de masas entre partidos de la misma ideología [...] Más aun, la COCEI se diferencia de otros organismos que juegan a la revolución como el PCM, el PRT, que no hacen labor de masas, ni organizan, ni movilizan y que va a ser el pueblo quien definitivamente dé las pautas (*Hora Cero*, Oaxaca, 5 de agosto de 1981).

El dirigente estatal del PCM contestó rápidamente:

En ningún momento el PCM es responsable de los movimientos políticos realizados por el presidente municipal de Juchitán, dado que el apoyo de este partido a la COCEI se concretó en registrar a la planilla que postuló a Leopoldo de Gives pues esa organización no cuenta con registro como partido político [...] El Partido Comunista no es responsable de los actos posteriormente realizados por Leopoldo de Gives.<sup>9</sup>

Las relaciones entre el PCM (el PSUM luego) y la COCEI mejoraron mucho posteriormente, más con la dirigencia nacional que con la estatal.

Y es que Leopoldo de Gives, a pesar de lo antes citado, entendía perfectamente la correlación de fuerzas nacional e internacional-

mente, al menos hacia mediados de septiembre de 1983:

Un gobierno socialista en el Istmo de Tehuantepec, con las experiencias nicaragüense, salvadoreña y guatemalteca algunos kilómetros más al sur es una posibilidad que hace temer 'contagios indeseables' a las autoridades militares priístas del estado de Oaxaca.

El temor de que la Coalición Obrera, Campesino, Estudiantil del Istmo (COCEI), pueda canalizar los sentimientos de rebelión existentes en la zona, empobrecida pero estratégicamente vital para el país desató la represión contra el ayuntamiento y la organización que gobierna Juchitán.

El Estado teme que el descontento rebase los límites políticos. Y la represión pretende orillarnos a ello. Pero nosotros entendemos que la lucha tiene que darse en el marco constitucional, mediante la movilización del pueblo, la acción política, la resistencia civil. Y eso es lo que estamos haciendo [...]

El radicalismo y las acciones armadas no tienen lugar en este momento. Pero tampoco permitiremos la mediatización de nuestra lucha.

La prensa estatal acusaba a los coceístas de estar armados y 'custodiados' por 'salvadoreños y centroamericanos subversivos'. De Gives no descarta la posibilidad de la intervención del ejército para desalojar al gobierno de la COCEI. Sabemos que puede ocurrir. De hecho el PRI ha invertido millones de pesos para destruir a la organización. El partido oficial favorece los proyectos de penetración transnacional en el Istmo. Hay un proyecto Alfa-Omega, establecido en Salina Cruz, para la imposición de un modelo de desarrollo basado en el despojo de tierras comunales, la explotación de la mano de obra barata del campesino de la región, la depredación de los recursos pesqueros. La COCEI es la

<sup>9</sup> *Oaxaca Gráfico*, 15 de septiembre de 1981; citado por Martínez, 1983:72.

única fuerza capaz de oponerse a este proyecto antipopular (Petrich, 1983).

En consecuencia, el problema de la COCEI no consiste solamente en el enfrentamiento cada vez más polarizado entre una dirigencia en peligro de acentuar su localismo, por un lado, y una economía capitalista y un Estado nacional dinámicos, por el otro.

Resulta obvio que "el radicalismo y las acciones armadas no podían tener lugar" en Juchitán, como decía De Gives, pero también era claro que una abierta represión no haría sino evidenciar la hipótesis: "Juchitán es al gobierno mexicano lo que Centroamérica a la Casa Blanca", y esto sería el pretexto servido en bandeja a Washington para dar al traste con la posición mexicana sobre la región; por algo se encontraban en aquel lugar los periodistas de *Times*, *Newsweek*, y tantos otros listos para decir: "¿por qué no manda México al grupo Contadora a Juchitán?".

Así que, se trataba, y se trata, de un problema sumamente delicado, pero por lo mismo, porque requirió de una estrategia paulatina, como el desmantelamiento de una bomba, se abrieron ciertas posibilidades para una solución política diferente de la tradicionalmente adoptada para "resolver" las luchas sociales en México. Quizás, especulábamos, en 1973 la solución sea alentar más la vía de los acuerdos sucesivos, con todos los peligros de la cooptación, evitándose la salida radical, que es la respuesta lógica de un movimiento acosado, pero mucho más en este ejemplo. Sería una verdadera innovación en nuestro país, pero ello requeriría de una cabal comprensión de la situación global por parte de todos los actores involucrados. Si el sindicato polaco *Solidarność* logró capotear una situación exterior igualmente adversa y una política interior extremadamente represiva, quiere decir que la política tiene los límites que la imaginación le impone. Las elecciones de aquel año nos convencieron de que una salida concertada estaba aún lejos de la imaginación política del gobierno; sin embargo, no hubo sangre.

## PRIÍSTAS ITINERANTES: TERCER VIAJE A JUCHITÁN

Durante los días 19 y 22 de noviembre, el Grupo de Investigación Social (GIS) realizó un viaje más de estudios a Juchitán. A nuestro regreso leímos atentamente la prensa capitalina. ¡Qué sorpresa! Todos los periódicos, incluidos los más progresistas, según el consenso, no se atrevieron a hablar por sí mismos. Aunque sus reporteros hayan estado en aquella ciudad, se concretaron a narrar las elecciones juchitecas citando a la Comisión Estatal Electoral, a los representantes del PRI o a los de la COCEI.

Nosotros pudimos comprobar muchas cosas pero no publicarlas en la prensa sino hasta un año después. Constatamos, por ejemplo, cómo en los barrios en donde el PRI tenía más seguidores, las zonas menos pobres, el número de votantes en cada casilla electoral era mucho más reducido y, para tal efecto, se habían instalado casillas auxiliares (18, 18A, 18B o 7, 7A, etcétera). Por el contrario, en los barrios más populosos y populares las casillas eran muy pocas, de manera que las colas se extendían más de una cuadra y los votantes, como es lógico, tenían que permanecer bajo el sol dos o tres horas, porque en aquel tumulto las broncas y las provocaciones interrumpían el proceso constantemente. Pero no se piense que con esto estamos limitándonos a llamar la atención sobre algún "índice de confort de clase en los procesos electorales". El asunto va más allá, y es que, en primer lugar, este mecanismo permitía que en las casillas que se encontraban en las zonas fundamentalmente priístas y poco controladas por la COCEI, las colas se acabaran en su gran mayoría hacia las dos de la tarde. Camiones de redilas cargados con priístas y seguidos o precedidos a prudente distancia por elementos de seguridad (policía estatal —los "azules"—, granaderos, porristas, policía vestida de civil y en ocasiones el

mismo ejército) se trasladaban de una a otra casilla de las que ya habían sido desocupadas y, provistos con varias credenciales, votaban en unas y otras de aquellas urnas mal concurridas. Mientras tanto, toda la atención de los coceístas y de los fotógrafos, camarógrafos y reporteros se dirigía hacia las casillas más populares. El dispositivo echaba mano, en ocasiones, de provocadores civiles (casilla 12, 10:40: dos priístas se trenzaron a golpes; uno se largó, el otro permaneció en el lugar con sangre en la cara mientras una típica mujer zapoteca trataba de llevarlo a su casa a empujones hasta que, después de un cuarto de hora y cinco vueltas del helicóptero a bajísima altura, los granaderos llegaron al lugar y en una nueva escena de "máscara contra cabellera" se lo llevaron en una *panel*). En otras ocasiones, el propio ejército amagaba con cerrar alguna casilla o simplemente invadía el local en donde estaban las urnas (casilla 19, 11:05). Inmediatamente, coceístas y miembros de la prensa eran "advertidos" del hecho y la movilización era generalizada hacia aquel punto. En la casilla 19, el ejército golpeó a dos periodistas (Heriberto Rodríguez y Julio Priego de la filmoteca de la UNAM) y, posteriormente, los condujo hacia un cuartel provisional en la propia ciudad de Juchitán. La liberación de los periodistas y todo el suceso distrajo a la prensa y a los dirigentes coceístas (entre ellos Polo de Gives y Daniel López Nelio), aproximadamente una hora.

El "Rojo" Altamirano (candidato a diputado local que provocó, el 31 de julio, dos muertos y, con ello, el desconocimiento del cabildo coceísta) hizo su aparición en la casilla que se encontraba en la mismísima Plaza de Juchitán, enfrente del palacio municipal que aún mantienen en su poder los miembros de la COCEI. Esa casilla, la número 6, que seguramente retuvo al 80% de los periodistas que fueron a cubrir la noticia, ya que sólo de ella hablaban, había sido objeto de provocaciones desde muy temprana hora; de he-

cho, se convirtió en una especie de Circo Romano que atrajo deliberadamente la atención de propios y extraños.

Pero decíamos que el "Rojo" Altamirano se dirigió hacia allá al filo de la una de la tarde y, después de armar una gran alharaca en el lugar en que se encontraban las urnas, golpeó al prestigiado fotógrafo Pedro Meyer —echando mano de sus guaruras—, con lo cual fue capaz de mantener, en el propio centro de la ciudad, a la prensa y a todos aquellos medios que hubieran podido detectar los pormenores de un fraude. Mientras tanto, los camiones de redilas continuaban llevando de una a otra casillas, ya semidesiertas, a las huestes priístas y, algo que también pudimos comprobar, comenzaron a aventurarse en las zonas de la ciudad que les eran claramente adversas. Total, si no lograban burlar la cola porque la resistencia popular es decidida, al menos entorpecían el de por sí lento proceso de votación (aunque se les vio votando entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana en las casillas 12, 19 y 9). Lo que no hay que dudar es que tenían credenciales de las casillas a las que acudían y que su nombre se encontraba en el padrón.

Por lo demás, la votación de estos contingentes y de todo mundo se hacía sobre las propias urnas, de manera que todos podían enterarse de la preferencia del votante (esto daba una idea de cómo se encontraba la votación antes del recuento, además de que las formas de intimidación se hacían factibles y los acarreados priístas no tenían manera de traicionar al partido).

Digamos que con el mecanismo descrito, los resultados de aquellas casillas que favorecían por muchas razones a los candidatos del PRI pudieron darse a conocer desde muy temprano. Así, los medios de comunicación masiva (el canal 13 en especial) estuvieron en posibilidad de "informar" inmediatamente sobre el "triumfo" priísta, que sin duda, a las 9 de la noche era arrollador, pues sólo seis casillas habían sido computadas. Todos sabe-

mos el impacto psicológico y político que implica un dato de esta naturaleza dado a conocer a toda la nación. Después de eso, es muy difícil gritar que hubo fraude, pero más difícil es hacerse oír. En contraste, la casilla 1 terminó el lunes a las cinco de la mañana y la casilla 12 a las 6 a.m.

Para dar un ejemplo de la magnitud del fraude a estas alturas, habría que narrar lo sucedido en el Fraccionamiento *La Riviera* (gente de recursos): en 1981, año en que asumió el cabildo la COCEI, las votaciones fueron 40 a favor del PRI contra 15 para la COCEI; mientras que el 20 de noviembre de 1983, el resultado fue de 206 para el PRI contra 15 para la COCEI.

Sin embargo, es necesario aclarar un punto: ¿cómo es que estos priístas itinerantes tenían tantas credenciales? y ¿cómo fue que la tinta indeleble que le aplican al sufragante se volvía invisible?

La segunda pregunta tiene una respuesta sencilla: la tinta "indeleble" se podía borrar con agua y jabón. Tampoco se perforaron las credenciales, aunque eso no hubiera servido de mucho para evitar el fraude.

La primera pregunta es más complicada porque nos aparta de los sucesos acaecidos el 20 de noviembre último para situarnos con mayor perspectiva en el tiempo.

El padrón electoral es una cosa muy compleja, pero a final de cuentas manejado desde el centro de la República. Hacia fines de 1980 y principios de 1981, cuando la COCEI tomó el cabildo, éste tenía ya muchas irregularidades. Esto condujo a que, durante la depuración del padrón en el presente año, se pudiera estudiar la composición coceísta y priísta casilla por casilla. Cuando un aparato centralizado tiene la oportunidad de llevar a cabo un estudio tan detallado, los resultados admiten algunas hipótesis: nadie duda en Juchitán que por medio de este mecanismo fue eliminado un 40% de los coceístas; gente perfectamente detectable en un pueblo de no más de cien mil habitantes. Esto no implica que no apare-

cieran en el padrón, basta simplemente con que un alto porcentaje de ellos se encontrara en una casilla lejana a su domicilio, de manera que después de haberse parado dos o tres horas al sol difícilmente se está dispuesto a volver a hacer la cola a cinco, diez o veinte cuadras de distancia del domicilio particular, por muy coceísta que se pueda ser. El propio diputado federal de la COCEI-PSUM, Héctor Sánchez, así como su hermana y su madre aparecían en casillas al otro lado del poblado, y eso fue detectado después de una larga búsqueda en las listas.

En cualquier caso, Daniel López Nelio (candidato a presidente municipal de la Coalición) tenía en sus manos, en la mañana del lunes 21, cerca de cien credenciales de coceístas que no pudieron votar porque sus nombres simplemente no aparecieron en el padrón, en ninguna casilla. A muchos otros coceístas no les llegaron sus credenciales aunque sus datos aparecieran en el listado (la COCEI hablaba de dos mil casos como éste). Por el contrario, y como ya indicábamos, una sola persona con muchos nombres impresos en varias credenciales y con límpidos pulgares pudo haber demostrado en numerosas casillas su legalidad polifacética (un representante de la casilla 6A, David Velázquez Figueroa, estaba azorado al ver que su propio nombre y referencias se encontraban en la credencial con que una persona se presentó a votar).

Todo esto pudo lograrse sólo con una gran manipulación del padrón electoral, mandando nombres y direcciones por una vía privada y recibiendo también por esa vía credenciales que fueron distribuidas por el PRI a sus seguidores seguros. Pero el dispositivo fue acompañado por el factor sorpresa: sólo un mes y medio antes de la fecha de la votación, se hizo público que habría elecciones y el *Comité Municipal Electoral*, que nombra las autoridades de las casillas y la ubicación de éstas, fue instalado apenas tres días antes de la fecha de los sufragios. No pudieron ser discu-

tidas, así, las reglas de funcionamiento, el número de casillas auxiliares, etcétera.

La COCEI se queja de que desde los primeros días de agosto, en que fue desconocido el ayuntamiento, se vio obligada a librar una batalla en varios frentes que la condujo a descuidar totalmente las precauciones y la estrategia electoral. Y es que no sólo la Comisión Federal Electoral fue involucrada en la estrategia fraudulenta desde la destitución del cabildo, sino que lo fueron también la Secretaría de Educación Pública, que impulsó la reparación de las escuelas; la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que gastó 70 millones en una limpieza apresurada y técnicamente deficiente de los canales de riego, ya que se entregó dicha suma al PRI de Juchitán para que diera empleos, comprando adeptos de esta manera (se hablaba incluso de que el Registro Civil también cooperó, pues se vio a jóvenes de 15 años de edad en la votación presentando actas de nacimiento debidamente firmadas). Finalmente, la semana anterior a las elecciones, el gobernador de Oaxaca, Pedro Vásquez Colmenares, estuvo en varios puntos de Juchitán colocando primeras piedras de obras que, según anunció con gran estruendo, tendrían un valor de 280 millones de pesos a su término.

Todos estos frentes de lucha, más las provocaciones cotidianas, como los amagos de toma del palacio municipal, el robo de camiones del ayuntamiento, etcétera, mantuvieron a la COCEI distraída y dejaron el espacio libre para montar la estrategia electoral fraudulenta.

La movilización que configuró el fraude del día 20 de noviembre recibió el nombre de *Operación Conejo*, según se podía escuchar junto al palacio, en un radio de onda corta que interceptó en algunos momentos los informes de los coordinadores del plan.

Sin duda, todo aquello se encontraba al cuidado de expertos militares o civiles de una altísima eficiencia. En distintos momentos se citaron, en las casillas conflictivas, el ejército

(con uno o más pelotones), los granaderos (que son la policía del estado), varias patrullas y *Jeeps* con equipos de radio, agentes de seguridad vestidos de civil en potentes autos o a pie transmitiendo órdenes por radio-transmisores, camiones de redilas repletos de porristas y helicópteros sobrevolando a baja altura los sitios con problemas.

## JUCHITÁN EN LA GEOPOLÍTICA DEL HAMBRE Y DE LA GUERRA

Uno se pregunta si cada vez que el Estado-PRI quiera recuperar un municipio de manos de la oposición será montado un operativo de esta magnitud.

La verdad es que quizás se pueda echar mano de todo ello con diferente intensidad, pero en Juchitán el problema es otro y en eso radica la tragedia de la COCEI: Juchitán domina una de las entradas del Istmo de Tehuantepec, y el Istmo constituye el único cordón sanitario hacia el norte en caso de una generalización del conflicto centroamericano (sólo doscientos kilómetros sin selva ni montaña). El Istmo constituye, también, un estrecho que separa los mantos petrolíferos mexicanos del resto del país y de la capital política y, en fin, un canal natural para pasar de uno a otro océanos mucho más seguro que el Canal de Panamá (dos enormes puertos conectados por modernos ferrocarriles y con veloces sistemas de carga y descarga constituyen el Proyecto Alfa-Omega).

La COCEI está, pues, en Juchitán, y Juchitán en un sitio estratégico tanto para los estadounidenses como, naturalmente, para el Estado y la soberanía nacionales. Por eso decíamos que si las cosas pasaban a mayores en Centroamérica, Reagan podría haber encontrado un pretexto en el ayuntamiento popular coceísta para intervenir en esa zona.

Por su parte, el gobierno mexicano ha tenido que echar mano de este enorme, pero sutil, mecanismo de fraude, porque había que

desalojar a los coceístas en una operación sin sangre. De otra manera, la política exterior mexicana decíamos, quedaba en *jaque*.

Ésta es pues la situación que priva en un poblado en donde los caciques y acaparadores del lugar, el autoritarismo ancestral del Estado mexicano y la "geopolítica Este-Oeste" son los titanes contra los que tiene que luchar un grupo de jóvenes progresistas y democráticos que ha venido siendo acosado despiadadamente y que ha tenido la inteligencia, hasta ahora, de no recurrir a los métodos violentos.

La pregunta que tenemos que hacernos es si está justificado el fraude en estas condiciones (y el silencio de los medios de comunicación de masas), o si el propio gobierno mexicano y el PRI encontraron una justificación perfecta en los considerandos aludidos para derrocar, en contra de la Reforma Política, del pretendido impulso al municipio y de la renovación moral, a un ayuntamiento apoyado por un partido de izquierda, es cierto, pero con una gran legitimidad entre sus bases. Una legitimidad que de no habérselo negado a la COCEI el apoyo financiero y político desde el inicio, constituiría hoy la mejor defensa popular para la soberanía de nuestro país en aquella región (y no por la fuerza de la violencia sino por la del consenso).

En los quince días posteriores a las elecciones de 1983, los coceístas decidieron establecerse en huelga de hambre enfrente del palacio nacional, aunque el diario *Excelsior* se apresuró a declarar que los huelguistas "están consumiendo tacos y refrescos [...] y aceptaron —no sin que antes les rogaran demasiado— tomarse una cerveza" (23 de noviembre).

Lo que hay que destacar es que, a pesar de todo lo aquí narrado, el PRI "ganó" las elecciones con 8 927 votos contra 7 394 de la COCEI, es decir, sólo hubo una diferencia de 1 533 votos.

Con esta política, se preguntaban analistas sociales, periodistas y buena parte de la opinión pública, ¿no se estará dando un paso

firme hacia la centroamericanización del Sureste?, y otra pregunta. ¿sería imposible encontrar otra vía para resolver estos problemas?, por ejemplo, ¿una vía que podríamos denominar cardenista, apegada a nuestra herencia popular y nacional?

## ¿CENTROAMERICANIZACIÓN DEL SURESTE?

El comunicado de la COCEI enviado al Distrito Federal, corroborado por los grandes diarios nacionales, decía:

"Hoy martes trece de diciembre 1983, a las tres de la mañana, quinientos soldados vestidos de policía preventiva (azules), *armados con palos* y lanzando gases lacrimógenos, entraron en el palacio municipal encontrando la resistencia de más de doscientos campesinos". Ese primer embate fue rechazado, sin duda, por las características bien pertrechadas que ofrece el palacio. "Entonces los falsos azules fueron reforzados por soldados en uniforme militar quienes entraron disparando".

El documento habla de 85 detenidos, pero no hace mención a heridos graves. Agrega que los elementos del ejército se retiraron después de tomado el palacio y dejaron a "los azules" custodiando el inmueble, pero que unas horas después, ante una muchedumbre de seis mil personas congregadas en la plaza y amenazantes, los militares hicieron acto de presencia nuevamente y esta vez en la balacera resultaron heridos dos menores. En seguida, se inició el patrullaje de la ciudad en vehículos repletos de policías y soldados conducidos a gran velocidad; la población fue obligada a mantenerse en sus domicilios. Se hablaba, además, de otros 35 detenidos en Ixtepec y demás pueblos del Istmo.

14 de diciembre, "más de cien desaparecidos en ataques del ejército a manifestantes [...]" Rojo" Altamirano y Javier Fuentes (diputado y presidente municipal electo res-

pectivamente), conminan al pueblo a que no salga a la calle [...] Los priístas protegidos por el ejército se posesionaron de la biblioteca popular "Prof. Víctor Pineda Henestrosa".

Si debiéramos hacer un balance de lo sucedido hasta 1983, habría que decir que la matriz centroamericana de la sociedad y de la política se había instaurado en menos de cuatro meses en la mismísima cintura de la República mexicana: el Estado, apoyado en su partido y en las fuerzas militares, se coaligaba con los caciques, los ricos comerciantes, los acaparadores, los patrones y los funcionarios enriquecidos ilícitamente para intentar preservar un sistema social, político y cultural en descomposición.

Este estado de cosas llevó al antropólogo Arturo Warman a afirmar en una conferencia en 1983, que en Oaxaca el PAN y la derecha se habían fortalecido en el propio seno del PRI: "El PRI del estado está más a la derecha en Oaxaca que el PAN en Sonora", agregó.

Sin embargo, las cosas no evolucionaron hacia un endurecimiento político de manera mecánica. Es cierto que la federación tuvo que entregarle la municipalidad a las fuerzas conservadoras locales amparadas en el PRI, pero también resultó claro que los recursos económicos, así como la planificación del gasto que tendrían lugar inmediatamente después, parecieron derivar de un aparato con un alto grado de racionalidad, como si se tratara de una pieza más de la estrategia del Estado federal para desactivar a la organización cocéista.

Hay que mencionar que de la lista de desaparecidos todos fueron localizados aunque algunos cocéistas, entre ellos Polo de Gives padre y Carlos Sánchez, permanecieron en las prisiones de Salina Cruz y de Tehuantepec hasta 1985. Pero quizás lo que más desvirtuó la lógica de la centroamericanización (sin eliminarla) fue la siguiente noticia dada a conocer por el *Excelsior* el 5 de febrero de 1984:

se destinarán 300 millones de pesos autorizados por la federación [...] para obras de beneficio social en esta población (Juchitán), sus secciones y agencias municipales [...] Se realizarán obras en los municipios para generar empleos, se dotará de equipo urbano a las comunidades [...] El gobierno estatal realizará el adoquinado del centro de la ciudad con inversión de 28 millones de pesos [...] la construcción de instalaciones deportivas en las secciones cinco, siete y ocho [...] (otros 28 millones), la segunda etapa de la construcción de la clínica-hospital con 66 camas con costo de 60 millones [...] el puente *cheguigo* con inversión de 40 millones, la construcción del mercado con 15 millones [...] alumbrado público en las principales calles de la ciudad (10 millones), arreglo del parque Benito Juárez y Revolución (5 millones) [...] Remodelación y ampliación del palacio municipal (25 millones) [...] Pavimentación de calles (20 millones). Instalación de un basurero municipal (6 millones) [...]

Vásquez Colmenares anunció, asimismo, que por decisión presidencial el Istmo de Tehuantepec quedaba incorporado al programa integral de desarrollo de la región sureste del país.

No cabe duda de que sin la existencia de la COCEI y el combativo apoyo de su base popular nada de esto se hubiera logrado. En esa medida, los millones mencionados constituyen triunfos cocéistas aunque sean administrados por el PRI.

Pero estos logros no aseguran la continuidad de la organización, y sin la presión constante de la COCEI y de sus bases, esos millones se esfuman. La Coalición debía tener, pues, una respuesta ante el panorama que se le planteó a partir de 1984. Ya que "recuperar el ayuntamiento no es posible ahora", como lo afirmó el diputado federal Héctor Sánchez, el repliegue de la organización debe ser hecho observando dos dimensiones: la de la conservación de las alianzas con los sectores

campesinos, obreros y populares urbanos, y la del paso de la política desde el control de los aparatos a la política desde la sociedad misma que puede llegar a convertirse en un asedio paulatino al cabildo priísta. Veamos una por una.

1) En lo que respecta al primer punto, ¿será capaz la COCEI de conservar sus bases urbano-populares ante un embate de inversiones federales, estatales y municipales como el descrito?

Sin duda, la respuesta a este interrogante depende de la política que se adopte hacia la cuestión agraria. Por más que se invierta en el mejoramiento de la ciudad de Juchitán, la COCEI seguirá manteniendo de su lado a los sectores populares mientras la tenencia de la tierra no sea modificada. Y aquí está lo paradójico, pues atacar el problema agrario sería atacar a quienes ocuparon el Palacio Municipal desde 1984 y a los sectores sociales que los apoyaron en su campaña anticocéista: sería ir contra el PRI, como tirar al niño con el agua de la bañera. Así pues, no es que no haya recursos económicos para expropiar o indemnizar a terratenientes en esa región geopolíticamente clave del país, sino que eso implicaría atacar al andamiaje de poder político que se deriva de la concentración de la tierra. En esa medida, el Estado federal terminaría por realizar los objetivos de la COCEI como precio necesario para acabar con la COCEI misma, y en contra del PRI del lugar.

Hemos regresado por otro camino al problema de siempre: sin la referencia a la tierra, al pasado, a la herencia cultural, no hay COCEI. Detengámonos en la evolución del primero y el más moderno de los aliados de la tríada cocéista: los obreros.

Hacia finales de los años setenta y en parte como respuesta al florecimiento de la COCEI, la inversión pública federal se objetivó en la región en dos grandes operaciones industriales: la Refinería del Pacífico en Salina Cruz y el Ingenio Azucarero López Portillo en el municipio de Espinal, a 8

kilómetros de Juchitán. Como establecen Marie-France Prévot-Shapira y Héléne Rivière D'Arc, "algunos grupos, en esta última ciudad, rechazaron la instalación del ingenio cuya presencia comportaba el riesgo de decapitar el movimiento comunal" (Prévot y Rivière D'Arc, 1983). Por su parte, el Estado, a pesar de que la extensión agrícola era mayor en Juchitán y su nivel de mecanización más elevado, evitó los riesgos que el movimiento reivindicativo de la COCEI implicaba y estableció el ingenio en el municipio más dócil de Espinal, en donde una pequeña élite rural ligada a los organismos oficiales (CNC, CNPP y banca ejidal) aseguraba una estructura social más estable (*Idem*).

Pero en general, tanto en el caso de la refinería como en el del ingenio, la mano de obra empleada provino del exterior de la región casi en su totalidad (Madero, Ébano, Cerro Azul, por parte del sindicato petrolero, y Martínez de la Torre por el sindicato azucarero).

Vale la pena hacer notar hasta qué grado una organización como la COCEI, e incluso las organizaciones oficiales y la estructura misma del poder local, no fueron capaces de negociar por su conducto ni el más mínimo porcentaje de las 1 700 plazas permanentes de la Refinería del Pacífico (todo se negoció en el nivel nacional entre PEMEX y la sección 1 del STPRM de Ciudad Madero). Es cierto, por lo demás, que la distancia entre la industria petrolera y el campesinado de la región es tan grande que la COCEI se encontró en gran desventaja para establecer cualquier injerencia. Pero lo que sí es alarmante es enterarse de que cada año el ingenio paga el viaje a quinientos trabajadores que vienen de las zonas azucareras de Chiapas, Veracruz, Guatemala y sobre todo de Michoacán. Así se evita la repetición de lo acontecido en 1974, cuando los trabajadores del arroz fueron organizados por la COCEI.

Es lógico que con el tiempo los habitantes de la región hayan ido exigiendo una mayor

injerencia en estos enclaves industriales. Pero los organismos encargados de renegociar la cuota de plazas entre "extranjeros" y lugareños son naturalmente los más cercanos al PRI y a la estructura política oficial. De esta manera, la COCEI tiende a quedar en posición desventajosa pues podrá apoyarse cada vez menos en el descontento provocado por la exclusión de los lugareños, que es una dimensión que coincide con lo étnico.

Las autoras mencionadas dicen: "Hagamos notar que los trabajadores de PEMEX, fuertemente integrados, son totalmente impermeables a las consignas de la COCEI". Esta organización "no ha podido penetrar nunca en Salina Cruz salvo durante el período de construcción de la planta cuando participó en una huelga inmediatamente reprimida (mayo de 1976)". Pero esta acción resulta pálida comparada con:

las realizaciones municipales, que son fácilmente confundidas con las Obras Sociales Revolucionarias de la sección 38 del STPRM, y que permiten al discurso del poder contrastar a Salina Cruz, la ciudad del progreso, con Juchitán, la ciudad caótica, sucia, apoltronada en la tradición. Y lo mismo sucede en Espinal, en donde las autoridades municipales han logrado que el ingenio financie sus policías, camiones, material de construcción destinado a la renovación del Palacio Municipal, etcétera (*ibidem*, p. 70).

Así, el PRI resiste, si bien la COCEI, "el bastión de oposición, encuentra su fuerza en su capacidad histórica de movilización campesina. Pero el pasado reciente de México muestra hasta qué punto la complejidad de las cuestiones agrarias conduce casi siempre a obscuras negociaciones y compromisos sin fin. Dividir los movimientos es un mecanismo del que el PRI no ha dejado de echar mano y ello le permite satisfacer provisionalmente algunas reivindicaciones. Podemos preguntarnos desde ahora, concluyen las autoras, cuál será el futuro de la COCEI en el caso de

que los campesinos logren recuperar las tierras comunales" (*Ibidem*, p. 71).

Digámoslo entonces de manera más directa: las ligas de la COCEI con el movimiento obrero son, si no malas, completamente irrelevantes; sus bases son campesinas y populares urbanas en una ciudad vuelta completamente al campo. La pregunta es pertinente: ¿cuál será el futuro de la COCEI si los campesinos recuperan las tierras comunales, si el movimiento obrero les es ajeno, si no ha sabido ganar a los sectores medios, si, en resumen, el futuro no les pertenece?

2) Se abre entonces el otro interrogante de éstas conclusiones: ¿será capaz la COCEI de romper un segundo principio impuesto por la lógica de las luchas sociales en México? Es decir, la COCEI ha puesto claramente de manifiesto que en una matriz societal en donde las luchas colectivas son rápidamente truncadas, ella ha sido capaz de animar un movimiento que dura ya diez años; la pregunta que procede es si este movimiento social y su singular organización será capaz de atender contra la segunda regla de oro de la acción en México, es decir, si será capaz de renunciar a ir en busca del vértice de la pirámide del poder político (que en cierta forma ya ocupó al obtener el cabildo), y regresar a una posición en la que se ejerza la política y se haga política en la sociedad civil y desde ella. ¿Será la COCEI capaz de convertirse en una organización "basista"? ¿Podrá regresar a sus orígenes, a los comités de sección como en 1977-80? ¿Logrará ir y venir sin traumas entre lo social y el poder político que otorgan los aparatos gubernamentales? ¿Será capaz de sobreponerse premeditadamente a su época gloriosa, a los grandes momentos en los que llegó a ser noticia reiterada de primera plana en la prensa nacional e incluso en la prensa extranjera?

A partir de marzo de 1984, comenzaron a llegar noticias desde Juchitán: la COCEI se ha reagrupado sigilosamente en los comités de sección, intenta aislar al palacio municipal,

hoy priísta, haciendo renacer, recreando, la política en los mismos barrios. Las fiestas, la expresión social, política, cultural, histórica y prospectiva se han vuelto el espacio privilegiado de las expresiones populares coceístas, hoy que la calle y todos los lugares públicos han sido privatizados por un PRI auxiliado por el ejército y las policías.

Por ello, quizás los grandes principios de cómo hacer política deben supeditarse a las posibilidades reales de la política: si un planteamiento más *pesumista-leninista* (fortaleza de un partido jerarquizado que conduce a la toma del Estado) era más coherente con una COCEI que ocupaba los pasillos y los salones de palacio, una concepción "basista", que se mueve por los canales soterrados de la sociedad, que evita la confrontación en un terreno desventajoso (local, nacional e internacionalmente), resultó ser una concepción adecuada en los momentos de proscripción, de persecución y de estado de sitio.

Es lógico entonces que la COCEI haya nacido, en tanto hija legítima del 68, con una concepción leninista (conciencia exterior a la masa, alta jerarquización y confrontación alternada con clandestinaje—como *Punto Crítico* o tantos otros grupos hijos de la herencia), que adoptara luego un "leninismo-parlamentario", conforme sus relaciones con la masa se profundizaban y el sistema político se flexibilizaba, y que hoy parezca evolucionar hacia un socialismo de base. Quizá entonces las propuestas que entienden a la democracia como la creación de identidades más restringidas y no tan vueltas al Estado y todos aquellos planteamientos no lejanos a la línea polaca de *Solidaridad* o a la de los metalúrgicos paulistas (perdón por la falta de ejemplos alternativos) adquieran una gran pertinencia en este momento. Pero repetimos, si la COCEI logra también esto último, habrá roto para su bien y para el bien de la política de oposición en México, dos grandes adversidades de las luchas sociales: la discontinuidad y la sobrepolitización (en el sentido

de que todo está vuelto y tiende hacia el lugar del Estado). Ojalá pueda superar también, conservándolo, lo que es el gran peligro de la lucha coceísta: la autocontemplación en su pasado glorioso.

En septiembre de 1986, no sin haber sido objeto de innumerables ataques desde el cabildo priísta, se les presentó a los coceístas la oportunidad de retomar los aparatos de conducción de la comunidad en el momento de las elecciones municipales. Nuevamente, por medio de mítines, huelgas de hambre y marchas en Juchitán y en el D.F. se logró impedir que por medio del fraude se impusiera como presidente municipal al priísta Vicente Reyes Salinal. Un elemento relativamente externo, como fue el cambio de gobernador en el estado, permitió que, para conjurar el peligro de una polarización y una confrontación entre juchitecos, el Congreso Estatal, por iniciativa de Heladio Ramírez, flamante ejecutivo de la entidad, designara un Consejo paritario PRI-COCEI para gobernar durante tres años, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley Orgánica Municipal.

Héctor Sánchez, dirigente de la COCEI, afirmaba categóricamente:

Hoy lunes 15 de diciembre, entrarán nuevamente las banderas, los huipiles y los paliacates rojos al palacio municipal de Juchitán [...] La política de diálogo inaugurada por el gobernador del estado, Heladio Ramírez López, busca una distensión y conciliación de la comunidad juchiteca [...] La COCEI subirá nuevamente a palacio para desalojar pacíficamente a la fuerza pública que nada tiene que hacer ahí, pues Juchitán no es un cuartel (*La Jornada*, 15 de diciembre de 1986, reportaje de Rafael Bermúdez).

Heladio Ramírez, en esa su primera gira de gobierno, dio posesión al Consejo compuesto por tres coceístas, entre ellos Óscar Cruz, tres priístas y presidido por Felipe Martínez. Ante miles de juchitecos, el gobernador dijo: "No pido renuncias ideológicas, si-

no que todos participen desde sus trincheras políticas en la construcción de un municipio mejor, más justo, moderno, democrático y desarrollado" (*La Jornada*, 16 de diciembre

de 1986). Óscar Cruz hizo una historia de las luchas de su organización y señaló que la presencia de la COCEI en ese Consejo obedecía a la voluntad política de discutir.

## BIBLIOGRAFÍA

Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI), "La tenencia de la tierra y el movimiento campesino en el Istmo de Tehuantepec", documento inédito, s/f, 18 p.

De la Cruz, Víctor, "Rebeliones indígenas en el Istmo de Tehuantepec", inédito, s/f, apoyado en Francisco del Paso y Troncoso, *Papeles de Nueva España*, t. IV, Madrid, ed. Facsimilar, 1905.

Gutiérrez, J. Roberto, "Juchitán, municipio comunista", en *Revista A* (Azcapotzalco), núm. 4, vol. II, septiembre-diciembre de 1981.

Martínez, Felipe, "El crepúsculo del poder: una crisis política y un ayuntamiento de oposición", Oaxaca, Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Benito Juárez, Febrero de 1983, mimeografiado.

Petrich, Blanche, "De Gives: las autoridades de Oaxaca temen un gobierno socialista en el Istmo de Tehuantepec", en *Unomásuno*, México, 9 de septiembre, 1983.

Prévot, Marie-France y Hélène Rivière D'Arc, Cuadernos del Instituto de Altos Estudios para América Latina, París, 1983

Toledo, Francisco, "El futuro del Istmo y de la Presa Juárez" (entrevista a Arturo Warman), en *Guchachi Reza* (La iguana rayada), núm. 15, publicación del H. Ayuntamiento Popular de Juchitán, Junio de 1983.

Walicki, Andrzej, "Rusia", en Ghita Ionescu y Ernest Geller (comp.), *Populismo: sus significados y características nacionales*, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1970.



## Índice

Presentación	5
<b>COYOTE ATRAPA A CONEJO: Poder regional y lucha popular —el desconocimiento del Ayuntamiento de Juchitán en 1983</b> Moisés J. Bailón Corres	7
El contexto de estudio	9
I. La hegemonía del movimiento social	13
II. La caída del ayuntamiento	33
III. El poder regional: entre el poder central y el movimiento social	51
Bibliografía	63
<b>JUCHITÁN: La cólera del régimen (crónica y análisis de una lucha social)</b> Sergio Zermefio	65
Bibliografía	97



**Juchitán: Límites de una  
Experiencia Democrática  
se terminó de imprimir en  
Marzo de 1988 en los talleres de  
Multidiseño Gráfico, S.A.  
La edición consta de 2000  
ejemplares más sobrantes  
para reposición.**

# UNAM

## FECHA DE DEVOLUCIÓN

El lector se obliga a devolver este libro antes del vencimiento de préstamo señalado por el último sello.

28 MAR 2005



UNIVERSIDAD NACIONAL  
AVENIDA DE  
MÉXICO

JL1299  
.J83  
B35



UNAM

36125

INST. INV. SOCIALES

JL1299.J83 BAILON CORRES. MOISES J. 557248/036125  
B35 JUCHITAN: LIMITES DE UNA  
036125 EXPERIENCIA DEMOCRATICA

# sociología industrial

1. Conflictos laborales en México  
1928-1929  
Rafael Loyola Díaz
6. La industria automotriz  
en México  
Margarita Camarena Luhrs

# sociología política

5. Radiografía de la Iglesia  
en México  
Patricia Arias, Alfonso Castillo  
y Cecilia López
15. Juchitán: límites de  
una experiencia democrática  
Moisés J. Bailón Corres y Sergio Zermeño

# sociología urbana

3. Estado, vivienda y estructura  
urbana en el Cardenismo  
Manuel Perló Cohen
8. Carácter y contradicciones de la  
Ley General de Asentamientos  
Humanos  
Juan Manuel Ramírez Saiz
9. La sociedad de la basura:  
caciquismo en la ciudad  
de México  
Héctor F. Castillo Berthier
14. El transporte  
Margarita Camarena Luhrs



El istmo oaxaqueño forma parte de una región llamada Istmo de Tehuantepec, abarcando los distritos rentísticos y judiciales de Tehuantepec y Juchitán, los más grandes del estado de Oaxaca, entre otros municipios.

El problema social más importante en Juchitán, el eje de lucha de la COCEI, es el relacionado con la reproducción de las condiciones materiales de vida de la sociedad local: la tierra comunal. El problema agrario se ha expresado en las elecciones municipales y, principalmente, en el control del comisariado comunal de Juchitán. La lucha por la recuperación de las tierras comunales cobró mayor fuerza con la aparición de la COCEI, y el Estado ha procedido reprimiendo sus movimientos o bien posponiendo indefinidamente la elección del comisariado.

Sergio Zermeño es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y forma parte del Grupo de Investigación Social (GIS), al igual que Víctor García, quien participa activamente en el estudio sobre Juchitán, Laura Faxas (FLACSO), Raúl Fernández, Ma. Laura Tarrez y Francisco Zapata.

Moisés J. Bailón Corres pertenece a la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca.